

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN "A"

Bogotá D.C., once (11) agosto de dos mil veintiuno (2021)

Magistrada Ponente: ELIZABETH CRISTINA DÁVILA PAZ

Referencia: Exp. N° 250002324000200800423-01

Demandante: LABORATORIOS LTDA DE BOGOTÁ

Demandado: ESE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, EN
LUQUIDACIÓN Y OTROS

**MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO**

Asunto: Ordena el pago de gastos adicionales

De conformidad al informe rendido por el Contador de la Sección Primera de esta Corporación se observa que existe un saldo correspondiente al valor de los gastos ordinarios del proceso, por un valor de ochenta y un mil trescientos pesos (\$81,300); por tal motivo, se ordena requerir al apoderado de la parte actora para que consigne el saldo en mención a la correspondiente cuenta asignada a los gastos del proceso.

Una vez consignados el saldo anterior debe darse cumplimiento a lo ordenado en el inciso segundo del auto de 12 de abril de 2021; esto es, archivar el proceso y devolver los anexos de la demanda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ELIZABETH CRISTINA DÁVILA PAZ
Magistrada

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN "A"

Bogotá D.C., once (11) agosto de dos mil veintiuno (2021)

Magistrada Ponente: ELIZABETH CRISTINA DÁVILA PAZ
Referencia: Exp. N° 250002324000200900289-01
Demandante: BBVA COLOMBIA S.A.
Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto: Obedézcase y cúmplase.

Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en providencia de 21 de enero de 2021, mediante la cual confirmó la sentencia de 23 de febrero de 2012, proferida por este Despacho, mediante la cual se negó la prosperidad de la excepción inepta demanda propuesta por la demandada y se negaron las pretensiones de la demanda (fs. 119 a 150 cuaderno de apelación de sentencia).

Ejecutoriada la presente providencia darse cumplimiento al numeral cuarto de la sentencia de 23 de febrero de 2012; esto es, archivar el expediente y devolver los anexos; de igual manera, observa el Despacho a folio 154 del expediente hay un informe del Contador de la Sección Primera de este Tribunal, mediante la cual advierte sobre la existencia de un saldo correspondiente a los gastos del proceso por un valor de veintiún mil cuatrocientos pesos (\$21,400), los cuales deberán ser consignados por la parte actora a la cuenta correspondiente; por tal motivo, requerirse al apoderado de la parte actora para que realice el correspondiente pago y allegue la constancia del cumplimiento de la carga impuesta.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ELIZABETH CRISTINA DÁVILA PAZ
Magistrada

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN “A”

Bogotá D.C., once (11) agosto de dos mil veintiuno (2021)

Magistrada Ponente: ELIZABETH CRISTINA DÁVILA PAZ

Referencia: Exp. N° 250002324000201100765-01

Demandante: JESÚS ÁNGEL FIERRO ÁVILA

Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD

Asunto: Obedézcase y cúmplase.

Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en providencia de 26 de noviembre de 2020, mediante la cual confirmó la sentencia de 24 de octubre de 2014, proferida por la Sección Primera, subsección “C”, en Descongestión, mediante la cual se declaró no probada la excepción de ineptitud de la demanda propuesta por los coadyuvantes de la parte demandada y se declaró la nulidad del acuerdo N° 009 de 22 de agosto de 2011 del Concejo Municipal de Facatativá (fs. 116 a 130 cuaderno de apelación de sentencia).

Ejecutoriada la presente providencia dese cumplimiento al numeral cuarto y quinto de la sentencia de 24 de octubre de 2014; esto es, archivar el expediente y devolver los anexos; de igual manera, observa el Despacho a folio 136 y 137 del expediente informe del Contador de la Sección Primera de este Tribunal mediante la cual advierte sobre la existencia de remanentes; con respecto a lo anterior, se ordena a la Secretaría de la Sección la entrega de los remanentes a la parte demandante.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ELIZABETH CRISTINA DÁVILA PAZ
Magistrada



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO SUSTANCIACION N° 2021-08-307 NYRD

Bogotá D.C., Doce (12) de Agosto de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN: 25-000-2341-000-2014-01492-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S- CETESA.
DEMANDADO: MUNICIPIO DE SUESCA
TEMA: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA
ASUNTO: Fija gastos periciales

MAGISTRADO: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Vista la constancia secretarial que antecede el Despacho procede a impartir el impulso procesal respectivo.

Mediante auto de sustanciación N° 2021-04-132-NYRD se designó a JOSÉ ARMANDO PALOMA SILVESTRE como perito a quien tomó posesión del cargo el día 5 de agosto del mismo año.

Ahora bien el Despacho procede a fijar la suma de un millón de pesos m/cte (\$1.000.000) como gastos de pericia, los cuales deberá sufragar la parte demandante y del mismo modo, deberá aportar constancia de pago al expediente dentro del término de diez (10) días, que se contarán desde la ejecutoria de esta providencia.

En ese contexto se otorgará al perito el término de cuarenta (45) días, para rinda el dictamen pericial a él encomendado, los cuales empezarán a correr una vez sean sufragados los referidos gastos periciales.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO.- - FÍJAR como gastos provisionales de pericia el valor un millón de pesos m/cte (\$1.000.000), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. La parte demandante deberá aportar constancia de pago al expediente dentro del término de diez (10) días, contados desde la ejecutoria de esta providencia.

TERCER Otorgar al perito el término de cuarenta y cinco (45) días, para rinda el dictamen pericial a él encomendado, los cuales empezarán a correr una vez sean sufragados los referidos gastos periciales y se entregue la información requerida por parte de la Superintendencia de Comercio.

CUARTO-.- Por Secretaría **COMUNICAR** al perito a través correo electrónico: egapsas@gmail.com.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Magistrado

Firmado electrónicamente

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados que conforman la Sala de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 y conserva plena validez, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO DE SUSTANCIACIÓN N° 2021-08-301 NYRD

Bogotá, D.C., Agosto dieciocho (18) de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	11001334002 2015-00289-01
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	A.P CONSTRUCCIONES S.A.
DEMANDADO:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT DE BOGOTÁ D.C
ASUNTO:	CORRE TRASLADO PARA ALEGAR

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Mediante sentencia proferida el día 12 de junio de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., negó a las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada por la parte demandante.

El 2 de julio de 2021 por medio del Auto N° 2021-07-332- NYRD, se admitió el recurso de apelación interpuesto y se notificó al Ministerio Público, por lo que sería del caso señalar fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empero considera esta Judicatura innecesaria su realización y en consecuencia, se dispondrá en su lugar correr traslado por el término de diez (10) días a las partes para presentar sus alegatos de conclusión.

Una vez vencido este término se concederá un término de diez (10) días al Ministerio Público, sin retiro del expediente, para que presente concepto, en caso de considerarlo pertinente.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

PRIMERO.- Considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y en su lugar, por Secretaría, **CORRER** traslado a las partes por el término de diez (10) días para presentar sus alegatos de conclusión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Vencido el término anterior, por Secretaría, **CORRER** traslado al Ministerio Público, sin retiro del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 623 de la Ley 564 de 2012.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Magistrado

(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de CPACA y goza de plena validez conforme al artículo 7 de la Ley 527 de 1999.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO DE SUSTANCIACIÓN N° 2021-08-304 NYRD

Bogotá, D.C., Agosto dieciocho (18) de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	11001334005 2016-00083-01
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	FELIPE HOLGUÍN JARAMILLO
DEMANDADO:	ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO
ASUNTO:	CORRE TRASLADO PARA ALEGAR

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Mediante sentencia proferida el día el día 30 de septiembre de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., negó a las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada por la parte demandante.

El 2 de julio de 2021 por medio del Auto N° 2021-07-331NYRD, se admitió el recurso de apelación interpuesto y se notificó al Ministerio Público, por lo que sería del caso señalar fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empero considera esta Judicatura innecesaria su realización y en consecuencia, se dispondrá en su lugar correr traslado por el término de diez (10) días a las partes para presentar sus alegatos de conclusión.

Una vez vencido este término se concederá un término de diez (10) días al Ministerio Público, sin retiro del expediente, para que presente concepto, en caso de considerarlo pertinente.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

PRIMERO.- Considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y en su lugar, por Secretaría, **CORRER** traslado a las partes por el término de diez (10) días para presentar sus alegatos de conclusión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Vencido el término anterior, por Secretaría, **CORRER** traslado al Ministerio Público, sin retiro del expediente, de conformidad con lo establecido en

el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 623 de la Ley 564 de 2012.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Magistrado

(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de CPACA y goza de plena validez conforme al artículo 7 de la Ley 527 de 1999.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUB SECCIÓN B**

Bogotá DC, once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Magistrado Ponente:	FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente:	11001-33-34-002-2016-00086-02
Demandante:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ SA ESP
Demandado:	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Medio de control:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - APELACIÓN SENTENCIA
Asunto:	APLICACIÓN NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 247 CPACA

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 9 cdno. segunda instancia), el despacho dispone lo siguiente:

Como no se solicitaron pruebas en esta instancia y tampoco se observa que haya necesidad de practicarlas, en aplicación del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 247 del CPACA ingrésese el expediente al despacho para proferir sentencia.

Una vez ejecutoriada la providencia se proferirá la decisión respectiva en los términos señalados en el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 623 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), en la medida de las posibilidades reales con que cuenta actualmente el despacho sustanciador y la Sala de Decisión dadas las condiciones existentes de personal y de logística que involucran la capacidad real de respuesta.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Ponente
(firmado electrónicamente)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma electrónica SAMAI, en consecuencia se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO DE SUSTANCIACIÓN N° 2021-08-299 NYRD

Bogotá, D.C., Agosto dieciocho (18) de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	110013341045 2016 00341 02
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	INTERPANEL S.A.
DEMANDADO:	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
ASUNTO:	CORRE TRASLADO PARA ALEGAR

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Mediante sentencia proferida el día tres (3) de julio de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado Cuarenta y Cinco (45) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., negó a las pretensiones de la demanda (Fls. 263 a 274, C.1), decisión que fue apelada por la parte demandante.

El 15 de julio de 2021 por medio del Auto N° 2021-07-390, se admitió el recurso de apelación interpuesto y se notificó al Ministerio Público, por lo que sería del caso señalar fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empero considera esta Judicatura innecesaria su realización y en consecuencia, se dispondrá en su lugar correr traslado por el término de diez (10) días a las partes para presentar sus alegatos de conclusión.

Una vez vencido este término se concederá un término de diez (10) días al Ministerio Público, sin retiro del expediente, para que presente concepto, en caso de considerarlo pertinente.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

PRIMERO.- Considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y en su lugar, por Secretaría, **CORRER** traslado a las partes por el término de diez (10) días para presentar sus alegatos de conclusión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Vencido el término anterior, por Secretaría, **CORRER** traslado al Ministerio Público, sin retiro del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 623 de la Ley 564 de 2012.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de CPACA y goza de plena validez conforme al artículo 7 de la Ley 527 de 1999.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-33-34-001-2016-00370-01
Demandante: MUNICIPIO DE LA MESA (CUNDINAMARCA)
Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRO
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto: APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS

En atención a que obra liquidación de costas (fl. 294 cdno. ppal.) elaborada por la Secretaria de la Sección Primera de este tribunal, el despacho en virtud de lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso aplicable por remisión expresa que hace el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 dispone lo siguiente:

1º) Apruébase la liquidación de costas realizada en el presente proceso.

2º) Por secretaría **dese** cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal octavo de la parte resolutive de la sentencia de 20 de enero de 2020, esto es, **archívese** el expediente previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma electrónica SAMAI, en consecuencia se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO SUSTANCIACIÓN N° 2021-08-297 NYRD

Bogotá D.C., Dieciocho (18) de Agosto de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	25-000-2341-000-2016-01367-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
ACCIONANTE:	COMERCIALIZADORA MAMONAL S.A.S
ACCIONADO:	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
TEMAS:	ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONEN UNA SANCIÓN POR IRREGULARIDADES DEL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE
ASUNTO:	NOMBRAR NUEVO PERITO
MAGISTRADO:	MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN.

Vista la constancia secretarial que antecede, procede el Despacho a adoptar las medidas tendientes al oportuno impulso del proceso.

En audiencia inicial realizada el día 1 de junio de 2021, se decretó como prueba la relativa al dictamen pericial que tenía como objeto oponerse a la experticia rendida por el contador público Hugo Javier Calle Jiménez, por lo que se requirió al extremo pasivo allegar tres (3) hojas de vida de profesionales en ese ramo, a fin de que fueran analizados por la Magistratura, con el objeto de designar un perito.

En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía aportó lo solicitado en dicha oportunidad y en consecuencia, el Despacho se designa a la contadora AMPARO BERMEO ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía número 40.774.214 de Florencia, quien podrá ubicarse en el Celular: 317 590 0204 y Correo electrónico: asesoriasabr@hotmail.com como perito contable para que conforme su experticia absuelva en lo que sea posible los puntos indicados por la demandada a folio 100 anverso del cuaderno uno. Para tal efecto, deberá manifestar su interés en tomar posesión de su cargo mediante correo electrónico dirigido a s01des04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co, dentro de los cinco (5) días siguiente al recibo de la notificación.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a AMPARO BERMEO ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía número 40.774.214 de Florencia, quien podrá ubicarse en el Celular: 317 590 0204 y Correo electrónico: asesoriasabr@hotmail.com, como perito contable para que conforme su experticia absuelva en lo que sea posible los puntos indicados por la demandada a folio 100 anverso del cuaderno uno. Para tal efecto,

deberá manifestar su interés en tomar posesión de su cargo mediante correo electrónico dirigido a s01des04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co, dentro de los cinco (5) días siguiente al recibo de la notificación.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Magistrado

Magistrado

(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de CPACA y goza de plena validez conforme al artículo 7 de la Ley 527 de 1999.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO INTERLOCUTORIO N°2021-08-450 NYRD

Bogotá D.C., Doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	250002341000 2016 01646 00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A.
DEMANDADO:	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES Y OTROS
TEMAS:	ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE CONTROVERSIA ENTRE OPERADORES
ASUNTO:	RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS - DECRETO LEGISLATIVO 806 DE 2020 Y LEY 2080 DE 2021.

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre las excepciones previas propuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto legislativo 806 de 2020 norma vigente para el momento en que se encontraba ya en curso el trámite de las excepciones propuestas y por tanto debe aplicarse la norma de tránsito legislativo prevista en el inciso final del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, según la cual, tales trámites deberán ser resueltos conforme la norma vigente al momento de su presentación o interposición, con base en los siguientes.

I. ANTECEDENTES

La sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A.- COMCEL S.A., por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, solicita que se declare la Nulidad de los actos administrativos No. 4795 del 22 de septiembre de 2015, y 4848 del 31 de diciembre de 2015, expedidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se declare que, a partir del 1 de enero de 2015, COMCEL S.A. tenía la obligación de cobrar los mismos cargos de acceso a la red de larga distancia internacional de Sistema de Satélites de Colombia que el resto de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, adicionalmente se ordene a la CRC a pagar la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS DE 2016 (\$ 4.328.189.646) incluido IVA

correspondiente al menor valor que por cargos de acceso ha tenido y deberá cobrar COMCEL.

Mediante auto del 27 de septiembre de 2016, se admitió la demanda ordenando la notificación personal, la cual se realizó el día 07 de febrero de 2017 a la COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES y a SISTEMA DE SATELITES DE COLOMBIA S.A E.S , que presentó contestación el día 20 de abril de 2017, posteriormente el apoderado del demandante presentó reforma de la demanda en el término estipulado, la cual fue admitida mediante providencia del 13 de marzo de 2018, corriendo traslado a las partes para pronunciarse al respecto, el 11 de abril de 2018, el apoderado de la CRC dio contestación a la reforma de la demanda.

El 23 de enero de 2020 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, presentó intervención con excepciones previas las cuales serán resueltas teniendo en cuenta las siguientes,

II CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 establece que en la audiencia inicial se deberá abordar el saneamiento del proceso, la decisión sobre excepciones previas y mixtas, la fijación del litigio, la conciliación y el decreto de pruebas, no obstante, para las actuaciones judiciales se emitió el Decreto legislativo 806¹ del 4 de junio de 2020, que dispuso en el artículo 12, entre otras cosas, sobre la resolución de las excepciones previas en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo siguiente:

“Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. ***Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable.***” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

A su turno el Código General del Proceso dispone en los artículos 100, 101 y 102 establecen frente a las excepciones previas, su trámite y oportunidad:

¹ Norma vigente para el momento en que se encontraba ya en curso el trámite de las excepciones propuestas y por tanto debe aplicarse la norma de tránsito legislativo prevista en el inciso final del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021.

“ARTÍCULO 100. EXCEPCIONES PREVIAS. *Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:*

- 1. Falta de jurisdicción o de competencia.*
- 2. Compromiso o cláusula compromisoria.*
- 3. Inexistencia del demandante o del demandado.*
- 4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.*
- 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.*
- 6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.*
- 7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.*
- 8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.*
- 9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.*
- 10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.*
- 11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.*

ARTÍCULO 101. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS. *Las excepciones previas se formularán en el término del traslado de la demanda en escrito separado que deberá expresar las razones y hechos en que se fundamentan. Al escrito deberán acompañarse todas las pruebas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandado.*

El juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue la falta de competencia por el domicilio de persona natural o por el lugar donde ocurrieron hechos, o la falta de integración del litisconsorcio necesario, casos en los cuales se podrán practicar hasta dos testimonios.

Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera:

1. Del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por el término de tres (3) días conforme al artículo 110, para que se pronuncie sobre ellas y, si fuere el caso, subsane los defectos anotados.

***2. El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial,** y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante. Cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez citará a la audiencia inicial y en ella las practicará y resolverá las excepciones. (...)*

ARTÍCULO 102. INOPONIBILIDAD POSTERIOR DE LOS MISMOS HECHOS. *Los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

Sin embargo, al sancionarse y publicarse la Ley 2080 de 2021, y entrar en vigor a partir del 25 de enero de 2021 conforme a las reglas de transición legislativa contenidas en su artículo 86, el legislador ordinario (Parlamento) modificó la regla prevista por el legislador extraordinario (Ejecutivo) en el Decreto Legislativo 806 de 2020 en lo concerniente a si en el seno de un juez colegiado, la decisión sobre excepciones previas, le corresponde al magistrado ponente o a la Sala, en tanto modificó el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011 haciendo una nueva clasificación

de los autos que deben ser resueltos por la Sala y los de ponente, así:

Ley 2080 de 2021. “ARTÍCULO 20. *Modifíquese el artículo [125](#) de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:*

ARTÍCULO 125. De la expedición de providencias. *La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:*

- 1. Corresponderá a los jueces proferir los autos y las sentencias.*
- 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias:*
 - a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código;*
 - b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código;*
 - c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido;*
 - d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código;*
 - e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia;*
 - f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala;*
 - g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas;*
 - h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente.*
- 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja.*

Conforme a esta innovación legislativa, corresponde a la Sala de Subsección cuando se trate de procesos de dos instancias, pronunciarse sobre las excepciones previas y mixtas, bajo los presupuestos establecidos en el Código General del Proceso, la Ley 1437 de 2011 y el Decreto Legislativo 806 de 2020 considerando las particularidades procesales que fueron dispuestas en las normas citadas, y al magistrado ponente cuando se trata de proceso en única instancia, de manera que poder continuar con las etapas procesales previstas y aplicables para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se debe efectuar un pronunciamiento previo sobre las excepciones únicamente previas y mixta, precisando que aquellas de fondo que fueron invocadas serán objeto de pronunciamiento en la sentencia que se profiera.

2.2. Resolución de excepciones previas

En el escrito de intervención presentado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se formularon como **excepciones previas**, las que denominó, “*caducidad de la acción*”, e “*ineptitud formal de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho*”.

Respecto a los argumentos del apoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sostiene que existió *caducidad de la acción*, debido a que en el

presente caso se han aplicado cargos diferenciados de acceso a redes para COMCEL, en su calidad de operador con posición dominante en el mercado, teniendo como fundamento las Resoluciones 4002 y 4050 de 2012, según las cuales COMCEL debería ofrecer a los demás operadores o proveedores de redes y servicios, las tarifas establecidas en la última casilla de la tabla 3 de la Resolución No. 1763 de 2007, modificada por la Resolución No. 4660 de 2014, mientras que para los demás operadores se aplicaría anualmente la tarifa fijada en dicha tabla para el respectivo año. Por tanto, la inconformidad de la parte actora radica en la aplicación de cargos de acceso asimétricos para COMCEL, los cuales tienen fundamento en la Resolución 4050 de 2012.

En ese sentido, la decisión que el actor considera contraria a derecho se enmarca dentro de lo regulado en la citada Resolución 4050 de 2012, acto contra el cual la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se encontraría caducada por haber transcurrido más de 4 meses desde su notificación, configurándose un acto en firme que goza de presunción de legalidad.

Finalmente concluye que, en el presente caso, se encuentra ampliamente caducada toda acción de restablecimiento económico contra el acto que contiene la decisión que COMCEL considera que vulneró sus derechos, esto es, la Resolución 4050 de 2012, ya que los cargos asimétricos para COMCEL devienen de la aplicación de la Resolución 4050 de 2012 frente a la cual se encuentra caducada la presente demanda, **luego entonces la solicitud del demandante que dio lugar a la expedición de las Resolución 4795 de 2015 y 4848 de 2015, no puede servir de pretexto para revivir términos para demandar.**

De la *excepción de ineptitud formal de la demanda* hace referencia a que no existe una relación fáctica ni jurídica entre los actos demandados y los presuntos derechos vulnerados, cuyo restablecimiento se pretende, así mismo las determinaciones tomadas por la administración frente a los cargos de acceso se fundamental en actos administrativos previos, con plena fuerza jurídica y que no son objeto de la presente demanda, como la determinación de posición dominante declarada por la Resolución 4002 de 2012 y ajustada por la Resolución 4050 de 2012, e igualmente se fundamenta en la regulación de tarifas determinada en la Resolución 1763 de 2007 sobre cargos de interconexión, ninguna de las cuales forma parte de este proceso lo que inhibe cualquier pronunciamiento de fondo.

Adicionalmente los actos administrativos demandados no fueron las que fijaron los cargos de acceso para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, ni fueron los que establecieron la posición dominante en el mercado de COMCEL S.A., y tampoco fijaron las medidas diferenciadas y el cobro de cargos asimétricos para esta sociedad por su posición dominante. Los actos acusados solo negaron la solicitud elevada por COMCEL de adelantar el trámite de solución de controversias de que trata el artículo 42 de la ley 1341 de 2009, pero los actos relacionados con el cobro de cargos diferenciados, por el que solicitó adelantar el trámite de solución de controversias son las Resoluciones 4002 y 4050 de 2012, que no forman parte del presente litigio.

El traslado de las excepciones propuestas se dio el 05 de agosto de 2021, según constancia secretarial visible a folio 1444 del cuaderno principal, que inició el 06 de agosto de 2021 y venció el 10 de agosto de 2021, en silencio.

Así las cosas, la Sala considera procedente referir que la excepción propuesta por el extremo pasivo de ***ineptitud de la demanda*** es de naturaleza previa, toda vez que, tal y como fue formulada, estaría dada por la consagración taxativa que de

ella hace el N°5 del artículo 100 del Código General del Proceso, que al tenor literal disponen “(...) Juez o Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas (...)” ARTÍCULO 100. EXCEPCIONES PREVIAS. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda: (...) 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.

En cuando a la caducidad de la acción, es de naturaleza mixta, toda vez que, estaría dada por la consagración taxativa que de ella hace el artículo 180 del CPACA la, que al tenor literal dispone “(...) Juez o Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva (...)”.

Procede la sala, a realizar pronunciamiento respecto a la *inepta demanda* relacionada con la Resolución No. 4795 de 2015, “por medio de la cual se resuelve una solicitud presentada por COMCEL S.A” donde expresamente señala en la Hoja No.6²:

“(...) En otras palabras se observa que el objeto de la solicitud de COMCEL, la cual dicho proveedor enmarca dentro de un trámite de solución de controversias, radica en realidad en pretender que esta Comisión de aplicación a lo dispuesto en la Resolución CRC 4660 de 2014, dejando por tanto sin vigencia la Resolución 4002 de 2012 modificada por la Resolución 4050 del mismo año en relación con la medida mayorista de cargos de acceso definida en dichas resoluciones actos administrativos que por demás se encuentran en firme, vigentes y dotados de plena fuerza de ejecutoria.

“(...) De esta forma la solicitud presentada por COMCEL no corresponde a una solicitud de solución de controversias, sino que sin lugar a dudas busca tanto en su naturaleza como en su alcance y contenido sustancial, que la CRC adopte “una decisión invalidante de otro acto previo”, lo cual conlleva a su inaplicación bien sea por que dicho proveedor considera que tales actos particulares se oponen a la constitución o porque los mismos los estima ilegales (...)”

Ahora bien, del análisis de las resoluciones demandadas, específicamente la Resolución No. 4795 de 2015, se evidencia que la misma no está resolviendo una situación particular y concreta, pues en la misma se le rechazó al demandante por improcedente el trámite de solución de controversias, por considerar que lo que estaba buscando era dejar sin vigencia, la Resolución 4002 de 2012 modificada por la Resolución 4050 del mismo año, las cuales ya se encuentran en firme, y vigentes, por lo cual no puede provocar un nuevo pronunciamiento de la entidad con el fin de modificar un acto administrativo que se encuentra en firme y que por demás, ya le había definido la situación jurídica que nuevamente quiso reiterar ante la misma autoridad.

Respecto de los actos administrativos el H. Consejo de Estado ha manifestado:

*“(...) A partir de su clasificación según su contenido por la situación que crea, se observa que existen actos generales, aquellos que crean situaciones jurídicas generales, impersonales y abstractas, otros de carácter particular, que generan situaciones concretas y subjetivas y por último los actos condición que atribuyen a una persona determinada los predicados abstractos previstos en las situaciones generales y personales. En lo que respecta a la decisión que contienen los actos administrativos; estos pueden ser **definitivos**, aquellos que ponen fin a una actuación administrativa*

² Folio 125 Cuaderno No. 1

o deciden directa o indirectamente sobre el fondo de un asunto, y por otro lado aquellos de trámite, que impulsan una actuación administrativa, pero sin definir o decidir sobre ella.”³

Conforme a lo anterior, ha sostenido la jurisprudencia que solamente son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, **los actos que terminen un proceso administrativo, esto es, los definitivos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto**, esto es, que definan, modifiquen o extingan una situación jurídica concreta, y en el caso concreto, los actos administrativos que terminaron el proceso. es decir los actos definitivos, fueron las Resoluciones CRC 4002 de 2012 “*por medio de la cual se decide una actuación administrativa de carácter particular y concreto y se establecen medidas regulatorias particulares respecto del proveedor de redes y servicios con posición dominante en el mercado relevante susceptible de regulación ex ante denominado “voz saliente Móvil” COMUNICACIÓN CELULA S.A COMCEL*”⁴ y la CRC 4050 de 2012, “*por medio del cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A contra la Resolución CRC 4002 DE 2012*”.

Conforme a lo anterior considera la sala, probada la excepción de ***inepta demanda***, presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por encontrarse que los actos administrativos demandados como los son la Resolución 4795 de 22 de septiembre 2015 , y la Resolución 4848 del 31 de diciembre de 2015, son una reiteración de los actos administrativos definitivos antes mencionados, tanto así que, en los mismos actos, la entidad demanda, evidencia la intensión de COMCEL S.A, al pretender provocar un nuevo pronunciamiento respecto de Resoluciones que gozan de presunción de legalidad y firmeza.

Dicho lo anterior, en cuanto a la excepción de ***caducidad de la acción***, se evidencia que las afirmaciones del extremo pasivo en relación con esta excepción se encuentran fundamentadas, ya que, como se indicó, los actos administrativos que se demandan, son una reiteración de los actos administrativos definitivos los cuales fueron, la Resoluciones CRC 4002 de 2012, en virtud de las cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones, determinó la necesidad de regulación de una empresa con posición dominante como lo es COMCEL SA, y la Resolución CRC 4050 de 2012, mediante la cual se confirmó la anterior decisión que si bien no obra constancia de notificación, se tomara la fecha en la que fue expedida esta última decisión que no es susceptible de recursos, la cual fue el 31 de diciembre de 2012⁵.

El Honorable Consejo de Estado respecto de la caducidad de la acción ha establecido:

“...los términos de caducidad son de orden público y, en consecuencia, su cumplimiento debe verificarse en las condiciones fijadas por la ley. Si se admitiera que la interposición irregular de un recurso en la vía gubernativa produjera el efecto de obligar a contar el término de caducidad a partir de la notificación del acto que se pronuncie sobre ese recurso improcedente o extemporáneo, la caducidad quedaría librada a la voluntad del particular quien, en esas condiciones, podría interponer, a sabiendas, un recurso improcedente con el único propósito de habilitar nuevamente

³ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos

mil diecisiete (2017), Radicación número: 25000-23-42-000-2014-02393-01 (3758-1 6)

⁴ Folio 434 Cuaderno No. 1 del folio 001 al 500

⁵ Folio 721 Cuaderno No. 2 del folio 501 al 1002

la posibilidad de acudir a la acción judicial, a pesar de haber transcurrido ya el término de caducidad.

En consecuencia, solamente cuando el recurso en la vía gubernativa ha sido presentado en tiempo y con el lleno de los demás requisitos contemplados en la ley, el término de caducidad de la acción comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se notifique el acto por medio del cual se resuelve el recurso” (subrayado fuera del texto).⁶

Es decir, que en el caso concreto la Resolución 4795 de 22 de septiembre de 2015, y la Resolución 4848 del 31 de diciembre de 2015, son una reiteración de los actos administrativos definitivos, por lo cual se evidencia que el demandante, provocó un nuevo pronunciamiento de la administración, ya que los que debían ser sometidos a control judicial eran las Resoluciones CRC 4002 de 2012 y CRC 4050 del 31 de diciembre de 2012 tal y como obra a folio 721, por lo que es evidente que para demandar la resolución que verdaderamente define la situación ya transcurrieron más de los cuatro meses que dispone la Ley 1437 de 2011, como quiera que el acto administrativo fue expedido en el año 2012 y la demanda se **radicó cuatro años después**, por lo que provocar de nuevo el pronunciamiento de la Administración para revivir la situación y poder demandar en tiempo no resulta justificable para la Sala, pues era deber del proveedor proceder a demandar los actos en tiempo a partir de cuándo se resuelve esa solicitud particular y concreta, tiempo que dejaron fenecer.

En atención a ello, la Sala declarará probada la excepción caducidad de la acción, por las razones antes expuestas.

En consecuencia, i) se declarará probada la excepción de **inepta demanda** por tratarse de actos administrativos de reiteración y no actos administrativos que definen una situación definitiva y concreta; y ii) se declarará probada la excepción de **caducidad de la acción**, por cuanto los actos administrativos que son susceptibles de control judicial fueron expedidos en el año 2012, y la demanda fue radicada 4 años después, pretendiendo provocar un nuevo pronunciamiento de la administración.

Por último, en el caso concreto no se advierte la existencia de ninguna excepción previa que amerite decreto o pronunciamiento oficioso, pues al haberse analizado las 11 causales indicadas en el artículo 100 del Código General del Proceso, y las excepciones mixtas enlistadas en el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la Sala encontró que ninguna de ellas se configura.

En mérito de lo expuesto la sala,

DISPONE:

PRIMERO. - DECLARAR PROBADAS las excepciones de “*inepta demanda*” y “*caducidad de la acción*” propuestas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, en consecuencia, dar por terminado el proceso por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, archivar el presente

⁶ Bogotá, tres (3) de abril de dos mil catorce (2014) consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas Radicación: 25000-23-27-000-2010-00041-01 [18801]

proceso, devolver los anexos al apoderado de la parte demandante sin necesidad de desglose.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Magistrado

Firmado electrónicamente

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado

Firmado electrónicamente

OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS

Magistrado

Firmado electrónicamente

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados que conforman la Sala de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 y conserva plena validez, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO DE SUSTANCIACIÓN N° 2021-08-298 NYRD

Bogotá, D.C., Agosto dieciocho (18) de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	110013334002 2017 00117 01
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	TECHNOQUALITY S.A.S
DEMANDADO:	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
ASUNTO:	CORRE TRASLADO PARA ALEGAR

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Mediante sentencia proferida el día dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinte (2020), el Juzgado Segundo (2°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., negó a las pretensiones de la demanda (fls. 144 a 151, C.1), decisión que fue apelada por la parte demandante.

El 15 de julio de 2021 por medio del Auto N° 2021-07-392, se admitió el recurso de apelación interpuesto y se notificó al Ministerio Público, por lo que sería del caso señalar fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empero considera esta Judicatura innecesaria su realización y en consecuencia, se dispondrá en su lugar correr traslado por el término de diez (10) días a las partes para presentar sus alegatos de conclusión.

Una vez vencido este término se concederá un término de diez (10) días al Ministerio Público, sin retiro del expediente, para que presente concepto, en caso de considerarlo pertinente.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

PRIMERO.- Considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y en su lugar, por Secretaría, **CORRER** traslado a las partes por el término de diez (10) días para presentar sus alegatos de conclusión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Vencido el término anterior, por Secretaría, **CORRER** traslado al Ministerio Público, sin retiro del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 623 de la Ley 564 de 2012.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN
Magistrado



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B
AUTO DE SUSTANCIACIÓN N° 2021-08-299 NYRD**

Bogotá, D.C., Agosto dieciocho (18) de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	110013342046 2017 00129 02
MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO.
ACCIONANTE:	ANTONIO JOAQUIN FONTALVO FERREIRA Y OTROS
ACCIONADO:	DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ Y OTROS
TEMAS:	AVALÚOS CATASTRALES
ASUNTO:	CORRER TRASLADO PARA SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Vista la constancia secretarial que antecede, procede el Despacho a impartir el impulso procesal respectivo, previos los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Mediante sentencia proferida el siete (7) de febrero de dos mil veinte (2020), el Juzgado Cuarenta y Seis (46) Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., declaró probada la excepción previa de ineptitud de la demanda por la falta de requisitos formales (Fls. 667 a 687 C.1)

El 13 de febrero de 2020, fue interpuesto recurso de apelación por la parte demandante

El 28 de febrero de 2020, el Juez de Primera Instancia concedió el recurso de apelación (fl. 701 C.1), el cual fue admitido por el Despacho mediante Auto No. 2021-07-391 AG del 15 de julio de 2021.

II. CONSIDERACIONES

Atendiendo a la remisión contenida en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, según la cual las apelaciones de las sentencias proferidas al interior del medio de control de perjuicios irrogados al grupo se gestionarán conforme las disposiciones del Código General del Proceso, se dará trámite al recurso de alzada de conformidad con lo ordenado en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020 el cual establece:

Artículo 14. Apelación de sentencias en materia civil y familia. El recurso de apelación contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitará así:

Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del término de

ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los casos señalados en el artículo 327 del Código General del Proceso. El juez se pronunciará dentro de los cinco (5) días siguientes.

Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto.

Si se decretan pruebas, el juez fijará fecha y hora para la realización de la audiencia en la que se practicarán, se escucharán alegatos y se dictará sentencia. La sentencia se dictará en los términos establecidos en el Código General del Proceso.

2.1 Decisión relacionada con la no apertura de periodo probatorio de segunda instancia

Ahora bien, en el inciso 1º del artículo 327 del Código General del Proceso se prevén fundamentalmente dos posibilidades de decreto de pruebas en segunda instancia: la primera es la que acaece en desarrollo de las facultades oficiosas, cuando el Juzgador de instancia considera necesario pertinente y útil decretar pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos objeto del litigio; y la segunda es la que tiene lugar cuando dentro de la ejecutoria del Auto que admite la apelación, las partes solicitan la práctica de pruebas, circunstancia en la que el Juez se encuentra limitado a su decreto únicamente cuando concurren alguno o algunos de estos cinco escenarios:

“1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. 2. Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. 3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos. 4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. 5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trata el ordinal anterior”.

Así las cosas, toda vez que en el caso concreto no se configuran las causales mencionadas, las partes no han solicitado pruebas y el Despacho tampoco advierte la necesidad de su decreto oficioso, es claro que no se configura ninguna causal para que proceda su incorporación.

2.2. Sustentación del recurso de apelación

En principio se advierte que en el inciso final del artículo 323 del Código General del Proceso se indica que la no sustentación del recurso de apelación daría lugar a la declaratoria de desierto del recurso. Y en consecuencia, en virtud del párrafo del artículo 322 de la Ley 1564 de 2012 quedaría sin efectos el recurso de apelación adhesiva.

No obstante lo anterior se tiene que de conformidad con lo reglamentado en la normativa *ut supra*, se correrá el traslado a los apelantes para que sustenten su recurso de apelación por cinco de días, término en el cual, esta Magistratura en aras

de garantizar la materialización de los principios de eficiencia, celeridad y economía procesal, lo pertinente es invitar a los recurrentes a que manifiesten, si desean en esta oportunidad ratificarse en el contenido y alcance de esos escritos o si es su intención adicionar nuevos argumentos a la sustentación ya presentada, no sin antes aclarar que tal sustentación (en todo caso) deberá limitarse al desarrollo de los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia, en la interposición del recurso.

Culminado este término por Secretaría se correrá traslado por otros cinco días a los demás sujetos procesales, para que si a bien lo tienen se manifiesten al respecto.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

PRIMERO.- CONSIDERAR innecesario ejercer la facultad oficiosa de decreto de pruebas en segunda instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Por Secretaría, **CORRER** traslado a la entidad demandada por el término de cinco (5) días para que sustente su recurso de apelación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- Vencido el término anterior, por Secretaría, **CORRER** traslado por el término de cinco (5) días a los demás sujetos procesales de la sustentación del recurso de apelación presentado por la entidad demandada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Magistrado

Firmado electrónicamente

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 y conserva plena validez, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUB SECCIÓN B

Bogotá D.C., cinco (05) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Magistrado Ponente: OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Radicación: No. 110013342048201700185-01
Demandantes: ÁNGELA ESCOBAR GUTIÉRREZ Y OTRO
Demandado: DISTRITO CAPITAL MAYOR DE BOGOTÁ Y OTROS
Referencia: ACCIÓN POPULAR – APELACIÓN DE SENTENCIA
Asunto: RESUELVE ADICIÓN Y ACLARACIÓN DE SENTENCIA

Procede la Sala a resolver la solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia dictada por esta Sala de Decisión el 24 de junio de 2021 (fls. 94 a 123 cdno. ppal.), dentro del asunto de la referencia, presentada por la apoderada judicial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD (fls. 143 a 144 ibidem).

I. ANTECEDENTES.

1) El 24 de junio de 2021, esta Sala de Decisión profirió sentencia de segunda instancia en el asunto de la referencia (fls. 94 a 123 vltos. cdno. ppal.), mediante la cual se dispuso lo siguiente:

"(...)

1º) Revócase el numeral **i)** del ordinal cuarto de la sentencia del 7 de junio de 2018, y en consecuencia **instase** al Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD en conjunto con el Distrito Capital; para que dentro del término de doce (12) meses en coordinación con la Empresa Departamental Urbanística S.A.S propietaria de los predios identificados con matrículas inmobiliarias nos. 50C-1447869, CHIP AAA0055DWXS ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., Avenida Calle 53 no. 66- 19, lote 15 y 50C-1447870, CHIP AAA0055DWWW, ubicado en la Avenida Carrera 60 no. 44B-21, lote 16, realice las gestiones correspondientes a la planeación, diseño, construcción, dotación y adecuación que permitan habilitar el **uso público** del predio identificado con la matrícula inmobiliaria no. 50C-182589 CHIP AAA0055DUPA, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., Barrio El Salitre, **Sector Centro Bolivariano**, del Parque Metropolitano Simón Bolívar ubicado en la Calle 25 no. 60-50, con un área de 4000 metros cuadrados, de propiedad del Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1656 de 1982 (Plan Maestro Parque Metropolitano Simón Bolívar) y el artículo 3º del Decreto Distrital

Expediente No. 110013342048201700185-01
 Actores: Ángela Escobar Gutiérrez y Otro
Acción Popular- Apelación de Sentencia
 Resuelve Adición y Aclaración de Sentencia

300 de 2003 y el uso del predio, en condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad para toda la ciudadanía.

En caso de que no exista acuerdo entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDR y la Empresa Departamental Urbanística S.A.S, **íntase** al Instituto Distrital de Recreación y Deporte para que en el término de doce (12) meses realice las gestiones correspondientes a la planeación, diseño, construcción, dotación y adecuación que permitan habilitar el **uso público** del predio identificado con la matrícula inmobiliaria no. 50C-182589 CHIP AAA0055DUPA, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., Barrio El Salitre, **Sector Centro Bolivariano**, del Parque Metropolitano Simón Bolívar ubicado en la Calle 25 no. 60-50, con un área de 4000 metros cuadrados, de propiedad del Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en Decreto 1656 de 1982 (Plan Maestro) y el artículo 3° del Decreto Distrital 300 de 2003 y el uso del predio, en condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad para toda la ciudadanía.

2°) Confírmase en lo demás la sentencia del 7 de junio de 2018, proferida por el Juzgado Cuarenta y Ocho (48) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3°.) Sin condena en costas en la instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

4°.) Para los fines de que trata el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, remítase copia integral de esta providencia a la Defensoría del Pueblo.

5°.) Cumplido lo anterior, sin que medie solicitud de envío al Consejo de Estado para la eventual revisión de la actuación, y previas las constancias secretariales de rigor, por Secretaría devuélvase el expediente al juzgado de origen.

2) Luego, mediante escrito enviado al correo electrónico de recepción de memoriales de la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación el (fls. 143 y 144 cdno. ppal.), la apoderada judicial de la parte actora solicitó la aclaración y/o adición de la sentencia del 24 de junio de 2021, en los siguientes términos:

Señala que en la sentencia se revoca solamente el literal i) de la sentencia del 7 de junio de 2018, por lo que se interpreta que el inciso primero del citado artículo se confirma en el fallo en comento.

Advierte que bajo el entendido que de una parte el Juzgado 48 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá señaló un término improrrogable de 36 meses contados a partir de la ejecutoria de dicha providencia, para atender y dar cumplimiento a lo ordenado y la Sala de Decisión en su fallo del 24 de junio de 2021 señala en el literal i) el término de doce (12) meses para realizar las gestiones correspondientes a la planeación, construcción,

dotación y adecuación que permitan habilitar el uso público del predio identificado con la matrícula inmobiliaria no. 50C-182589 CHIP AAA0055DUPA, por lo que se presenta pluralidad de términos para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia en ese sentido.

II. CONSIDERACIONES.

Respecto a la solicitud de **aclaración**, debe advertir la Sala que, de conformidad con el artículo 285 del C.G.P., solo son objeto de aclaración los conceptos o frases de una providencia que ofrezcan verdadera duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o que influyan en ella. El contenido de la norma es el siguiente:

"ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN. *La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella.*

(...)." (Resaltado de la Sala).

De otro lado, de conformidad con el artículo 287 del Código General del Proceso, las sentencias deben **adicionarse** cuando se omite resolver cualquiera de los extremos de la *litis*, o sobre cualquier otro punto que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de pronunciamiento. La norma en mención establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. *Cuando la sentencia omite resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*

(...)." (Negrillas y subrayado fuera de texto).

Adicionalmente, la norma en comento establece que la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la profirió.

Bajo los anteriores criterios, la Sala estudiará los argumentos de la aclaración de la providencia, toda vez que no procede la adición de la sentencia por

cuanto en la misma no se omitió resolver ningún argumento expuesto en la apelación.

Con la anterior precisión la Sala advierte que en el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Cuarenta y Ocho (48) Administrativo del Circuito de Bogotá (fls. 252 a 527 cdno. no. 1), el juez de primera instancia ordenó lo siguiente:

"(...)

CUARTO: Para la protección del interés o derecho colectivo amparado, se ordena al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) en conjunto con el Distrito Capital en calidad de propietario del lote de menor extensión objeto de esta acción popular, **que dentro del término improrrogable de treinta y seis (36) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia:** i) ejecuten las obras de planeación, diseño, construcción, dotación y adecuación del lote menor extensión que integra el Centro Bolivariano del Parque Metropolitano Simón Bolívar, identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-182589, CHIP o código catastral AAA0055DUPA, ubicado en la Ciudad de Bogotá D.C., Barrio El Salitre, Sector Centro Bolivariano, dirección actual avenida calle 26 60-50, con un área de 4000 metros cuadrados, de propiedad del Distrito Capital, de modo que garantice su apertura para el uso y goce de la comunidad como parque recreativo, en condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad para toda la ciudadanía, salvaguardando, en todo caso, el cierre de los otros lotes de mayor extensión que componen el Centro Bolivariano, los cuales se han identificado plenamente en esta providencia, por cuanto no están destinados jurídicamente para tales efectos, conforme a lo establecido en el Plan Director del Parque Metropolitano Simón Bolívar; ii) adelanten todas las actuaciones administrativas que sean necesarias, entre ellas, las tendientes a apropiar la disponibilidad presupuestal para materializar la obra; iii) de ser necesario, el IDRD deberá adecuar el Plan Director del Parque Metropolitano Simón Bolívar, en atención a su competencia para formular en ese instrumento de planeamiento urbanístico las intervenciones de las áreas que lo conforman. (Resalta la Sala).

Ahora bien, en la sentencia del 24 de junio de 2021, proferida por esta Sala de Decisión, se ordenó:

"(...)

1º) Revócase el numeral i) del ordinal cuarto de la sentencia del 7 de junio de 2018, y en consecuencia **ínstase** al Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD en conjunto con el Distrito Capital; para que dentro del término de doce (12) meses en coordinación con la Empresa Departamental Urbanística S.A.S propietaria de los predios identificados con matrículas inmobiliarias nos. 50C-1447869, CHIP AAA0055DWXS ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., Avenida Calle 53 no. 66- 19, lote 15 y 50C-1447870, CHIP AAA0055DWWW, ubicado en la Avenida Carrera 60 no. 44B-21, lote 16, realice las gestiones correspondientes a la planeación, diseño, construcción, dotación y adecuación que permitan habilitar el **uso público** del predio identificado con la matrícula

Expediente No. 110013342048201700185-01
 Actores: Ángela Escobar Gutiérrez y Otro
Acción Popular– Apelación de Sentencia
 Resuelve Adición y Aclaración de Sentencia

*inmobiliaria no. 50C-182589 CHIP AAA0055DUPA, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., Barrio El Salitre, **Sector Centro Bolivariano**, del Parque Metropolitano Simón Bolívar ubicado en la Calle 25 no. 60-50, con un área de 4000 metros cuadrados, de propiedad del Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1656 de 1982 (Plan Maestro Parque Metropolitano Simón Bolívar) y el artículo 3° del Decreto Distrital 300 de 2003 y el uso del predio, en condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad para toda la ciudadanía.*

*En caso de que no exista acuerdo entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD y la Empresa Departamental Urbanística S.A.S, **instase** al Instituto Distrital de Recreación y Deporte para que en el término de doce (12) meses realice las gestiones correspondientes a la planeación, diseño, construcción, dotación y adecuación que permitan habilitar el **uso público** del predio identificado con la matrícula inmobiliaria no. 50C-182589 CHIP AAA0055DUPA, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., Barrio El Salitre, **Sector Centro Bolivariano**, del Parque Metropolitano Simón Bolívar ubicado en la Calle 25 no. 60-50, con un área de 4000 metros cuadrados, de propiedad del Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en Decreto 1656 de 1982 (Plan Maestro) y el artículo 3° del Decreto Distrital 300 de 2003 y el uso del predio, en condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad para toda la ciudadanía”. (Negrillas del texto original).*

De conformidad con lo anterior, se tiene que no le asiste la razón a la apoderada del Instituto de Recreación y Deporte – IDRD, cuando afirma que existe pluralidad de términos para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, por cuanto en el fallo de primera instancia se señaló el término de treinta y seis (36) meses para dar cumplimiento a la sentencia y en el fallo de segunda instancia se señaló el término de doce (12) meses; pues es claro que el término concedido en la sentencia de segunda instancia proferida el 24 de junio de 2021 por esta Sala de Decisión mediante la cual se insta al Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD en conjunto con el Distrito Capital es de **doce (12) meses** para que en coordinación con la Empresa Departamental Urbanística S.A.S propietaria de los predios identificados con matrículas inmobiliarias nos. 50C-1447869, CHIP AAA0055DWXS ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., Avenida Calle 53 no. 66- 19, lote 15 y 50C-1447870, CHIP AAA0055DWWW, ubicado en la Avenida Carrera 60 no. 44B-21, lote 16, realice las gestiones correspondientes a la planeación, diseño, construcción, dotación y adecuación que permitan habilitar el **uso público** del predio identificado con la matrícula inmobiliaria no. 50C-182589 CHIP AAA0055DUPA, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., Barrio El Salitre, **Sector Centro Bolivariano**, del Parque Metropolitano Simón Bolívar ubicado en la Calle 25 no. 60-50, con un área de 4000 metros cuadrados, de propiedad del

Expediente No. 110013342048201700185-01
Actores: Ángela Escobar Gutiérrez y Otro
Acción Popular- Apelación de Sentencia
Resuelve Adición y Aclaración de Sentencia

Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1656 de 1982 (Plan Maestro Parque Metropolitano Simón Bolívar) y el artículo 3° del Decreto Distrital 300 de 2003 y el uso del predio, en condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad para toda la ciudadanía.

Asimismo, en la citada sentencia se ordena que en caso de que no exista acuerdo entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD y la Empresa Departamental Urbanística S.A.S, **íntase** al Instituto Distrital de Recreación y Deporte para que en el **término de doce (12) meses** realice las gestiones correspondientes a la planeación, diseño, construcción, dotación y adecuación que permitan habilitar el **uso público** del predio identificado con la matrícula inmobiliaria no. 50C-182589 CHIP AAA0055DUPA, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., Barrio El Salitre, **Sector Centro Bolivariano**, del Parque Metropolitano Simón Bolívar ubicado en la Calle 25 no. 60-50, con un área de 4000 metros cuadrados, de propiedad del Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en Decreto 1656 de 1982 (Plan Maestro) y el artículo 3° del Decreto Distrital 300 de 2003 y el uso del predio, en condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad para toda la ciudadanía.

Así las cosas, no cabe duda que, el término concedido en la sentencia de segunda instancia proferida por esta Sala de Decisión el 24 de junio de 2021, corresponde a doce (12) meses tal como fue señalado en la parte resolutive de la citada providencia, por cuanto se revocó el numeral **i)** del ordinal cuarto de la sentencia del 7 de junio de 2018, lo cual también contempla el término para el cumplimiento de la misma en esta instancia; razón por la cual no se denegará la solicitud de aclaración de la sentencia antes citada.

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B,**

R E S U E L V E:

1º) Deniégase la solicitud de aclaración y/o adición de sentencia presentada por la apoderada judicial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Expediente No. 110013342048201700185-01
Actores: Ángela Escobar Gutiérrez y Otro
Acción Popular- Apelación de Sentencia
Resuelve Adición y Aclaración de Sentencia

2º) Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría **dese** cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del 24 de junio de 2021.

OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Magistrado
Firmado Electrónicamente

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN
Magistrado
Firmado Electrónicamente

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
Firmado Electrónicamente

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados que conforman la Sala de la Subsección "B" de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de CPACA.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO DE SUSTANCIACIÓN N° 2021-08-303 NYRD

Bogotá, D.C., Agosto dieciocho (18) de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	110013334001 2017 00209 01
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	SOCIEDAD APIROS S.A.S.
DEMANDADO:	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ASUNTO:	CORRE TRASLADO PARA ALEGAR

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Mediante sentencia proferida el día el día veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020), el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., negó a las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada por la parte demandante.

El 15 de julio de 2021 por medio del Auto N° 2021-07-262NYRD, se admitió el recurso de apelación interpuesto y se notificó al Ministerio Público, por lo que sería del caso señalar fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empero considera esta Judicatura innecesaria su realización y en consecuencia, se dispondrá en su lugar correr traslado por el término de diez (10) días a las partes para presentar sus alegatos de conclusión.

Una vez vencido este término se concederá un término de diez (10) días al Ministerio Público, sin retiro del expediente, para que presente concepto, en caso de considerarlo pertinente.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

PRIMERO.- Considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y en su lugar, por Secretaría, **CORRER** traslado a las partes por el término de diez (10) días para presentar sus alegatos de conclusión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Vencido el término anterior, por Secretaría, **CORRER** traslado al Ministerio Público, sin retiro del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 623 de la Ley 564 de 2012.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Magistrado

(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de CPACA y goza de plena validez conforme al artículo 7 de la Ley 527 de 1999.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUB SECCIÓN B**

Bogotá DC, doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Magistrado Ponente:	FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente:	11001-33-34-001-2017-00323-01
Demandante:	COLOMBIA MOVIL SA ESP
Demandado:	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Medio de control:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - APELACIÓN SENTENCIA
Asunto:	APLICACIÓN DEL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 247 CPACA

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 9 cdno. segunda instancia), el despacho dispone lo siguiente:

Como no se solicitaron pruebas en esta instancia y tampoco se observa que haya necesidad de practicarlas, en aplicación del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 247 del CPACA ingrésese el expediente al despacho para proferir sentencia.

Una vez ejecutoriada la providencia se proferirá la decisión respectiva en los términos señalados en el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 623 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), en la medida de las posibilidades reales con que cuenta actualmente el despacho sustanciador y la Sala de Decisión dadas las condiciones existentes de personal y de logística que involucran la capacidad real de respuesta.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Ponente
(firmado electrónicamente)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma electrónica SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Magistrado Ponente: OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Expediente: No. 250002341000201701849-00
Demandantes: FEDERICO PINEDO EGURROLA
Demandados: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Referencia: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 819 cdno. ppal.), procede el Despacho a pronunciarse sobre la solicitud presentada por la parte demandante (815 ibidem).

1) Por auto del 5 de agosto de 2021, se fijó como nueva fecha para la recepción de los testimonios de los señores: **a)** Jorge Martín Salinas Ramírez; **b)** Yanciler Pérez Hernández; **c)** Julio Ernesto Villareal; **d)** Alfonso Parra y **e)** María Fernanda Jaramillo Trujillo, decretados mediante auto del 4 de septiembre de 2019.

2) Mediante escrito radicado el 10 de agosto de 2021 (fls. 814 y 815 ibidem), la parte actora presenta solicitud de desistimiento del testimonio del señor Jorge Marín Salinas Ramírez.

3) El artículo 175 del Código General del Proceso, norma vigente aplicable al caso concreto, establece:

“ARTÍCULO 175. DESISTIMIENTO DE PRUEBAS. Las partes podrán desistir de las pruebas no practicadas que hubieren solicitado.

No se podrá desistir de las pruebas practicadas, excepto en el caso contemplado en el inciso final del artículo [270](#)” (Resalta el Despacho).

Por su parte, el artículo 316 ibidem, dispone:

"ARTÍCULO 316. DESISTIMIENTO DE CIERTOS ACTOS PROCESALES. Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. **No podrán desistir de las pruebas practicadas.**

El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.

El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos:

- 1. Cuando las partes así lo convengan.*
- 2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido.*
- 3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares.*
- 4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas" (Negrillas fuera de texto).*

Bajo el anterior marco normativo, se tiene que las partes podrán desistir de las pruebas no practicadas que hubieren solicitado.

En ese sentido y como quiera que el testimonio del señor Jorge Marín Salinas Ramírez, no ha sido practicado, el Despacho accede a la solicitud de desistimiento presentada por la parte demandante.

4) De otra parte se advierte que para la fecha programada para practicar los testimonios esto es el 1º de septiembre de 2021, no se puede llevar al cabo la misma, ya que el Magistrado Sustanciador va asistir de manera

presencial al XXVII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que la citada diligencia será aplazada y la fecha para su reprogramación será fijada posteriormente por auto.

En consecuencia se,

RESUELVE

1º) Acéptase el desistimiento de la práctica del testimonio del señor Jorge Martín Salinas Ramírez, decretado en el numeral 3º del literal A de las pruebas solicitadas por la parte actora, del auto del 4 de septiembre de 2019, por el cual se abrió a pruebas el proceso.

2º) Aplázase la audiencia de testimonios programada para el día 1º de septiembre de 2021, desde las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m) y **advértaseles** a las partes que la fecha para su realización será fijada posteriormente por auto. En consecuencia, por Secretaría **comuníquese inmediatamente** esta decisión a las partes.

3º) Cumplido lo anterior **regrese** el expediente al Despacho para continuar con el trámite procesal correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Magistrado
Firmado Electrónicamente

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente que conforman Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de CPACA.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO INTERLOCUTORIO N° 2021-07-447- NYRD

Bogotá D.C., Once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	110013334002 2018 00271 01
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	ZONA FRANCA DE BOGOTÁ
DEMANDADO:	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN
ASUNTO:	ADMISIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN
MAGISTRADO:	MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

I ANTECEDENTES.

Mediante sentencia proferida el veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020), el Juzgado Segundo (2°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., negó las pretensiones de la demanda (fls. 135 a 140 anv, C.1), decisión que fue apelada por la parte demandante.

II. CONSIDERACIONES.

Así las cosas, para resolver sobre la admisibilidad del recurso de apelación presentado en contra la sentencia proferida el veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020), se procederá a analizar los presupuestos procesales de conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011, de la siguiente forma:

2.1. Artículo 325 del Código General del Proceso

El artículo 325 del Código General del Proceso refiere que:

“Si la providencia apelada se profirió por fuera de audiencia, el juez o el magistrado sustanciador verificará si se encuentra suscrita por el juez de primera instancia y, en caso negativo, adoptará las medidas necesarias para establecer su autoría.”

Por lo que una vez realizado el examen preliminar se observa que la sentencia del veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020), proferida por fuera de audiencia se encuentra suscrita por la Jueza titular del Juzgado Segundo (2°)

Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., judicatura de primera instancia.

2.2. Procedencia.

El artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que *“Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces.”*, razón por la que el recurso interpuesto resulta ser el procedente al emitirse la decisión de primera instancia por parte del Juzgado Segundo (2°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.

2.3. Oportunidad.

El artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece:

“ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

De este modo, se tiene que la sentencia proferida el día veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020), fue debidamente notificada a través de mensaje al buzón electrónico para notificaciones judiciales el 26 del mismo mes y año, es decir, que los términos para presentar el recurso transcurrieron desde el 29 de octubre de 2020 al 12 de noviembre de 2020.

Así las cosas, y como el recurso fue presentado y sustentado por el demandante el 11 de noviembre 2020 (Fls. 143 a 146 C.1), se tiene que dicho escrito es oportuno, pues el término vencía al día siguiente.

El día 24 de noviembre de 2020, el Juzgado de primera instancia concedió el recurso interpuesto (fl. 148 C1).

2.3 Legitimación e interés para recurrir.

La parte demandante interpone recurso de apelación contra la precitada sentencia proferida el veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020) mediante la cual se niegan las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, el recurrente se encuentra legitimado dentro de la presente actuación al ser el extremo activo de la *litis* fijada y su recurso fue presentado por su apoderado debidamente autorizado, por lo que al encontrarse inconforme con la sentencia proferida en primera instancia, que resulta adversa a sus

intereses, la legitimación en la causa para recurrir consagrada en el artículo 320 del Código General del Proceso resulta avalada, toda vez que, puede interponer el recurso de apelación la parte a quien le haya sido desfavorable la decisión.

2.4. Sustentación del Recurso.

En virtud del artículo 247 precitado, se establece que el recurso de apelación deberá ser sustentado ante la autoridad que profirió la providencia, lo cual se encuentra debidamente acreditado por el recurrente, ya que manifiesta su inconformidad frente a la sentencia de primera instancia, indicando los reparos correspondientes y solicitando sea revocada la decisión emitida.

En consecuencia, una vez realizado el análisis precedente se admitirá el recurso presentado por el apoderado de Zona Franca de Bogotá.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

PRIMERO.- ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020) proferida por el Juzgado Segundo (2°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEGUNDO.- NOTIFICAR esta providencia al Ministerio Público, según lo dispuesto en el artículo 198 numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

TERCERO.- Notificado el presente auto, devolver el expediente al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Magistrado.

Firmado electrónicamente

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 y conserva plena validez, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO INTERLOCUTORIO N° 2021-08-452- NYRD

Bogotá D.C., Once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	110013334003 2018 00018 01
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
DEMANDADO:	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ASUNTO:	ADMISIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN
MAGISTRADO:	MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

I ANTECEDENTES.

Mediante sentencia proferida el día veinte (20) de mayo de dos mil veinte (2020), el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., denegó las pretensiones de la demanda (Fls 178 a 194), decisión que fue apelada por la parte demandante.

II. CONSIDERACIONES.

Para resolver sobre la admisibilidad del recurso de apelación presentado en contra la sentencia proferida el día veinte (20) de mayo de dos mil veinte (2020), se procederá a analizar los presupuestos procesales de conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011, de la siguiente forma:

2.1. Examen Preliminar - Artículo 325 del Código General del Proceso

El artículo 325 del Código General del Proceso refiere que:

“Si la providencia apelada se profirió por fuera de audiencia, el juez o el magistrado sustanciador verificará si se encuentra suscrita por el juez de primera instancia y, en caso negativo, adoptará las medidas necesarias para establecer su autoría.”

Por lo que una vez realizado el examen preliminar se observa que la sentencia del veinte (20) de mayo de dos mil veinte (2020), proferida por fuera de audiencia se encuentra suscrita por la Jueza titular del Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., judicatura de primera instancia.

2.2. Procedencia.

El artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que “*Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces.*”, razón por la que el recurso interpuesto resulta ser el procedente al emitirse la decisión de primera instancia por parte del Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.

2.3. Oportunidad.

El artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece:

“ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. *El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:*

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

notificación.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

De este modo, se tiene que la sentencia proferida el día 20 de mayo de 2020, fue debidamente notificada a través de mensaje al buzón electrónico para notificaciones judiciales al día siguiente, es decir, que los términos para presentar el recurso transcurrieron desde el 22 del mismo mes y año al 5 de junio del 2020

Es pertinente señalar que teniendo en cuenta las medidas adoptadas tendientes para la preservación de la vida y la mitigación de riesgos con ocasión de la situación epidemiológica generada por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) causante de la enfermedad (COVID-19), el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales desde el 16 de marzo y hasta el 30 de junio de 2020, dentro de los cuales se encontraba incluido el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por lo que no se recibieron ni tramitaron demandas y actuaciones durante ese tiempo.

Así las cosas, y como el recurso fue presentado y sustentado por el demandante el 14 de julio de 2020 (Fls. 203 a 210 C.1), se tiene que dicho escrito es oportuno.

El día 4 de diciembre de 2020, el Juzgado de primera instancia concedió el recurso interpuesto (fl. 212 C1).

2.3 Legitimación e interés para recurrir.

La parte demandante interpone recurso de apelación contra la precitada sentencia proferida el día 20 de mayo de 2020 mediante la cual se niegan las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, el recurrente se encuentra legitimado dentro de la presente actuación al ser el extremo activo de la *litis* fijada y su recurso fue presentado por su apoderado debidamente autorizado, por lo que al encontrarse inconforme con la sentencia proferida en primera instancia, que resulta adversa a sus intereses, la legitimación en la causa para recurrir consagrada en el artículo 320 del Código General del Proceso resulta avalada, toda vez que, puede interponer

el recurso de apelación la parte a quien le haya sido desfavorable la decisión.

2.4. Sustentación del Recurso.

En virtud del artículo 247 precitado, se establece que el recurso de apelación deberá ser sustentado ante la autoridad que profirió la providencia, lo cual se encuentra debidamente acreditado por el recurrente, ya que manifiesta su inconformidad frente a la sentencia de primera instancia, indicando los reparos correspondientes y solicitando sea revocada la decisión emitida.

En consecuencia, una vez realizado el análisis precedente se admitirá el recurso presentado por el apoderado de Colombia Telecomunicaciones S.A.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

PRIMERO.- ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 20 de mayo de 2020 proferida por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEGUNDO.- NOTIFICAR esta providencia al Ministerio Público, según lo dispuesto en el artículo 198 numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

TERCERO.- Notificado el presente auto, devolver el expediente al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN
Magistrado.
Firmado electrónicamente

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 y conserva plena validez, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO DE SUSTANCIACIÓN N° 2021-08-305 NYRD

Bogotá, D.C., Agosto dieciocho (18) de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	110013341045 2018-00133-01
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	JOHN MANUEL CELY
DEMANDADO:	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ASUNTO:	CORRE TRASLADO PARA ALEGAR

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Mediante sentencia proferida el día el día 27 de julio de 2019, el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., negó a las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada por la parte demandante.

El 8 de julio de 2021 por medio del Auto N° 2021-07-334NYRD, se admitió el recurso de apelación interpuesto y se notificó al Ministerio Público, por lo que sería del caso señalar fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empero considera esta Judicatura innecesaria su realización y en consecuencia, se dispondrá en su lugar correr traslado por el término de diez (10) días a las partes para presentar sus alegatos de conclusión.

Una vez vencido este término se concederá un término de diez (10) días al Ministerio Público, sin retiro del expediente, para que presente concepto, en caso de considerarlo pertinente.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

PRIMERO.- Considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y en su lugar, por Secretaría, **CORRER** traslado a las partes por el término de diez (10) días para presentar sus alegatos de conclusión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Vencido el término anterior, por Secretaría, **CORRER** traslado al

Ministerio Público, sin retiro del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 623 de la Ley 564 de 2012.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Magistrado

(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de CPACA y goza de plena validez conforme al artículo 7 de la Ley 527 de 1999.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO DE SUSTANCIACIÓN N° 2021-08-306 NYRD

Bogotá, D.C., Agosto dieciocho (18) de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	110013334006-2018-00199-01
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	DEPOSITOS ADUANEROS PANALPINA S.A.
DEMANDADO:	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-
ASUNTO:	CORRE TRASLADO PARA ALEGAR

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Mediante sentencia proferida el día el día 25 de noviembre de 2019, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., negó a las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada por la parte demandante.

El 26 de enero de 2021 por medio del Auto N° 2021-01-038NYRD, se admitió el recurso de apelación interpuesto y se notificó al Ministerio Público, por lo que sería del caso señalar fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empero considera esta Judicatura innecesaria su realización y en consecuencia, se dispondrá en su lugar correr traslado por el término de diez (10) días a las partes para presentar sus alegatos de conclusión.

Una vez vencido este término se concederá un término de diez (10) días al Ministerio Público, sin retiro del expediente, para que presente concepto, en caso de considerarlo pertinente.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

PRIMERO.- Considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y en su lugar, por Secretaría, **CORRER** traslado a las partes por el término de diez (10) días para presentar sus alegatos de conclusión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Vencido el término anterior, por Secretaría, **CORRER** traslado al Ministerio Público, sin retiro del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 623 de la Ley 564 de 2012.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Magistrado

(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de CPACA y goza de plena validez conforme al artículo 7 de la Ley 527 de 1999.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO SUSTANCIACIÓN N° 2021-08- 0291 NYRD

Bogotá, D.C., agosto dieciocho (18) de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN: 250002341000201800265-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: TRANSPORTE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA S.A.S.
DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE.
TEMAS: ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ADJUDICAN LA RUTA PUENTE NACIONAL-CHIPATA-SANTANDER- (VÍA VÉLEZ- LA POLVORERÍA)
ASUNTO: APLAZA AUDIENCIA INICIAL

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

TRANSPORTES SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA S.A.S, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la ley 1437 de 2011, presentó demanda en ejercicio del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, en contra de la Nación MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Como quiera que ya fueron resueltas las excepciones propuestas, atendiendo lo dispuesto por el artículo 283 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 38° de la ley 2080 que modificó el parágrafo 2 del artículo 175 de CAPACA, se fija como fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial el día 08 de septiembre de 2021 , a las 3:30 p.m., a través de la plataforma Microsoft Teams, para lo cual, se remite el siguiente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY5MWZkMzQtYmMyMC00YzQ1LWlzODQtNmM2MTlmNDAzYTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622c8a98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22a7a0a236-1d45-4320-ade2-05b135d17554%22%7d

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

PRIMERO. - APLAZAR fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial la cual será el día el día 08 de septiembre de 2021, a las 3:30 p.m, a través de la plataforma Microsoft Teams, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - Por Secretaría **NOTIFICAR** a las partes de la presente decisión, remitiendo el link de la plataforma Teams para la celebración de la Audiencia Inicial a las direcciones electrónicas dispuestas por las partes, de conformidad con lo expuesto en la presente providencia.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN
Magistrado
Firmado electrónicamente

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de CPACA y conserva plena validez, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999.



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B

AUTO INTERLOCUTORIO N°2021-08-439 NYRD

Bogotá D.C., Doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	25000234100020180038800
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	ABC FOR WINNERS S.A.S
DEMANDADO:	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
TEMAS:	MEDIDAS DE INTERVENCION ADMINISTRATIVA
ASUNTO:	NO REPONÉ Y CONCEDE RECURSO DE APELACION

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso de reposición y en subsidio apelación presentado contra el Auto No. 2021-06-301 del 03 de junio de 2021 mediante el cual se declaró de oficio la excepción previa de *inepta demanda*.

I. ANTECEDENTES

La sociedad comercial ABC FOR WINNER S.A.S, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la ley 1437 de 2011, presentó demanda en ejercicio del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, en contra de SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se ordene: “Revocar en su totalidad lo ordenado en la Resolución No. 300-003195 del 29 de agosto de 2017, por la cual se adopta una medida de intervención administrativa respecto de la Sociedad ABC WINNER S.A.S., expedida por el Superintendente delegado para Inspección Vigilancia y Control, notificada por Aviso el día 15 de septiembre de 2017. Así como el Auto de Ejecución del 14 de noviembre de 2017 dentro del expediente 76745”.

Mediante auto del 02 de noviembre de 2018, se admitió la demanda ordenando la notificación personal a la Superintendencia de Sociedades el día 22 de noviembre de 2018, el cual presentó contestación el día 04 de marzo de 2019, con excepciones previas, las cuales fueron declaradas no probadas y en su lugar se declaró de oficio la excepción previa de *inepta demanda*.

Mediante escrito radicado el 21 de junio de 2021 el apoderado judicial de la sociedad ABC FOR WINNERS, interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación contra el auto No. 2021-06-301 del 03 de junio de 2021.

II CONSIDERACIONES

2.1. Decisión susceptible de Recurso:

Se trata No. 2021-06-301 del 03 de junio de 2021, a través del cual se declaró de oficio la excepción previa de *inepta demanda*, y se dio por terminado el proceso.

2.1. Procedencia de los recursos de reposición y apelación

Es menester advertir que conforme lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 12 del Decreto 806 de 2020 contra la providencia que resuelva las excepciones previas y/o mixtas procede el recurso de apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado, sin embargo el artículo 243 modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021 enlista taxativamente las providencias sobre las cuales procede el recurso de apelación en los siguientes términos:

ARTÍCULO 62. *Modifíquese el artículo [243](#) de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:*

Artículo [243](#). *Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:*

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.

2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.

3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.

4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.

5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.

6. El que niegue la intervención de terceros.

7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.

8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.

En ese orden, si bien la decisión proferida en auto de 03 de junio de 2021 que resolvió declarar de oficio la excepción previa de “*inepta demanda*”, fue expedida en vigencia de la ley 2080 de 2021, se tiene que el recurso de reposición fue interpuesto oportunamente el 21 de junio de 2021, por lo que conforme lo previsto en los artículos 242 y 243 de la Ley 1437 de 2011 modificados por los artículos 61 y 62 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala decidirá el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada por ser el legalmente procedente contra la providencia recurrida.

2.3. Sustento Fáctico y Jurídico del Recurso de Reposición:

Sostiene que, bajo que argumento se puede precisar que el acto administrativo proferido, era un acto de carácter jurisdiccional ya que no fue proferido por una delegación, o una autoridad y funcionario que estaba investido de funciones

jurisdiccionales, por lo tanto, no puede considerarse los actos demandados como un acto jurisdiccional.

Adicionalmente manifiesta que la excepción que debió declararse fue la de TRAMITE INADECUADO, ya que la demanda esta fundada en hechos y pretensiones que alegan el actuar ilegal de la Superintendencia de Sociedades, en donde se le han causado perjuicios y por ellos es deber de la administración de justicia conocer de estos hechos. Solicita de forma subsidiaria que si no se revoca el auto que declara la inepta demanda de forma principal, deberá declarar la falta de competencia para conocer el presente asunto, y remitirlo a la sección tercera para que estos procedan a realizar el estudio en los términos de un medio de control de reparación directa.

Argumenta que cuenta con más mecanismos para la defensa de sus derechos como la tutela efectiva, que conducen a la configuración de la causal de revisión por infracción del artículo 29 constitucional en tanto la decisión de inepta demanda estuvo fundada en motivos abiertamente incompatibles.

Solicita que se revoque el auto del 03 de junio de 2021, y en caso de ser negado, se conceda el recurso de apelación ante el Honorable Consejo de Estado.

Como pretensión subsidiaria solicita, que se remita la demanda a la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se proceda a realizar el estudio del respectivo medio de control de reparación directa, tomando todas las medidas de saneamiento correspondiente.

2.4. Traslado del Recurso

El traslado del recurso fue fijado el 22 de julio de 2021 tal y como obra en constancia secretarial al folio 296 del Cuaderno Principal, el cual inicio el 23 de julio de 2021, hasta el 27 de julio de 2021 en silencio.

2.5 Consideraciones de Fondo en torno al Recurso de Reposición

La sala reitera los argumentos expuestos en el auto que se declaró de oficio la excepción previa de inepta demanda ya que la Resolución No. 300-003195 del 29 de agosto de 2017 y el auto de ejecución del 14 de noviembre de 2017, expedidos por la Superintendencia de Sociedades, fueron expedidos en ejercicio de la facultad otorgada a dicha entidad a través del Decreto 4334 de 2008, mediante el cual se expidió un procedimiento de intervención estatal en desarrollo del Estado de Emergencia Social, decretado a través del Decreto 4333 de 2008 que se había declarado debido a la crisis social y económica que se presentó en el país en el año 2008. Lo anterior, por el ejercicio de la actividad financiera de forma ilegal, al haberse proliferado de manera desbordada distintas modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados.

De la figura de intervención estatal contenida en el Decreto no. 4334 de 2008 se observa lo siguiente:

“ARTÍCULO 1o. INTERVENCIÓN ESTATAL. Declarar la intervención del Gobierno nacional, por conducto de la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera, en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollan o participan en la actividad financiera sin la debida autorización estatal, conforme a la ley, para lo cual se le otorgan a dicha

Superintendencia amplias facultades para ordenar la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de dichas personas, con el objeto de restablecer y preservar el interés público amenazado. Asimismo, procederá la intervención del Gobierno nacional en los términos anteriormente expuestos, cuando dichas personas realicen operaciones de venta de derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza sin el cumplimiento de los requisitos legales.

(...)

ARTÍCULO 3o. NATURALEZA. *El presente procedimiento de intervención administrativa se sujetará exclusivamente a las reglas especiales que establece el presente decreto y, en lo no previsto, el Código Contencioso Administrativo. Las decisiones de toma de posesión para devolver que se adopten en desarrollo del procedimiento de intervención tendrán efectos de cosa juzgada erga omnes, en única instancia, con carácter jurisdiccional.*

ARTÍCULO 4o. COMPETENCIA. *La Superintendencia de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera será la autoridad administrativa competente, de manera privativa, para adelantar la intervención administrativa a que alude este decreto.*

(...)

ARTÍCULO 7o. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN. *En desarrollo de la intervención administrativa, la Superintendencia de Sociedades podrá adoptar las siguientes medidas:*

a) La toma de posesión para devolver, de manera ordenada, las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas;

b) La revocatoria y reconocimiento de ineficacia de actos y negocios jurídicos, celebrados con antelación a la toma de posesión;

c) La devolución de bienes de terceros, no vinculados a la actividad no autorizada,

d) En caso de que a juicio de la Superintendencia se presente una actividad con la cual se incurra en alguno de los supuestos descritos en el presente decreto, por parte de una persona natural o jurídica y ésta manifieste su intención de devolver voluntariamente los recursos recibidos de terceros, esta Entidad podrá autorizar el correspondiente plan de desmonte. En el evento que dicho plan se incumpla se dispondrá la adopción de cualquiera de las medidas previstas en este decreto, sin perjuicio de las actuaciones administrativas y penales a que hubiere lugar;

e) La suspensión inmediata de las actividades en cuestión, bajo apremio de multas sucesivas, hasta de dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta medida se publicará en un diario de amplia circulación nacional indicando que se trata de una actividad no autorizada;

f) La disolución y liquidación judicial de la persona jurídica o de cualquier contrato u otra forma de asociación que no genere personificación jurídica, ante la Superintendencia de Sociedades, independientemente a que esté incurso en una situación de cesación de pagos.

g) La liquidación judicial de la actividad no autorizada de la persona natural sin consideración a su calidad de comerciante;

(...)." (negritas adicionales).

En virtud de lo anterior, es claro que el Gobierno Nacional otorgó amplias facultades a la Superintendencia de Sociedades para que interviniera en las operaciones y, en general, sobre el patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollaran o participaran en actividades de captación ilegal de dinero. Asimismo, **dispuso que la naturaleza del proceso de intervención estatal fuera jurisdiccional**, si se tiene en cuenta que las decisiones que profiere dicha entidad, en desarrollo de este, tienen efectos de cosa juzgada.

En ese orden de ideas, las atribuciones jurisdiccionales otorgadas a la Superintendencia de Sociedades, mediante el Decreto No. 4334 de 2008, son plenamente válidas y no son contrarias a la Constitución Política según el control de constitucionalidad hecho por la Corte Constitucional en la sentencia C-145 de 2009¹ en la que concluyó lo siguiente:

“3.1. El ejercicio de funciones jurisdiccionales por la Superintendencia de Sociedades encuentra fundamento en el artículo 116 superior, según el cual “excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas”; ha de entenderse que la acepción “ley” hace referencia no sólo a las normas que expide el Congreso en desarrollo de su función legislativa ordinaria, sino también a aquellas disposiciones que materialmente tienen tal carácter, como es el caso de los decretos legislativos de estados de emergencia social (art. 215 Const.), a los cuales la Carta expresamente atribuye “fuerza de ley”.

Conviene recordar, al respecto, que la jurisprudencia de esta Corte ha avalado el desempeño de la función jurisdiccional por parte de la Superintendencia de Sociedades, como entidad administrativa nacional encargada de la inspección, vigilancia y control de sociedades no vigiladas por otras Superintendencias, en desarrollo de procesos de liquidación obligatoria de sociedades mercantiles, reconociendo que las decisiones que adopte en ese ámbito constituyen providencias judiciales.

Además, la asignación de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades armoniza con la materialidad de los asuntos de los que debe ocuparse esa entidad en desarrollo de la función de intervención, en particular la toma de posesión, que puede suscitar verdaderos conflictos de intereses con eventuales efectos jurídicos en otros procesos judiciales, dado que en el contexto del Decreto 4334 de 2008 esa medida tiene por finalidad asumir la administración de la intervenida para devolver los dineros captados irregularmente del público, adoptando decisiones para cumplir con ese objetivo, las cuales, por su naturaleza jurisdiccional, escapan al ámbito de control de la justicia contenciosa administrativa.” (negritas adicionales).

De la lectura anterior se puede concluir que la Superintendencia de Sociedades, en desarrollo del proceso de intervención administrativa, constituye una medida de obligatorio cumplimiento de **naturaleza jurisdiccional no susceptible de control ante la jurisdicción** contencioso administrativa, por lo tanto, la sala dispondrá no REPONER el auto del 03 de junio de 2021, mediante el cual se declaró de oficio la excepción previa de *inepta demanda*. Por tanto, se concederá el recurso de apelación en efecto suspensivo ante el H. Consejo de Estado.

Ahora bien, en cuanto a la solicitud del demandante, respecto de la cual solicita el envío a la Sección tercera de esta corporación para que se le de el tramite de

¹ Sentencia proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, MP Nilson Pinilla Pinilla.

REPARACION DIRECTA, una vez revisadas las pretensiones de la demanda obrantes a folio 06 del cuaderno principal las mismas establecen:

*“Revocar en su totalidad lo ordenado en la Resolución 300-003195 del 29 de Agosto de 2017, por la cual se adopta una medida de intervención administrativa respecto de la sociedad **ABC FOR WINNER S.A.S.**, expedida por el Superintendente Delegado para Inspección Vigilancia y Control, notificada por Aviso el día 15 de Septiembre de 2017. Así como el **Auto de Ejecución del 14 de noviembre de 2017** dentro del expediente 76745”.*

Así mismo el poder otorgado por la sociedad ABC FOR WINNERS S.A.S, obrante a folio 23 del Cuaderno principal establece *“(…) para que en su condición de abogada, me inicié y lleve hasta su culminación medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Superintendencia de Sociedades por la Resolución Número 300-0031195 de 2016 (…).*

Conforme a lo anterior no podría esta judicatura darle el trámite de reparación directa, cuando el poder conferido y las pretensiones de la misma no anuncian en ninguna forma que pretenden la reparación directa como ahora quiere manifestarlo el demandante.

Ahora que, si quisiera tramitar el medio de control de Reparación Directa, puede acudir ante el juez competente, radicando la correspondiente demanda junto con el agotamiento del requisito de procedibilidad, pero no puede hacerse valer una pretensión de legalidad de un acto como una reparación directa en la que ninguno de los elementos se concretaron en la demanda (desde el poder, hechos, conciliación, etc.), y menos aun cuando se ha ejercido controvirtiendo la legalidad de la actuación de la administración.

Por todo lo anterior, se declara confirma la providencia del 03 de junio del 2021, y se concede en efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto ante el H. Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,

RESUELVE

PRIMERO. - NO REPONER el auto de 03 de junio de 2021 por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - CONCEDER, en el efecto suspensivo ante el Honorable Consejo de Estado, el recurso de apelación contra Auto No. 2021-06-301 del 03 de junio de 2021, radicado por la parte demandante y obrante a folios 291 a 294 del cuaderno principal.

TERCERO. - POR SECRETARIA, remitir la totalidad del expediente para el trámite del recurso de alzada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN
Magistrado
Firmado electrónicamente

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
Firmado electrónicamente

OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Magistrado
Firmado electrónicamente

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados que conforman la Sala de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 y conserva plena validez, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO DE SUSTANCIACIÓN N° 2021-08-302 NYRD

Bogotá, D.C., Agosto dieciocho (18) de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	11001334001 2018-00441-01
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
DEMANDADO:	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ASUNTO:	CORRE TRASLADO PARA ALEGAR

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Mediante sentencia proferida el día 5 de febrero de 2020, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., negó a las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada por la parte demandante.

El 2 de julio de 2021 por medio del Auto N° 2021-07-333- NYRD, se admitió el recurso de apelación interpuesto y se notificó al Ministerio Público, por lo que sería del caso señalar fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empero considera esta Judicatura innecesaria su realización y en consecuencia, se dispondrá en su lugar correr traslado por el término de diez (10) días a las partes para presentar sus alegatos de conclusión.

Una vez vencido este término se concederá un término de diez (10) días al Ministerio Público, sin retiro del expediente, para que presente concepto, en caso de considerarlo pertinente.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

PRIMERO.- Considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y en su lugar, por Secretaría, **CORRER** traslado a las partes por el término de diez (10) días para presentar sus alegatos de conclusión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Vencido el término anterior, por Secretaría, **CORRER** traslado al Ministerio Público, sin retiro del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 623 de la Ley 564 de 2012.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Magistrado

(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de CPACA y goza de plena validez conforme al artículo 7 de la Ley 527 de 1999.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUB SECCIÓN B**

Bogotá D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Magistrado Ponente: OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Expediente: No. 110013335024201800509-01
Demandante: FERNANDO ALBERTO SPINEL GÓMEZ
Demandado: ALCALDÍA LOCAL DE SUBA
Referencia: ACCIÓN POPULAR - APELACIÓN DE SENTENCIA

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 3 cdno. ppal.), en atención al recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital – Alcaldía Local de Suba (fls. 150 a y 151 cdno. no. 1), contra la sentencia del 06 de julio de 2020 (fls. 140 a 147 ibidem), proferida por el Juzgado Veinticuatro (24) Administrativo del Circuito Judicial De Bogotá, D.C., por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, **dispónese:**

1º) Por ser procedente de conformidad con el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en conjunto con el artículo 322 de la ley 1564 de 2012, **admítese** el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital – Alcaldía Local de Suba, contra la sentencia del 06 de julio de 2020 proferida por el juzgado de primera instancia.

2º) Notifíquese esta providencia a las partes.

3º) Notifíquese esta providencia al Agente del Ministerio Delegado ante esta Corporación de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 303 del C.P.A.C.A, norma vigente para la fecha de presentación de la demanda de la referencia, y aplicable al presente asunto por remisión expresa legal del artículo 44 de la Ley 472 de 1998.

4º) Ejecutoriado y cumplido este auto, **regrese** el expediente al Despacho para continuar con el trámite procesal correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Magistrado
Firmado Electrónicamente

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado ponente quien integra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1487 de 2011.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

Bogotá D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Magistrado ponente: ÓSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Radicación: 25000-23-41-000-2018-00551-00
Demandantes: COMBITEXTILES E HILOS SAS
Demandado: DIAN
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto: RESUELVE EXCEPCIÓN PREVIA

Procede la Sala a decidir sobre las excepciones previas propuestas por la entidad demandada de conformidad con lo expresamente dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo 806 de 2020¹ que preceptúa lo siguiente:

“Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las

¹ Norma vigente para el momento en que se encontraba ya en curso el trámite de las excepciones propuestas y por tanto debe aplicarse la norma de tránsito legislativo prevista en el inciso final del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021.

excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable.” (negritas fuera de texto).

I. ANTECEDENTES

1. Cuestión previa

El objeto del presente medio de control recae en la nulidad de las siguientes decisiones administrativas:

- i) Resolución 1-03-238-421-636-1-0002353 del 24 de mayo de 2017, expedida por la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá por medio de la cual se decomisó una mercancía.
- ii) Resolución 03-236-408-601-1412 del 14 de noviembre de 2017, proferida por la División de Gestión Jurídica Aduanera de la misma dirección seccional, a través de la cual se resolvió un recurso de reconsideración.

A su vez, se advierte que a título de restablecimiento, la parte demandante pretende se le devuelva la mercancía encartada en acta de aprehensión 03-2019 del 10 de noviembre de 2016 por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y, en caso de deterioro de la misma, se ordene el reconocimiento del valor del avalúo que indicó en la demanda.

2. Excepción propuesta

La DIAN en la contestación de la reforma a la demanda (fls. 266 a 272, cuaderno principal), formuló como excepción la siguiente:

"Falta de legitimación en la causa del demandante para solicitar la vinculación de la Aduana de Cali como litis consorte facultativo", pues considera que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 de la Ley 1437 de 2011 tal facultad le corresponde es a la misma Aduana de Cali y no a la sociedad accionante.

Indicó que la Aduana de Cali no tiene ningún interés jurídico en intervenir en el proceso que le es ajeno, ya que no intervino de manera alguna en los actos acusados.

Precisó que la DIAN es una sola entidad, por lo que tampoco puede considerarse la referida aduana como un tercero con interés. Por tanto, es la dirección la única autoridad facultada para el control aduanero y la verificación del legal ingreso de la mercancía al territorio aduanero nacional.

3. Traslado de las excepciones

Dentro del término de traslado de las excepciones con fijación en lista del 18 de enero de 2019, con inicio y vencimiento del traslado del 21 al 23 del mismo mes y año, la parte actora sostuvo lo siguiente:

Precisó que la diligencia de control aduanero fue una sola y única acción, en la que se inspeccionó de manera simultánea las mercancías que la sociedad demandante tenía almacenadas en sus bodegas de Bogotá y Cali.

Insistió en que la Aduana de Cali debe presentarse al proceso, no para que responda, pues es claro que la demanda no se promovió en su contra, sino para que aclare cómo adelantaron el operativo y el procedimiento que definió la situación jurídica de la mercancía aprehendida, especialmente en la manera en que se tomaron las muestras y cómo se practicaron los análisis "merciológicos" a dichas muestras.

Adujo que la verdadera razón por la que Aduana de Bogotá no desea que la de Cali intervenga en este proceso es porque quedarían en evidencia los crasos errores que cometió la Aduana de Bogotá en el operativo y la forma cómo definieron la situación jurídica antes mencionada.

Hizo referencia al trámite administrativo surtido en el cual considera que existió una vulneración a su derecho al debido proceso ya que si el contador no se encontraba en la empresa al momento de la visita de la funcionaria de la DIAN, esta debía esperarlo en un tiempo prudencial o reprogramar la cita, pero ello no ocurrió así.

Agregó que tampoco rotularon bien las muestras, ni se tomaron con la rigurosidad exigida en el manual de toma de muestras, ni las acompañaron con las declaraciones de importación para que la División de Laboratorio pudiera contar si aquellas muestras se encontraban amparadas en las declaraciones aportadas; como sí lo hizo, de manera correcta la Aduana de Cali.

II. CONSIDERACIONES

Según lo dispuesto en el citado artículo 12 del Decreto 806 de 2020 las excepciones previas al igual que las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva se decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso.

En esos términos respecto de la excepción propuesta, se encuentra lo siguiente:

En relación con la falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la entidad demandada debe precisarse que esta es de naturaleza mixta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, se contempla que el *"Juez o Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva..."*.

Asimismo, se recuerda que la legitimación en la causa se define como un presupuesto de la pretensión o de la oposición para

efectos de obtener sentencia de fondo, consistente en la facultad que otorga la ley al demandante y al demandado para perseguir judicialmente una pretensión o para responderla y contradecirla válidamente, según sea el caso, esto es, si existe o no relación real del demandado con la pretensión que manifiesta en la demanda.

En lo particular, resulta del caso referenciar lo siguiente:

"... se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa... La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas..."²

De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que necesariamente estarlo materialmente, en consideración a que, si bien puede integrar una de las partes de la *litis*, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto³.

Por tanto, para el caso en particular se observa que, a juicio de la sociedad demandante la Aduana de Cali debe presentarse al proceso no para que responda sino para que aclare la forma y el procedimiento que se adelantó en la aprehensión de su mercancía.

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Bogotá, D. C., febrero cuatro (4) de dos mil diez (2010). Magistrado ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación número: 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720). Actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros. Demandado: Municipio de Santiago de Tolú y otros.

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto de 30 de enero de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicado número 25000-23-26-000-2010-00395-01(42610).

A su vez, la parte demandada se opuso a tal indicación al proponer la excepción previa de "[f]alta de legitimación en la causa del demandante para solicitar la vinculación de la Aduana de Cali como litis consorte facultativo".

Al respecto, se advierte que mediante providencia del 11 de septiembre de 2019, el magistrado ponente denegó la solicitud de vincular en calidad de litisconsorte facultativo a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Cali, petición que presentó la empresa demandante con la reforma de la demanda.

De igual manera, en dicho proveído se advirtió que por auto del 22 de noviembre de 2018 se admitió la mencionada reforma de la demanda, pero que no se había realizado el pronunciamiento respectivo de la vinculación de dicha dirección de Cali.

En lo particular, en la aludida providencia se indicó que "...revisados nuevamente los actos administrativos cuya nulidad se solicita el Despacho observa que la Dirección de Impuestos y Aduanas de Cali no intervino en la expedición de los mismos, ni a dicha seccional le asiste un interés directo en el resultado del proceso, y como ya se advirtió, la demanda fue notificada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN que representa a todas las seccionales que la conforman..."

Ahora bien, en esta oportunidad resulta del caso resolver acerca de la excepción previa de falta de legitimación por activa para solicitar la vinculación Dirección de Impuestos y Aduanas de Cali.

Al respecto, se encuentra que la parte actora manifestó su interés en que la referida dependencia se presentara al proceso e interviniera para que aclarara asuntos relacionados con el procedimiento adelantado en la mercancía aprehendida.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 de la Ley 1437 de 2011, esa potestad de intervenir radica es en la persona, autoridad o entidad que tenga el interés directo y, por tanto, es a ella a la que le compete "...pedir que se la tenga como coadyuvancia o impugnadora, litisconsorte o como interviniente ad excludendum".

Por lo que, para la Sala no se encuentra probada la falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la DIAN al contestar la reforma de la demanda, pues precisamente esa facultad de intervención de la Dirección de Cali, en la forma como lo pretende la sociedad demandante, no reside en esta última, sino en el que tenga el interés directo y así lo pida en el proceso, que en tal caso correspondería a la propia Dirección de Cali; lo cual no ocurre en el presente caso.

Al respecto, se advierte que la aludida dirección de Cali es una de las dependencias de la parte demandada en este proceso y, cuya representación se establece es en la Unidad Administrativa Especial del orden nacional demandada, esto es, en la DIAN.

De manera que, en lo particular, no es factible que se configure la falta de legitimación por activa de la demandante para pedir la intervención de una dependencia de la demandada, puesto que la parte actora no cuenta con la facultad para solicitar esa intervención y, en tal sentido, tampoco recae sobre ella legitimación alguna frente a dicha petición, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 224 de la Ley 1437 de 2011.

Finalmente, se le reconocerá personería a la apoderada de la DIAN, conforme al poder y soportes visibles a folios 294 a 296 –incluye CD- del cuaderno principal.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B,**

RESUELVE:

1º) Declárase no probada la excepción previa de la "*[f]alta de legitimación en la causa del demandante para solicitar la vinculación de la Aduana de Cali como litis consorte facultativo*", propuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por los motivos expuestos en esta providencia.

2º) Reconócese personería a la abogada Nancy Piedad Téllez Ramírez, como apoderada judicial de la DIAN, conforme al poder y sus soportes visibles a folios 294 a 296, que incluye un CD, del cuaderno principal.

3º) Una vez ejecutoriada la presente decisión, devolver el expediente al Despacho para continuar con el trámite respectivo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÓSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Magistrado
Firmado electrónicamente

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
Firmado electrónicamente

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN
Magistrado
Firmado electrónicamente

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados integrantes de la Sala de Decisión de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de CPACA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B

Bogotá, D.C., quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Magistrado Ponente: OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Radicación: No. 25000-23-41-000-2018-00910-00
Demandante: ADRIANA TOLEDO Y OTROS
Demandados: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y OTRA
Referencia: ACCIÓN DE GRUPO
Tema: FRAUDE EN INVERSIONES DE PAGARÉS –
LIBRANZAS A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD
ELITE INTERNACIONAL AMÉRICAS S.A.S.
Asunto: AUTO QUE RESUELVE EXCEPCIONES
PREVIAS

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 300 cdno. ppal.), y como quiera que las entidades demandadas propusieron las excepciones previas de "*falta de legitimación en la causa por pasiva*" y "*caducidad*", y "*trámite inadecuado*", respectivamente, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 57 de la Ley 472 de 1998 y en el artículo 12 del Decreto 806 de 2020, procede la Sala a resolver lo pertinente sobre las mismas, esta última norma preceptúa lo siguiente:

"Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable.” (negrillas de la Sala).

I. ANTECEDENTES

1) La Superintendencia Financiera de Colombia sustentó la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, bajo los siguientes argumentos:

"5.1.1. En relación con el Decreto 2555 de 2010

Debe llamarse preliminarmente la atención en el hecho que la citada sociedad **ELITE INTERNACIONAL AMÉRICAS S.A.S.** no está ni ha estado sometida a vigilancia de esta Superintendencia, ya que las entidades y actividades respecto de las que se ejercen dichas funciones corresponden a las previstas en el numeral 2 del artículo 325 del EOSF, en el numeral 1º del párrafo tercero del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, así como en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 102 de la Ley 795 de 2003.

(...)

5.1.2. En relación con el Decreto 4334 de 2008

Cabe señalar que con el objetivo de evitar que personas no autorizadas ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas y en cumplimiento de las funciones establecidas en el literal a), numeral 4, del artículo 326 del EOSF, en los numerales 1, 2, 6 y 22 del entonces artículo 11.2.1.4.35 y en el artículo 11.2.1.3.2 del Decreto 2555 de 2010, en el año 2012 y 2013 se efectuaron dos visitas de inspección a la sociedad **ELITE INTERNACIONAL AMÉRICAS S.A.S.**, que se relacionarán con detalle en el numeral 12.5 de este escrito, visitas que arrojaron como resultado que no se configuraban los supuestos de captación o recaudo no autorizado de dineros del público a que aluden el Decreto 1981 de 1988 (hoy incorporado en el Decreto 1068 de 2015) y el Decreto 4334 de 2008, conclusiones contenidas en los informes de los cuales se remitieron copias tanto a la Superintendencia de Sociedades, hoy convocada, así

como a la Superintendencia de la Economía Solidaria para lo de su competencia.

5.1.3. En relación con la Ley 1527 de 2012

Es oportuno precisar que si bien la Ley 1527 de 2012 le otorgó a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA las funciones de inspección, vigilancia y control sobre algunas de las entidades operadoras de libranzas, vale la pena precisar que las únicas cooperativas vigiladas por esta Entidad son las cooperativas financieras, las cuales son autorizadas para captar recursos del público.

Ahora bien, debe señalarse que las cooperativas originadoras de los "pagarés-libranzas" en este caso fueron COOINVERCOR, COOCREDIMED, COOMUNDOCRÉDITO, COOPSUBA, COOPHABIT y CA ESTRATEGIAS FINANCIERAS S.A.S, las cuales están bajo la vigilancia de la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

De lo anterior se concluye que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA no está legitimada en la causa por pasiva para ser convocada a un juicio de responsabilidad por omisión, puesto que:

- No tenía la obligación de ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto de **ELITE INTERNACIONAL AMÉRICAS S.A.S.** conforme a lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 y demás normas concordantes.
- Habiendo ejercido las funciones que le competían para evitar que personas no autorizadas ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas (literal a) del numeral 4º del artículo 326 del EOSF), remitió la documentación soporte de las actividades adelantadas respecto de la sociedad ELITE INTERNACIONAL AMÉRICAS S.A.S. a las Superintendencias de Sociedades y Economía Solidaria, a través de los Oficios No. 2013047650-008 y 2013047650-009 del 16 de julio de 2014.
- Las cooperativas con las que ELITE INTERNACIONAL AMÉRICAS S.A.S. adquiriría las libranzas no se encontraban ni se encuentran sometidas al control y vigilancia de la SFC, debido a que no tienen la naturaleza de cooperativas financieras.

5.1.4. Actuación de la SFC respecto de la sociedad ELITE INTERNACIONAL AMÉRICAS S.A.S. en aras a establecer una posible situación de captación ilegal de dineros del público.

Como ya se indicó en el numeral 5.1.2., esta Superintendencia realizó dos visitas de inspección a la sociedad ELITE INTERNACIONAL AMÉRICAS S.A.S., las cuales fueron ordenadas a través de los oficios radicados 2012010530-000 del 10 de febrero de 2012 y 2013047650-000 del 31 de mayo de 2013, llevadas a cabo del 13 al 17 de febrero de 2012 y del 4 al 7 de junio de 2013, respectivamente.

(...)

Ahora bien, dado que en dichas visitas se estableció que las cooperativas multiactivas COOINVERCOR y COOCREDIMED, entre otras, estaban vinculadas a la operación de negociación de "pagares-libranzas" y que las mismas estaban sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Economía Solidaria se dispuso dar traslado de los informes correspondientes por medio del radicado No 2013047650-009 del 16 de julio de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 39 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 100 de la Ley 795 de 2003.

Igualmente dichos informes se pusieron en conocimiento de la Supersociedades por medio del radicado número 2013047650-008 del 16 de julio de 2014, por cuanto se determinó que aquellos describían hechos que podrían recaer en el ámbito de competencia de la misma¹.

*Cabe señalar que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES por medio de auto número 2016-01-513060 del 18 de octubre de 2016, decretó la terminación del proceso de reorganización de **ELITE INTERNACIONAL AMÉRICAS S.A.S.** por la situación jurídica, financiera y administrativa de esta empresa y decretó la apertura del proceso de liquidación. Posteriormente, dicho ente de control por medio de auto número 2016-01-578631 del 19 de diciembre de 2016, decretó la terminación del proceso de liquidación judicial e inicio la liquidación judicial como medida de intervención de ELITE, en los términos del Decreto 4334 de 2008 al encontrar configurados los presupuestos de captación consagrados en el artículo 2.18.2.1 del decreto 1068 de 2015".*

2) Así mismo, alegó la excepción de "caducidad", sustentada en que, el conteo de la caducidad para la Superintendencia Financiera de Colombia no debe hacerse desde el momento en que la Superintendencia de Sociedades profirió el auto No. 400-016025 del 18 de octubre de 2018 (sic), mediante el cual ordenó la liquidación de la sociedad Elite Internacional Américas S.A.S., toda vez que, se trata de dos superintendencias diferentes y que de acuerdo con la Constitución y la ley tienen funciones distintas.

Lo anterior teniendo en cuenta que, después de revisar cuáles son las funciones que tiene a cargo la Superintendencia Financiera de Colombia y de acuerdo con ellas, cuáles fueron sus actuaciones respecto a la sociedad Elite Internacional Américas S.A.S., se consideró por esa

¹ Elite Internacional Américas S.A.S. entró en vigilancia de la Supersociedades el 1º de abril de 2014, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2do del artículo 2.2.2.1.1.1. del Decreto 1074 de 2015, al superar 30.000 SMLV de ingresos al tenor de lo indicado en los estados financieros del año 2013

Superintendencia que finalizó su proceder con la remisión de información a la Superintendencia de Sociedades y a la de Economía Solidaria, mediante sendos oficios No. 2013047650-008 y 009 del 16 de julio de 2014, por ende, manifiesta que, para esta Superintendencia, la caducidad se debe computar desde esta fecha y no desde el momento en que la Superintendencia de Sociedades emitió el acto administrativo en el año 2016.

Así las cosas, se tiene que el conteo del término de los dos (2) años establecidos por el legislador para que opere el fenómeno de la caducidad de la acción de grupo, expresa que debe iniciar desde el 17 de julio de 2014, de lo cual se deriva que dicho término feneció el 17 de julio de 2016, configurándose así la causal objetiva de caducidad del medio de control que se quiere ejercer respecto de la Superintendencia Financiera de Colombia, puesto que la demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 19 de septiembre de 2018, como se evidencia en la página web de la referida corporación.

3) Por su parte, la Superintendencia de Sociedades alegó la excepción de "*trámite inadecuado*", sustentada en que, los miembros del grupo no tienen las condiciones uniformes que exige la norma, pues de un lado, unos fueron atraídos por la fuerza comercial de EIAS S.A. de Bogotá, otros de Barrancabermeja, etc., y de otro, recuerda que las inconsistencias de los pagarés – libranzas iban desde la venta de obligaciones inexistentes, pagarés adulterados para comercializarlos por valores mayores a los reconocidos por las operadoras, obligaciones vendidas por valores superiores a los flujos esperados por parte las pagadurías, entre otras.

De esta forma, con la acumulación subjetiva de las pretensiones, se ha privado a la entidad demandada a estudiar caso por caso ante un Comité de Conciliación y Defensa Judicial al amparo del Decreto 1716 de 2009 y se está vulnerando el derecho a la defensa y auto tutela porque se ha reducido el término de traslado para estudiar en un solo proceso la situación particular de un mayor número de personas.

II. CONSIDERACIONES

1) La excepción "*falta de legitimación en la causa por pasiva*" alegada por el apoderado de la Superintendencia Financiera de Colombia, no está llamada a prosperar, toda vez que, en atención a lo establecido en el literal a) del numeral 4º del artículo 326 del EOSF, como bien lo expresó dicha entidad en su escrito de contestación de demanda, tiene atribuida como una de sus facultades de supervisión la de "*practicar visitas de inspección cuando exista evidencia atendible sobre el ejercicio irregular de la actividad financiera, obtenida de oficio o suministrada por denuncia de parte, a los establecimientos, oficinas o lugares donde operan personas naturales o jurídicas, no sometidas a vigilancia permanente, examinar sus archivos y determinar su situación económica, con el fin de adoptar oportunamente, según lo aconsejen las circunstancias particulares del caso, medidas eficaces en defensa de los intereses de terceros de buena fe, para preservar la confianza del público en general*", y en el caso concreto, lo que se pretende es la indemnización por lo invertido por los demandantes en pagaré-libranza vendidos por la sociedad Elite Internacional Américas S.A.S., además de los rendimientos o utilidades que se debieron haber recibido de acuerdo a los términos del contrato suscrito con esa sociedad, la cual fue visitada e inspeccionada por la Superintendencia Financiera cuyos informes fueron remitidos a las Superintendencias de Sociedades y Economía Solidaria, a través de los oficios nos. 2013047650-008 y 2013047650-009 del 16 de julio de 2014, por tanto, le asiste plena legitimidad para ser demandada dentro del proceso como posible responsable.

2) Frente a la excepción de "*caducidad*" alegada por la misma Superintendencia no está llamada a prosperar, toda vez que, como se resolvió mediante auto del 28 de enero de 2019, el término de caducidad se debe contar desde el 18 de octubre de 2016, fecha en la cual según lo manifestado por la parte actora, la Superintendencia de Sociedades

profirió el auto no. 400-016025 en el que ordenó la liquidación de la sociedad Elite Internacional Américas S.A.S.

Así las cosas, de la demanda presentada se tiene que el hecho generador del presunto daño se agotó en ese momento, por lo que, el término de caducidad que establece el artículo 47 de la Ley mencionada, es decir, el plazo de dos (2) años debe contabilizarse a partir del momento de la ocurrencia del daño – fecha en que se causó. Como bien se anotó el hecho generador ocurrió el 16 de octubre de 2016, lo cual significa que, a partir del día siguiente comenzó a correr el término de caducidad de la acción de grupo, venciéndose el 17 de octubre de 2018; revisado el expediente contentivo del proceso de acción de grupo, se encuentra que los actores presentaron demanda ante la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos en Bogotá el día 17 de agosto de 2018 (fls. 1 a 19 cdno. ppal.). Entonces, al momento de la presentación, la acción no había caducado, como erradamente se consideró por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, ya que, pretende contabilizar la caducidad desde el momento en que envió a las Superintendencias de Sociedades y Economía Solidaria los resultados de la visita de inspección realizada a la sociedad Elite Internacional Américas S.A.S., siendo que con ello es que la Superintendencia de Sociedades inició el proceso correspondiente para poder ordenar la liquidación de dicha sociedad, momento en el cual es que se considera que se generó el daño, como ya se ha estudiado.

3) Respecto a la excepción alegada por la Superintendencia de Sociedades denominada "*trámite inadecuado*", en la forma en que ha sido propuesta, se tiene que no está llamada a prosperar, toda vez que, la uniformidad respecto de la relación de causalidad –en tanto elemento que configura la responsabilidad– no resulta exigible para el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-569 de 2004, declaró inexecutable la expresión "*Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad*", contenida en

el inciso 1º del artículo 3 de la Ley 472 de 1998, puesto que era un requisito desproporcionado que restringía el acceso a la administración de justicia y el ejercicio de las demandas de grupo.

Así las cosas, se concluye entonces que el grupo demandante está debidamente constituido si el conjunto de personas que hacen parte del mismo tienen condiciones uniformes respecto del hecho generador del daño y no de los demás elementos que conforman la responsabilidad; por ende, si bien la causa generadora debe ser la misma para todos los integrantes del grupo, el daño causado y las reparaciones concretas a favor de cada uno de ellos pueden ser distintas; en el caso concreto, se tiene que, el hecho de que cada contrato se haya firmado en diferentes ciudades, no significa que no existan condiciones uniformes respecto del alegado hecho generador del daño, pues, según la parte actora, se materializó con la expedición del Auto no. 400-016025 de 18 de octubre de 2016 por parte de la Superintendencia de Sociedades y este consiste en la omisión por parte de las demandadas de vigilar, controlar e intervenir a la sociedad Elite Internacional Américas S.A.S., quien se hizo acreedora de cuantiosos recursos en detrimento de sus inversionistas, por lo anterior, se considera que, la parte actora cumplió con la carga que tenía de establecer los criterios para identificar al grupo supuestamente afectado.

4) En lo atinente a la excepción denominada "*suspensión del proceso por prejudicialidad*" alegada por la Superintendencia de Sociedades, se tiene que esta no se enlista dentro de las excepciones previas establecidas en el artículo 100 del Código General del Proceso, por lo que, la Sala no hará pronunciamiento en esta instancia procesal frente a la misma.

Por lo estudiado, la Sala declarará no probadas las excepciones previas propuestas por las entidades demandadas.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B,**

RESUELVE:

1º) Decláranse no probadas las excepciones previas propuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Ejecutoriado y cumplido este auto, **devuélvase** el expediente al Despacho del Magistrado Ponente para continuar con el trámite procesal correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Magistrado



FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado



MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

Bogotá DC, once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-41-000-2018-01009-00
Demandante: JOSÉ ALBERTO GAITÁN MARTÍNEZ
Demandado: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y OTROS
Medio de control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS
Asunto: DICTÁMEN PERICIAL

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 487 cdno. ppal.) el despacho observa lo siguiente:

1) A través de auto de 22 de junio de 2021 se decretó pruebas en el proceso y en el numeral 4 del acápite denominado “*PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE ACTORA*” se ofició a la Decanatura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre de Colombia Seccional Bogotá DC para que designara un funcionario y/o docente de dicha institución profesional en ingeniería civil para que realice y rinda el dictamen pericial solicitado.

2) Por medio de memorial allegado electrónicamente el 26 de julio de 2021 el representante legal de la Universidad Libre de Colombia manifestó que dicha institución no cuenta con Facultad de Ingeniería Civil y que una vez revisada la nómina de docentes de las facultades se tiene que no cuenta con el personal idóneo para rendir el dictamen pericial requerido dentro del proceso de la referencia.

3) Por lo anterior, en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4 del acápite denominado “*PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE ACTORA*” del auto de 22 de junio de 2019 el despacho dispone lo siguiente:

Por secretaría **requiérase** la colaboración interinstitucional a la Decanatura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Seccional Bogotá DC para que designe a un funcionario y/o docente de dicha institución profesional en ingeniería civil para que realice y rinda el dictamen pericial en los términos de lo requerido en el acápite denominado “*DICTAMEN PERICIAL*” del escrito de la demanda visible en el folio 10 del cuaderno principal del expediente, por Secretaría **comuníquesele** la designación e **infórmele** al mencionado perito que cuenta con un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del momento del recibido de la comunicación para realizar la designación y que a partir de ese momento la persona designada cuenta con el término de un (1) mes para presentar el dictamen pericial; para los fines indicados, **remítase** por la Secretaría copia integral y auténtica de la demanda, de las contestaciones y de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Ponente
(firmado electrónicamente)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma electrónica SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO INTERLOCUTORIO N° 2021-08-453- NYRD

Bogotá D.C., Once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	110013334001 2019 00337 01
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
DEMANDADO:	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ASUNTO:	ADMISIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN
MAGISTRADO:	MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

I ANTECEDENTES.

Mediante sentencia proferida el día dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020), el Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., denegó las pretensiones de la demanda (Archivo PDF Fl 144 C1), decisión que fue apelada por la parte demandante.

II. CONSIDERACIONES.

Para resolver sobre la admisibilidad del recurso de apelación presentado en contra la sentencia proferida el día dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020), se procederá a analizar los presupuestos procesales de conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011, de la siguiente forma:

2.1. Examen Preliminar - Artículo 325 del Código General del Proceso

El artículo 325 del Código General del Proceso refiere que:

“Si la providencia apelada se profirió por fuera de audiencia, el juez o el magistrado sustanciador verificará si se encuentra suscrita por el juez de primera instancia y, en caso negativo, adoptará las medidas necesarias para establecer su autoría.”

Por lo que una vez realizado el examen preliminar se observa que la sentencia del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020), proferida por fuera de audiencia se encuentra suscrita por la Jueza titular del Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., judicatura de primera instancia.

2.2. Procedencia.

El artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que “*Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces.*”, razón por la que el recurso interpuesto resulta ser el procedente al emitirse la decisión de primera instancia por parte del Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.

2.3. Oportunidad.

El artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece:

“ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. *El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:*

*1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, **dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.***” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

De este modo, se tiene que la sentencia proferida el día 18 de diciembre de 2020, fue debidamente notificada a través de mensaje al buzón electrónico para notificaciones judiciales el 14 de enero de 2021, es decir, que los términos para presentar el recurso transcurrieron desde el 19 del mismo mes y año al 1 de febrero hogano.

Así las cosas, y como el recurso fue presentado y sustentado por el demandante el 14 de enero de 2021 (PDF Memorial Fl 144 C.1), se tiene que dicho escrito es oportuno.

2.3 Legitimación e interés para recurrir.

La parte demandante interpone recurso de apelación contra la precitada sentencia proferida el día 18 de diciembre de 2020 mediante la cual se niegan las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, el recurrente se encuentra legitimado dentro de la presente actuación al ser el extremo activo de la *litis* fijada y su recurso fue presentado por su apoderado debidamente autorizado, por lo que al encontrarse inconforme con la sentencia proferida en primera instancia, que resulta adversa a sus intereses, la legitimación en la causa para recurrir consagrada en el artículo 320 del Código General del Proceso resulta avalada, toda vez que, puede interponer el recurso de apelación la parte a quien le haya sido desfavorable la decisión.

2.4. Sustentación del Recurso.

En virtud del artículo 247 precitado, se establece que el recurso de apelación deberá ser sustentado ante la autoridad que profirió la providencia, lo cual se encuentra debidamente acreditado por el recurrente, ya que manifiesta su inconformidad frente a la sentencia de primera instancia, indicando los reparos correspondientes y solicitando sea revocada la decisión emitida.

En consecuencia, una vez realizado el análisis precedente se admitirá el recurso

presentado por el apoderado de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

PRIMERO.- ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020) proferida por el Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEGUNDO.- NOTIFICAR esta providencia al Ministerio Público, según lo dispuesto en el artículo 198 numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

TERCERO.- Notificado el presente auto, devolver el expediente al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Magistrado.

Firmado electrónicamente

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 y conserva plena validez, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

-SECCIÓN PRIMERA-

-SUBSECCIÓN “A”-

Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020)

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO

PROCESO No.: 25269-3333-001-2019-00014-01
DEMANDANTE: JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADA: MUNICIPIO DE VILLETA
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Asunto: Obedézcase y cúmplase y resuelve recurso de apelación contra auto que decretó medida cautelar.

Visto el informe secretarial que antecede, procede la Sala a obedecer y cumplir lo ordenado por el H. Consejo de Estado y en consecuencia, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del Municipio de Villeta – Cundinamarca y el apoderado de la sociedad Actual Constructora S.A.S., contra el auto de fecha dieciocho (18) de diciembre de 2019, mediante el cual el Juzgado Primero (1º) Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá decretó una medida cautelar.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

El señor Jairo Alfonso Robayo Muñoz actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad simple, demandó al Municipio de Villeta – Cundinamarca solicitando como pretensiones:

«Con Fundamento en los anteriores hechos, respetuosamente solicito declarar la nulidad del siguiente acto administrativo: ACUERDO No 011 de JULIO 23 2017 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL AJUSTE DEL PLAN

PROCESO No.: 25269-3333-001-2019-00014-01
 MEDIO DE CONTROL NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
 DEMANDANTE: JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
 DEMANDADO: MUNICIPIO DE VILLET
 ASUNTO: OBEDEZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE
 APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA
 CAUTELAR

BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VILLET – CUNDINAMARCA, PARA LA INCORPORACIÓN DE PREDIOS RURALES, Y RURALES SUBURBANOS AL PERÍMETRO URBANO Y LA ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN DE USOS Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO DE ESTOS PREDIOS, DE CONFORMIDAD AL ART 47 DE LA LEY 1537 DE 2012 MODIFICADO POR EL ART 91 DE LA LEY 1753 DE 2015. Emanado del Concejo Municipal de Villet, sancionado por el señor Alcalde del Municipio de Villet el día 05 de Agosto de 2017 y publicado en la Emisora JAZMAR ESTÉREO el día 23 de julio de 2017.”

2. Providencia apelada

El *A quo* mediante providencia de fecha dieciocho (18) de diciembre de 2019, decretó una medida cautelar frente al acto administrativo demandado resolviendo:

“PRIMERO: DECRETAR la medida cautelar de **suspensión provisional** de los efectos del acto administrativo contenido en el Acuerdo n.º 11 de julio 23 de 2017: **“POR EL CUAL SE ADOPTA EL AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VILLET –CUNDINAMARCA, PARA LA INCORPORACIÓN DE PREDIOS RURALES, Y RURALES SUBURBANOS AL PERÍMETRO URBANO Y LA ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN DE USOS Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO DE ESTOS PREDIOS, DE CONFORMIDAD AL ART 47 DE LA LEY 1537 DE 2012 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY 1753 DE 2015.”**

Los argumentos sobre los cuales se basó el Juzgado Primero (1º) Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá para decretar la medida cautelar fueron los siguientes:

El artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, modificado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015, permite como medida excepcional y extraordinaria que los municipios y Distritos por una sola vez y a iniciativa del Alcalde, en el periodo constitucional comprendido entre los años 2015 y 2020, incorporen al perímetro urbano predio localizados en suelo rural, suburbano o de expansión urbana, requeridos para el desarrollo de Viviendas de Interés

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETA
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

Prioritario (VIP), mediante un trámite especial de ajuste al POT, aprobado directamente por el Concejo Municipal.

La norma, en su numeral 1º indica que tal trámite puede adelantarse sin la realización previa de los trámites de concertación interinstitucional y consulta previstos en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997.

Respecto al cabildo abierto, el *A-quo* indicó que para su correcta aplicación, el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012 (modificado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015), debe atender el artículo 81 de la Ley 134 de 1994 y a su vez, lo regulado posteriormente en la Ley 1757 de 2015, los cuales señalan que el cabildo abierto debe celebrarse durante el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal.

Señala que el Municipio de Villeta no se encuentra en categoría especial, no de primera o segunda categoría, el artículo 23 de la Ley 136 de 1994, ha establecido que estos, sesionarán ordinariamente en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.

Adujo que el proyecto de acuerdo fue presentado el once (11) de junio de 2017 por el Alcalde Municipal, fecha para la cual el Concejo Municipal se encontraba en periodo de receso, por lo que mediante Decreto No. 032 del doce (12) de junio de 2017, el Alcalde convocó al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias, a realizarse durante el periodo comprendido entre el 13 y el 30 de junio de 2017.

Que a través de la Resolución No. 017 del veintiuno (21) de junio de 2017, el Concejo Municipal de Villeta realizó convocatoria pública a una sesión de cabildo abierto, la que se celebró el siete (7) de julio de 2017, es decir, durante el periodo de sesiones extraordinarias convocadas por el Alcalde Municipal.

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETA
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

Argumentó que la figura del cabildo abierto consagrada en el artículo 103 de la Constitución Política, desarrollada en las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, se debe realizar: (i) por al menos un número igual al cinco por mil del censo electoral del municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento y (ii) deben ser presentadas ante la respectiva corporación *“con no menos de quince días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones”*.

Sostuvo igualmente, que mediante lo consignado en las actas de sesión plenaria del Concejo Municipal de Villeta (veinte (20) de junio de 2017), fue la Mesa Directiva del Concejo Municipal quien convocó al cabildo, lo que se plasmó en la Resolución No. 017 de 2017, considerando que la norma es clara al determinar que el mecanismo de participación ciudadana debe ser impulsado por un número no menor a 5 por 1000 del censo electoral y no se trata de un cabildo abierto especial o excepcional que se haya establecido en la Ley 1537 de 2012 o en su modificatoria Ley 1753 de 2015.

Por último, indicó que el artículo 108 de la Ley 134 de 1994, establece que la Registraduría Nacional del Estado Civil llevará un archivo de la utilización de las instituciones y mecanismos de participación ciudadana, entre los cuales se encuentra el cabildo abierto, sin embargo, de la respuesta a la petición elevada por el demandante, el Registrador Municipal del Estado Civil informó que durante el año 2017 *“no se solicitó ni se tiene conocimiento de la realización de una Consulta Popular o un Cabildo Abierto”*.

3. De los recursos de apelación

3.1 Municipio de Villeta – Cundinamarca

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETA
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

La apoderada del Municipio de Villeta – Cundinamarca mediante memorial radicado el día quince (15) de enero de 2020 (fl. 45), presentó recurso de apelación argumentando entre otras cosas, lo siguiente:

Que como cuestión preliminar considera importante poner de presente cuál es la norma jurídica que regula el mecanismo de participación ciudadana, habida consideración que al parecer coexisten en el ordenamiento jurídico dos (2) leyes estatutarias que regulan el cabildo abierto, donde se encuentran: (i) la Ley 134 de 1994 *“Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana”*, en sus artículos 81 a 89 y, (ii) la Ley 1757 de 2015 *“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”*, en sus artículos 22 a 30, por lo que el tema del asunto se trata de determinar cuál de las dos (2) normas regulan el cabildo abierto o si ambas son complementarias.

Para analizar lo anterior, indica que es necesario estudiar la sentencia C-150 del ocho (8) de abril de 2015 proferida por la H. Corte Constitucional en ejercicio de su poder jurisdiccional, automático, previo, integral, definitivo y participativo de control de constitucionalidad, realizado a la Ley 1757 de 2015, donde en el concepto del Procurador General de la Nación se dijo que se debían conservar su vigencia los artículos de la Ley 134 de 1994 al ser materias no tratadas en el proyecto de ley o ser artículos que no resultan contradictorios con ninguna de las nuevas normas y por otra parte, que se entenderán expresamente derogados entre otros, todos los artículos del título IX y X.

Señala que si bien es cierto, la H. Corte Constitucional no precisa expresamente si la regulación del cabildo abierto contenida en la Ley 134 de 1994 es derogada expresa o tácitamente, para la Procuraduría General de la Nación si lo está, toda vez que la nueva norma *“reitera, complementa y*

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETA
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

modifica”, la regulación de los mecanismos de participación ciudadana contenida en las Leyes 134 de 1994 y 741 de 2002.

No obstante lo anterior, indica que para despejar mejor esta controversia, los artículo 1º, 2º y 3º de la Ley 153 de 1887, ayudar a resolverlo, toda vez que, cuando se trate de establecer el tránsito legal de derecho antiguo a derecho nuevo, la ley posterior prevalece sobre la anterior y de ser incompatible la ley nueva con la anterior por ser más garantista la nueva y regular la nueva ley de manera íntegra la materia.

Frente a la posibilidad de estudiar los proyectos de acuerdo por parte de los Concejos Municipales en sesiones extraordinarias, el artículo 2º de la Ley 136 de 1994, señala que los Concejos Municipales de los municipios de categoría sexta, como lo es el municipio de Villeta, sesionarán ordinariamente los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año.

Tratándose de sesiones extraordinarias, prevé el citado artículo 23 de la misma Ley que los Alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración.

Igualmente, cita el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012 (modificado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015 parágrafo primero (1º), con el fin de ilustrar la posibilidad de estudiar proyectos de acuerdo cuya materia u objeto sea la materialización en la respectiva entidad territorial, por lo que no se entiende el argumento de que no es posible estudiarse por los Concejos Municipales en sesiones extraordinarias.

Respecto a la obligación de realizar cabildos abiertos a iniciativa de los Concejos Municipales, previo al estudio de los proyectos de acuerdo que

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETÁ
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

ajusten los POT y sin mediar solicitud de la ciudadanía, indican que al tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1757 de 2015, deben celebrarse *prima facie* por iniciativa de un número no inferior al 5x1000 de los ciudadanos del censo electoral del respectivo municipio.

No obstante lo anterior, indica que en materia de adopción, revisión o modificación de los POT existen normas jurídicas que ordenan a los Concejos Municipales a su convocatoria de oficio, previa y obligatoria, aún sin petición de la ciudadanía, citando el artículo 2º de la Ley 507 de 1999 Y el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012 (modificado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015).

Señala que los Concejos Municipales y Distritales están habilitados para estudiar proyectos de acuerdo mediante los cuales se ajusten los planes de ordenamiento territorial en sesiones extraordinarias, así mismo, que los Concejos municipales están obligados a convocar de oficio, de forma previa al estudio del proyecto de acuerdo y sin necesidad de petición de la ciudadanía, a un cabildo abierto, so pena de incurrirse en una vulneración del ordenamiento jurídico en la modalidad de expedición irregular del acto.

Considera que en tratándose del estudio de proyectos de acuerdo mediante los cuales se ajusten los POT, los cabildos abiertos sí tienen una especial regulación en relación con quién los convoca, habida consideración que así la comunidad no depreque su realización, los concejos deben convocarlos y realizarlos en los términos establecido en la Ley 1757 de 2015, lo que no implica que su naturaleza sea excepcional o especial, precisamente porque los demás requisitos legales sí deben cumplirse.

En cuanto a la posibilidad de realizar cabildos abiertos en sesiones extraordinarias, expone que de la interpretación sistemática del párrafo 1º del artículo 47 de la Ley 1537 de 2012 (modificado por el artículo 91 de la

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETA
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

Ley 1753 de 2015), regula varios supuestos de hecho, es dable inferir que si el Alcalde puede convocar al concejo a sesiones extraordinarias para estudiar el proyecto de ajuste al POT (inciso 2º del párrafo 1º), tal como ocurrió en el presente caso cuando el Alcalde de Villeta expidió el Decreto 0032 del doce (12) de junio de 2017, y conforme lo dispone el inciso 3º del párrafo 1º, previo estudio del proyecto de acuerdo debe celebrarse un cabildo abierto, por lo que emerge diáfananamente que es posible convocar y realizar un cabildo abierto en sesiones extraordinarias, precisamente porque si no fuera posible hacerlo, el concejo no pudiera ser convocado a sesiones extraordinarias para estudiar este tipo de proyectos, por la clara razón de que no puede estudiar el proyecto de acuerdo sin que previamente se realice el cabildo abierto.

Indica que el mecanismo de participación ciudadana cumplió con su fin tal como obra en el informe del Concejo Municipal de Villeta, ya que fue debidamente difundido y permitió un espacio de participación, diálogo y debate con la comunidad en relación con el tema del proyecto de acuerdo.

Respecto a la falta de materialización de los requisitos para el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, sostiene que los requisitos son los siguientes: (i) Que se invoque a petición de parte, (ii) Que se señalen las normas jurídicas superiores vulneradas, (iii) Que se sustente o fundamente de forma expresa, concreta y precisa, la trasgresión, infracción o violación de normas superiores (concepto de violación), ya sea mediante la confrontación o constatación del acto atacado con ellas o con las pruebas allegadas al proceso y, (iv) Explicar suficientemente por qué la demora en su decreto engendra un grave peligro a los derechos que se pretenden proteger (Periculum in mora).

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETÁ
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

Señala que si bien se cumple con el primer requisito y pareciera sustentarse la existencia de una clara violación de normas superiores, tal fundamentación carece de la seriedad y robustez para abrirse paso al derecho de la medida cautelar, careciendo de los requisitos 2, 3 y 4.

Considera que brilla por su ausencia el señalamiento de las normas superiores trasgredidas por el acuerdo municipal, así como la fundamentación expresa, concreta y precisa de por qué el acuerdo municipal las vulnera, es decir, no sustenta el demandante en qué consistió la supuesta irregularidad.

Expone que el demandante incurre en un desacierto al pretender señalar que si transcurridos 60 días desde la radicación del proyecto, este no adopta ninguna decisión y el concejo está en receso, el Alcalde puede convocarlo a sesiones extraordinarias, ya que es evidente que la última parte del inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 47 de la Ley 1537 de 2012 (modificado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015), no permite esa posibilidad.

En cuanto a los certificados de disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios, indica que no sólo falta la identificación de los mismos, sus fechas y las personas de derecho público y privado que los profirieron, sino el señalamiento claro, expreso y fundamentado de qué normas jurídicas transgreden y por qué, de tal suerte que no deben seguir revestidos de legalidad y acierto; Igualmente, respecto a los predios que se encuentran en una clasificación agrológica, se tiene que no explica el concepto, ni su fundamento jurídico, ni cómo el acuerdo vulnera normas superiores, ni qué pruebas certifican la clasificación agrológica de cada predio.

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETÁ
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

Manifiesta que tampoco se edifica la solicitud y decreto de la medida cautelar sobre el principio del peligro de la demora, máxime cuando del acuerdo demandado se han gestado varios actos administrativos de licenciamiento urbanísticos, deprecados por las personas naturales y jurídicas titulares de derechos reales de los precios incorporados al perímetro urbano para el desarrollo de vivienda.

Solicita se vinculen a los terceros que pueden verse afectados con la decisión, es decir, a todos aquellos titulares de derechos reales o personales sobre bienes inmuebles que fueron incorporados al perímetro urbano para el desarrollo de vivienda, máxime que han realizado inversiones cuantiosas, cristalizadas ya en torres de apartamentos.

3.2 Actual Constructora S.A.S.

El apoderado judicial de la sociedad Actual Constructora S.A.S., mediante memorial radicado el día quince (15) de enero de 2020 (fl. 175 del Cdno. Medida Cautelar), presentó recurso de apelación contra el auto proferido por el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Facatativá argumentando que, el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, modificado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015, previó un mecanismo para modificar los planes de ordenamiento territorial, por una sola vez, tendiente a incorporar al perímetro urbano predios localizados en suelo rural, suburbano y de expansión urbana para garantizar el desarrollo de vivienda.

Señala que como se expresó en el auto objeto de impugnación, este es un trámite “especial” dado que puede adelantarse sin la realización de los trámites de concertación y consulta que prevé el artículo 24 de la Ley 388 de 1997 para las modificaciones ordinarias y excepcionales que prevé la misma Ley.

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLET
ASUNTO:	OBEDEZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

Por lo anterior, señala que dentro de las reglas previstas en el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, se encuentra la relativa a la necesidad de celebrar un cabildo abierto en el párrafo 1º, por lo que en su consideración, el equívoco en el que se incurrió con el auto impugnado fue que se hizo alusión de manera aislada al último inciso del párrafo, ignorando el resto del texto en el que claramente se establecen los términos para decidir y la potestad que goza el Alcalde para citar a sesiones extraordinarias en las que se tramite y decida el proyecto.

Considera que de la lectura integral del párrafo 1º del artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, una vez que la administración presente el proyecto de acuerdo ante el concejo municipal, el órgano de representación popular cuenta con sesenta (60) días para adoptar una decisión y dentro de ese plazo, que pueda darse en sesiones extraordinarias, debe celebrarse en cabildo abierto y efectuarse los debates necesarios para llegar a una determinación.

Por lo anterior considera que, en el presente caso se cumplió con el procedimiento determinado para tal fin, como quiera que a través del Decreto 032 del 12 de junio de 2017, el Alcalde Municipal de Villeta citó a sesiones extraordinarias del Concejo durante el lapso comprendido del 13 al 30 de junio de 2017, periodo que fue prorrogado por los Decretos 35 del 31 de junio y 46 del 15 de julio de 2017, por lo que dentro de ese término, el 7 de julio se celebró el cabildo abierto, los días 19 y 23 de julio se realizaron los debates, para finalmente, aprobar el Acuerdo del 23 de julio de 2017.

Expone que la interpretación realizada por el Juzgado de primera instancia es errónea, toda vez que el cabildo abierto debía celebrarse en sesiones ordinarias y contar con la iniciativa de un número no inferior al 5 por 1000 del censo electoral del respectivo municipios, pues se sustenta en un erróneo entendimiento del artículo 81 de la Ley 136 de 1994, así como la

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETÁ
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

aplicación de un supuesto de hecho distinto al previsto en el parágrafo 1º del artículo 47 de la Ley 1537 de 2011, amén de la abierta contradicción con éste último.

Señala que el artículo 81 de la Ley 136 de 1994, fija un mínimo como quiera que indica que deben celebrarse por lo menos dos sesiones durante el periodo de sesiones ordinarias, por lo que el texto legal no dice que única o exclusivamente puedan celebrarse dos sesiones en el periodo de sesiones ordinarias, por lo que es jurídicamente posible que se puedan llevar a acabo más de dos cabildos abiertos en sesiones ordinarias o extraordinarias, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de convocatoria.

Argumenta que los artículos 82 de la Ley 136 de 1994 y 22 de la Ley 1757 de 2015, invocados por el juez de primera instancia para decretar la medida cautelar, regulan los requisitos del cabildo abierto a iniciativa de los ciudadanos para tratar asuntos que se solicita sean estudiados, asuntos de interés para la comunidad, por lo que se fija un número mínimo de ciudadanos que deben estar detrás de la iniciativa.

De tal modo, observa que esas disposiciones regulan un supuesto de hecho distinto al trámite de un ajuste o modificación del POT que se encuentra determinado en el artículo 2º de la Ley 507 de 1999, donde se la impone la obligación al Concejo de celebrar el cabildo abierto previo a entrar a estudiar y analizar el proyecto de Acuerdo de modificaciones del POT.

Por otra parte indica que, el inciso 3º del parágrafo 1º del artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, recoge la Ley 507 de 1999, toda vez que prevé la obligación de celebrar un cabildo abierto antes del “estudio y análisis” del proyecto de acuerdo, por lo que la interpretación realizada por el juez de primera instancia considera que desconoce la competencia exclusiva del

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETÁ
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

alcalde y de la administración municipal para presentar los proyectos de acuerdo de modificación del POT.

Así mismo considera que, el *A-quo* desconoce el tenor literal del párrafo 1º del artículo 47 de la ley 1537 de 2012, ya que el párrafo 1º en ninguno de sus pasajes determina que el cabildo abierto deba celebrarse en sesiones ordinarias del Concejo.

En cuanto a la ausencia de constancia en el archivo de la Registraduría nacional del Estado Civil, considera que no constituye un vicio en la celebración del cabildo abierto o le quita valor probatorio a los documentos que dan fe del agotamiento de este requisito.

Expone que una vez revisado el artículo 108 de la Ley 134 de 1994, se observa que el mismo señala la creación de un archivo de la utilización de las instituciones y mecanismos de participación ciudadana, pero no establece como requisitos de validez de los cabildos abiertos la constancia en el referido archivo, tampoco define una tarifa legal para probar la celebración de un cabildo abierto, ni mucho menos, otorga a la Registraduría Nacional o a los registrados Municipales la competencia para determinar si un cabildo abierto cumplió con los requisitos legales y reglamentarios.

4. De la providencia proferida el día seis (6) de agosto de 2020.

La Sala de la Sección Primera – Subsección “A” de esta Corporación, mediante providencia del seis (6) de agosto de 2020, resolvió el recurso de apelación presentado contra el auto de fecha dieciocho (18) de diciembre de 2019 que decretó una medida cautelar, así:

PROCESO No.: 25269-3333-001-2019-00014-01
 MEDIO DE CONTROL NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
 DEMANDANTE: JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
 DEMANDADO: MUNICIPIO DE VILLETAS
 ASUNTO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE
 APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA
 CAUTELAR

“PRIMERO.- CONFÍRMASE la providencia de fecha dieciocho (18) de diciembre de 2019 proferida por el Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- NIÉGASE la solicitud de vinculación de terceros presentada por la apoderada del municipio de Villeta – Cundinamarca, por lo expuesto en esta providencia.”

5. De la providencia proferida por le H. Consejo de Estado.

El apoderado judicial de la sociedad Actual Constructora S.A.S., presentó acción de tutela ante el H. Consejo de Estado manifestando que, el quince (15) de enero de 2020 la sociedad Actual Constructora S.A.S., solicitó se le tuviera como coadyuvante dentro de la parte demandada en el presente asunto, por lo que ese mismo día interpuso y sustentó el recurso de apelación contra el auto que decretó la medida cautelar, siendo reconocido como coadyuvante el día seis (6) de febrero de 2020.

Argumentó en su escrito de tutela que, no se tuvieron en cuenta sus argumentos al momento de resolver la apelación del auto mediante el cual se decretó la medida cautelar el día seis (6) de agosto de 2020.

Una vez surtido el trámite procesal y haberse presentado la respectiva contestación a la acción de tutela, el H. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “B”, C.P. Dr. Ramiro Pazos Guerrero, decidió:

“PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental invocado por la parte accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. En consecuencia, **DEJAR** sin efectos el auto del 6 de agosto de 2020 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, dentro del proceso de nulidad n.º 25269-3333-001-2019-00014-01.

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETÁ
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera una decisión de reemplazo en la que se observen los lineamientos de esta providencia, esto es, que se resuelva el recurso de apelación presentado por Actual Constructora S.A.S contra la decisión del 18 de diciembre de 2019.

“(…)”

La anterior decisión fue tomada en consideración a que, se debía resolver el recurso de apelación presentado por la parte coadyuvante (Sociedad Actual Constructora S.A.S.), contra el auto del dieciocho (18) de diciembre de 2019 mediante el cual el Juzgado Primero (1º) Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá decretó una medida cautelar, razón por la cual se obedecerá y cumplirá lo ordenado por el H. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “B”.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Procedencia y competencia del recurso de apelación:

Para resolver sobre la procedencia del recurso de apelación, la Sala atiende lo regulado por el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 (Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021), el cual expresa:

«Artículo 62. Modifíquese el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 243. Apelación. *Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:*

PROCESO No.: 25269-3333-001-2019-00014-01
 MEDIO DE CONTROL NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
 DEMANDANTE: JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
 DEMANDADO: MUNICIPIO DE VILLET
 ASUNTO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE
 APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA
 CAUTELAR

1. *El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.*
2. *El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.*
3. *El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.*
4. *El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.*
5. *El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.*
6. *El que niegue la intervención de terceros.*
7. *El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.*
8. *Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.*

Parágrafo 1°. El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.

Parágrafo 2°. En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir.

Parágrafo 3°. La parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, debidamente sustentado, podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite la apelación. La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.

Parágrafo 4°. Las anteriores reglas se aplicarán sin perjuicio de las normas especiales que regulan el trámite del medio de control de nulidad electoral.” (Subrayado fuera del texto original)

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETÁ
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

Como la providencia apelada decretó una medida cautelar, se trata de uno de los autos susceptibles de apelación, de conformidad con el numeral 5° del artículo 243 *ejusdem*.

Respecto a la competencia, de conformidad con el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021), esta radica en la Sala unitaria, con sustento a la decisión que se tomará en la presente providencia.

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico se centra en determinar si se ajustó en derecho y cumplió con los requisitos que señalan los artículos 229 y 231 de la Ley 1437 de 2011, la decisión del Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá en la providencia apelada de fecha dieciocho (18) de diciembre de 2019, mediante la cual decretó una medida cautelar dentro del presente medio de control de nulidad.

2.3. En cuanto a las medidas cautelares

El artículo 238 de la Constitución Política dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

«Artículo 238.- *La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial».*

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETÁ
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

Por su parte, en cuanto a la procedencia de las medidas cautelares, el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, establece:

«Artículo 229.- Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

(...).

Así mismo, el artículo 231 *Ibídem* consagra como requisitos para decretar las medidas cautelares, los siguientes:

«Artículo 231.- Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

PROCESO No.: 25269-3333-001-2019-00014-01
 MEDIO DE CONTROL NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
 DEMANDANTE: JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
 DEMANDADO: MUNICIPIO DE VILLETÁ
 ASUNTO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE
 APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA
 CAUTELAR

4. *Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:*

- a) *Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o*
- b) *Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios».*

Ahora bien, de la norma transcrita se encuentra que como requisitos para que proceda la solicitud de suspensión provisional, es necesario acreditar:

1. Que la solicitud se efectúe en la demanda o en escrito separado.
2. Que la violación surja del análisis del acto administrativo y su confrontación con normas superiores invocadas como violadas, o que tal violación se evidencie del estudio de las pruebas allegadas con la petición.
3. Se deberá probar la existencia de perjuicios, si llegase a pretenderse el restablecimiento del derecho y/o la indemnización de perjuicios.

El H. Consejo de Estado en providencia de fecha tres (3) de diciembre de 2012, señaló:

«1-. Consideraciones preliminares.

(...)

Asimismo, el artículo 231 ibídem consagra que la suspensión provisional procederá por violación de las disposiciones invocadas “cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.”

En este sentido se observa que la medida deberá ser decretada siempre que del análisis realizado por el Juez se concluya que existe violación de las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud.

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLET
ASUNTO:	OBEDEZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

El Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), establecía que esta medida estaba sujeta a que la contradicción con las disposiciones invocadas como fundamento de la solicitud de suspensión fuera manifiesta y apreciada por confrontación directa con el acto demandado, de esa manera, se impedía que el Juez pudiera realizar un estudio profundo del caso, pues la trasgresión debía ser ostensible y como tal, no podía implicar esfuerzo analítico alguno.

Al respecto cabe resaltar que la nueva normativa presenta una variación significativa en la regulación de esta figura, por cuanto la norma obliga al juez administrativo para realizar el análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas, y estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.

Finalmente, el Despacho considera importante destacar que pese a que la nueva regulación le permite al Juez realizar un análisis de la sustentación de la medida y estudiar las pruebas pertinentes, la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento, lo que obliga al Juzgador a ser en extremo cauteloso al momento de resolver la solicitud de suspensión provisional».*(Resaltado fuera del texto original).*

En este orden de ideas, con base en el anterior marco normativo y jurisprudencial la Sala procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del Municipio de Villeta – Cundinamarca y el apoderado de la sociedad Actual constructora S.A.S., contra la providencia fecha dieciocho (18) de diciembre de 2019, mediante la cual el *A-quo* resolvió la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo demandado, decretándola.

Cuestión previa

La Sala observa, que la providencia objeto de apelación corresponde a la proferida por el Juzgado Primero (1º) Administrativo del Circuito Judicial de Facativá, con radicado No. **25269**-3333-001-2019-00014-00 y no como quedó en el acta de reparto, con radicado No. **25899**-3333-001-2019-00014-00, razón por la cual, se ordenará que por Secretaría de la Sección se

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETÁ
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

realice la corrección pertinente y de deje la respectiva constancia en el Sistema Judicial Siglo XXI.

Caso en concreto

El Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Facatativá resolvió suspender provisionalmente los efectos jurídicos del Acuerdo No. 11 del veintitrés (23) de julio de 2017 *“POR EL CUAL SE ADOPTA EL AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VILLETÁ – CUNDINAMARCA, PARA LA INCORPORACIÓN DE PREDIOS RURALES, Y RURALES SUBURBANOS AL PERÍMETRO URBANO Y LA ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN DE USOS Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO DE ESTOS PREDIOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 1537 DE 2012 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY 1753 DE 2015.”*.

De lo anterior se evidencia que la medida de cautela decretada por el *A-quo* consistió en la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, sobre lo cual, la Ley 1437 de 2011 estableció que para que sea procedente la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, resulta necesario que del análisis realizado por el Juez, se concluya que existe violación a las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud.

Respecto al trámite de incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al perímetro urbano, el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012 (modificado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015), señala:

“ARTÍCULO 47. INCORPORACIÓN DEL SUELO RURAL, SUBURBANO Y EXPANSIÓN URBANA AL PERÍMETRO URBANO. <Artículo modificado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Con el fin de garantizar el desarrollo de vivienda, infraestructura social y usos complementarios

PROCESO No.: 25269-3333-001-2019-00014-01
 MEDIO DE CONTROL NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
 DEMANDANTE: JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
 DEMANDADO: MUNICIPIO DE VILLET
 ASUNTO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

y compatibles que soporten la vivienda, durante el período constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre los años 2015 y el 2020, y por una sola vez, los municipios y distritos podrán:

1. A iniciativa del alcalde municipal o distrital, incorporar al perímetro urbano los predios localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo de expansión urbana que garanticen el desarrollo y construcción de vivienda, infraestructura social y usos complementarios que soporten la vivienda de interés social y de interés prioritario, y otros, siempre que se permitan usos complementarios, mediante el ajuste del plan de ordenamiento territorial que será sometida a aprobación directa del concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de concertación y consulta previstos en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997. Esta acción se podrá adelantar siempre y cuando se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones:

a) Se trate de predios que cuenten con conexión o disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y que tengan garantizada su conexión y articulación con los sistemas de movilidad existentes en el municipio o distrito, certificada por los prestadores correspondientes.

b) Los predios así incorporados al perímetro urbano quedarán sometidos al régimen de desarrollo y construcción prioritaria de que trata el artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997. Para su ejecución se aplicarán las normas del tratamiento urbanístico de desarrollo y no se requerirá de plan parcial ni de otro instrumento de planificación complementaria para su habilitación. En el proyecto de acuerdo se incluirá la clasificación de usos y aprovechamiento del suelo.

c) Los predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de áreas de conservación y protección ambiental, tales como las áreas del sistema nacional de áreas protegidas, áreas de reserva forestal, áreas de manejo especial y áreas de especial importancia ecosistémica, ni en áreas que hagan parte del suelo de protección, en los términos de que trata el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, ni en otras áreas cuyo desarrollo se haya restringido en virtud de la concertación ambiental que fundamentó la adopción del plan de ordenamiento vigente.

d) Aquellos municipios cuyas cabeceras municipales y centros poblados rurales (corregimientos y veredas) que estén incluidos en una de las siete (7) reservas forestales creadas por la Ley 2ª de 1959, podrán presentar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitud de sustracción rápida y expedita para los lotes y actuaciones urbanas integrales que se destinen a vivienda para lo cual se expedirá por parte de dicho Ministerio las resoluciones correspondientes.

PROCESO No.: 25269-3333-001-2019-00014-01
 MEDIO DE CONTROL NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
 DEMANDANTE: JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
 DEMANDADO: MUNICIPIO DE VILLET
 ASUNTO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE
 APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA
 CAUTELAR

2. Además de los instrumentos previstos en la ley, a iniciativa del alcalde municipal o distrital, se podrá modificar el régimen de usos y aprovechamiento del suelo de los predios localizados al interior del perímetro urbano o de expansión urbana que puedan ser destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario, mediante el ajuste excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial. Este ajuste se someterá a aprobación directa del concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de concertación y consulta previstos en la Ley 388 de 1997, o mediante la expedición de decretos por parte de la autoridad municipal o distrital respectiva, cuando el Plan de Ordenamiento Territorial contemple la autorización para el efecto. Estos predios quedarán sometidos al régimen de desarrollo y construcción prioritaria, de que trata el artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997.

PARÁGRAFO 1o. Transcurridos sesenta (60) días desde la presentación del proyecto de ajuste del plan de ordenamiento territorial de que trata el presente artículo, sin que el concejo municipal o distrital adopte decisión alguna o lo niegue sin base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados, el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto.

En el evento de que el concejo municipal o distrital estuviere en receso, el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificación propuesta por el concejo deberá sustentarse en motivos técnicos y contar con la aceptación del alcalde y, en ningún caso, su discusión ampliará el término para decidir.

Los concejos municipales y distritales, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 134 de 1994, celebrarán obligatoriamente un Cabildo Abierto previo para el estudio y análisis del proyecto de ajuste del plan de ordenamiento territorial."

"(...)" (Subrayado fuera del texto original)

Tal como lo indica la norma antes citada, se tiene que los concejos municipales y distritales, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 134 de 1994, celebrarán obligatoriamente un cabildo abierto previo para el estudio y análisis del proyecto de ajuste del POT.

Los artículos 81 y 82 de la Ley 134 de 1994 en cuanto a la oportunidad y petición del cabildo abierto, determinan:

PROCESO No.: 25269-3333-001-2019-00014-01
 MEDIO DE CONTROL NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
 DEMANDANTE: JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
 DEMANDADO: MUNICIPIO DE VILLET
 ASUNTO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE
 APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA
 CAUTELAR

“ARTÍCULO 81. OPORTUNIDAD. En cada período de sesiones ordinarias de los concejos municipales o distritales, o de las juntas administradoras locales, deben celebrarse por lo menos dos sesiones en las que se considerarán los asuntos que los residentes en el municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, soliciten sean estudiados y sean de competencia de la corporación respectiva.

ARTÍCULO 82. PETICIÓN DE CABILDO ABIERTO. Un número no inferior al cinco por mil del censo electoral del municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, según el caso, podrán presentar ante la secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea discutido un asunto en cabildo abierto, con no menos de quince días de anticipación a la fecha de iniciación del período de sesiones.

Las organizaciones civiles podrán participaren todo el proceso de convocatoria y celebración de los cabildos abiertos.”

La anterior norma, debe interpretarse sistemáticamente con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, así:

“ARTÍCULO 22. Cabildo Abierto. En cada período de sesiones ordinarias de las asambleas departamentales, los concejos municipales o distritales, o de las Juntas Administradoras Locales, podrán celebrarse cabildos abiertos en los que, por iniciativa de un número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos del censo electoral del respectivo departamento, municipio, distrito, localidad o comuna, se considerarán los asuntos que los residentes soliciten sean estudiados, siempre ,y cuando sean de competencia de la respectiva corporación. Es obligación del alcalde o gobernador, según sea el caso, asistir al cabildo abierto.” (Subrayado fuera del texto original)

En este orden de ideas, la Sala observa que la figura del cabildo abierto señalado en el inciso 3º del párrafo 1º del artículo 47 de la Ley 1537 de 2012 (modificado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015), hace referencia a la regulada en los artículos 81 y 82 de la Ley 134 de 1994 en concordancia con el artículo 22 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, significando con ello, lo siguiente:

PROCESO No.: 25269-3333-001-2019-00014-01
 MEDIO DE CONTROL NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
 DEMANDANTE: JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
 DEMANDADO: MUNICIPIO DE VILLETÁ
 ASUNTO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE
 APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA
 CAUTELAR

(i) El cabildo abierto debe ser realizado durante el periodo de sesiones ordinarias de los concejos municipales,

(ii) Debe ser convocado por no menos al cinco por mil de los ciudadanos del censo electoral del respectivo municipio y,

(iii) Con no menos de quince días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones.

En cuanto al primer requisito, el artículo 23 de la Ley 136 de 1994, respecto al periodo de sesiones, señala:

“ARTÍCULO 23. PERIODO DE SESIONES. Los concejos de los municipios clasificados en categorías Especial, Primera y Segunda, sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio y máximo una vez por día, seis meses al año, en sesiones ordinarias así:

a) El primer periodo será en el primer año de sesiones, del dos de enero posterior a su elección, al último día del mes de febrero del respectivo año.

El Segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre el primero de marzo y el treinta de abril;

b) El Segundo período será del primero de junio al último día de julio;

c) El tercer período será del primero de octubre al treinta de noviembre, con el objetivo prioritario de estudiar, aprobar o improbar el presupuesto municipal.

Los concejos de los municipios clasificados en las demás categorías, sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio, cuatro meses al año y máximo una vez (1) por día así: febrero, mayo, agosto y noviembre.

Si por cualquier causa los concejos no pudieran reunirse ordinariamente en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible, dentro del período correspondiente.

PARÁGRAFO 1o. Cada período ordinario podrá ser prorrogado por diez días calendario más, a voluntad del respectivo Concejo.”

“(…)” (Subrayado fuera del texto original)

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLETA
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

De conformidad con lo anterior, se tiene que el municipio de Villeta – Cundinamarca, no se encuentra clasificado en categoría especial, ni de primera o segunda categoría, razón por la cual, las sesiones ordinarias deberán realizarse en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.

En el caso concreto se observa que, la convocatoria a cabildo abierto se realizó por parte del Concejo Municipal el día veintiuno (21) de junio de 2017 mediante la Resolución No. 017, para ser realizado el siete (7) de julio de 2017 (es decir, durante el periodo de sesiones extraordinarias convocadas por el Alcalde Municipal de Villeta¹) y no, por no menos al cinco por mil de los ciudadanos del censo electoral del municipio de Villeta y con quince (15) días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones, por lo que se realizó por parte del *A-quo* una valoración entre el acto administrativo demandado y las leyes invocadas como violadas, cumpliendo con ello, el requisito que exige la ley para poder suspender los efectos de un acto administrativo demandado a través de la cautela.

Igualmente, considera la Sala importante indicar que la remisión establecida en el inciso 3º del párrafo 1º del artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, es clara al indicar que la norma aplicable respecto al cabildo abierto que se debe realizar obligatoriamente es la señalada en el artículo 81 de la Ley 134 de 1994 con la interpretación sistemática del artículo 22 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, que establece el procedimiento antes desarrollado, por lo que no es necesario acudir a las demás normas que aducen los apelantes, ya que el procedimiento se encuentra claramente determinado en las normas antes citadas.

Por los argumentos expuestos en precedencia, procederá la Sala a confirmar la providencia de fecha dieciocho (18) de diciembre de 2019

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLET
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

proferida por el Juzgado Primero (1º) Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá, mediante el cual decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado.

- De la solicitud de vinculación de terceros presentada por la apoderada judicial del municipio de Villeta.

La apoderada del Municipio de Villeta – Cundinamarca, solicita se vinculen a los terceros que pueden verse afectados con las decisiones que se tomen en la presente demanda.

La Sala observa que el medio de control ejercido por el señor Jairo Alfonso Robayo Muñoz es el de simple nulidad determinado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 CPACA, que tiene por objeto el control de legalidad en abstracto de los actos administrativos de carácter general.

En cuanto a la figura de la coadyuvancia en el medio de control de simple nulidad, el artículo 223 de la Ley 1437 de 2011 CPACA, señala:

“ARTÍCULO 223. COADYUVANCIA EN LOS PROCESOS DE SIMPLE NULIDAD. *En los procesos que se tramiten con ocasión de pretensiones de simple nulidad, desde la admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial, cualquier persona podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del demandante o del demandado. El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta. Antes del vencimiento del término para aclarar, reformar o modificar la demanda, cualquier persona podrá intervenir para formular nuevos cargos o para solicitar que la anulación se extienda a otras disposiciones del mismo acto, caso en el cual se surtirán los mismos traslados ordenados para la reforma de la demanda principal.”*
(Subrayado fuera del texto original)

¹ Mediante Decreto No. 032 del doce (12) de junio de 2017, el Alcalde Municipal del Villeta convocó al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias, prorrogada mediante los Decretos No. 035 del veintiuno (21) de junio de 2017 y 0046 del quince (15) de julio de 2017.

PROCESO No.:	25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE:	JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE VILLET
ASUNTO:	OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR

De conformidad con la norma antes citada, se tiene que cualquier persona puede solicitar que se le tenga como coadyuvante de la parte demandante o demandada, sin que se le exija acreditar un interés directo en las resultas del proceso, sino que basta únicamente que manifieste su voluntad en el término previsto en el artículo 223 de la Ley 1437 de 2011 CPACA, pudiendo ejercer los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no esté en oposición con esta, toda vez que lo que se busca con el medio de control de simple nulidad, es la defensa del ordenamiento jurídico a través de un control jurídico en abstracto, tesis corroborada por el H. Consejo de Estado²; tan es así, que la sociedad Actual Constructora S.A.S., se hizo parte coadyuvante de la demandada³ y ejerció los actos procesales permitidos.

Por lo anterior, al no obrar manifestación de voluntad de alguna parte interesada en el presente asunto, diferente a sociedad coadyuvante antes mencionada, se negará la solicitud de vinculación de terceros presentada por la apoderada del municipio de Villeta – Cundinamarca.

En consecuencia, el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «A»**,

RESUELVE

PRIMERO.- OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo ordenado por el H. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “B” en la providencia de fecha trece (13) de octubre de 2020, que dejó sin efectos la providencia de fecha seis (6) de agosto de 2020 y en su lugar, ordenó proferir un decisión

² H. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B”, C.P. Dr. César Palomino Cortés, Auto de fecha veintidós (22) de julio de 2019, Radicado No. 11001-0325-000-2017-00916-00.

³ Mediante Auto de fecha seis (6) de febrero de 2020 (fl. 339 del Cdno. Ppal.) se reconoció como coadyuvante de la parte demandante a la sociedad Actual Constructora S.A.S.

PROCESO No.: 25269-3333-001-2019-00014-01
MEDIO DE CONTROL NULIDAD CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL
DEMANDANTE: JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE VILLETAS
ASUNTO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE Y RESUELVE RECURSO DE
APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA
CAUTELAR

de reemplazo teniendo en cuenta los argumentos presentados por la sociedad Actual Constructora S.A.S.

SEGUNDO.- CONFÍRMASE la providencia de fecha dieciocho (18) de diciembre de 2019 proferida por el Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- NIÉGASE la solicitud de vinculación de terceros presentada por la apoderada del municipio de Villeta – Cundinamarca, por lo expuesto en esta providencia.

CUARTO.- ORDÉNASE que por Secretaría de la Sección, se realice el cambio de número de reparto de **25899**-3333-001-2019-00014-00 a **25269**-3333-001-2019-00014-00, dejándose la respectiva constancia en el Sistema Judicial Siglo XXI, de conformidad con lo señalado en la cuestión previa de esta providencia.

QUINTO.- Ejecutoriado este auto, por secretaría **DEVUÉLVASE** el cuaderno al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Discutido y aprobado en sesión realizada en la fecha.


CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO
Magistrada


LUIS MANUEL LASSO LOZANO
Magistrado


FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUB SECCIÓN B

Bogotá DC, once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Magistrado Ponente:	FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente:	11001-33-34-001-2019-00322-01
Demandante:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP
Demandado:	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Medio de control:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - APELACIÓN SENTENCIA
Asunto:	ADMISIÓN DE RECURSO

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 3 cdno. segunda instancia) en atención al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2020 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá DC **dispónese**:

1°) Por ser procedente al tenor de lo dispuesto en los artículos 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011 **admítese** el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2020.

2°) Notifíquese esta providencia al Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 198 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3°) Ejecutoriado este auto **regrese** el expediente al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Ponente
(firmado electrónicamente)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma electrónica SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUB SECCIÓN B**

Bogotá D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Magistrado Ponente: OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Expediente: No. 11001-33- 34-057-2019-00454-01
Demandante: SINTRAEMSDES SUBDIRECTIVA BOGOTA
Demandado: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ Y OTROS
Referencia: ACCIÓN POPULAR - APELACIÓN DE
SENTENCIA

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 3 cdno. ppal.), es del caso advertir que el expediente de la referencia aparece en físico y digital, por lo tanto se trata de un expediente híbrido, sin embargo se pone de presente que la totalidad del expediente fue digitalizado a folio 391 y 392 del expediente físico.

Precisado lo anterior y en atención al recurso de apelación interpuesto por SINTRAEMSDES - Subdirectiva Bogotá - Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones, la Televisión, Las Corporaciones Autónomas, Los Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia (documento 43 CD Anexo visible en el folio 392 del cuaderno principal no. 2 del expediente), contra la sentencia del 13 de noviembre de 2020, (documento 40 CD Anexo visible en el folio 392 del cuaderno no. 1); proferida por el Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial De Bogotá, D.C., por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, **dispónese:**

1º) Por ser procedente de conformidad con el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en conjunto con el artículo 322 de la ley 1564 de 2012, **admítese** el recurso de apelación presentado por SINTRAEMSDES

Subdirectiva Bogotá - Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones, la Televisión, Las Corporaciones Autónomas, Los Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia en contra del fallo del 13 de noviembre de 2020 dictado por el juzgado de primera instancia.

2º) Notifíquese esta providencia a las partes.

3º) Notifíquese esta providencia al Agente del Ministerio Delegado ante esta Corporación de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 303 del C.P.A.C.A, norma vigente para la fecha de presentación de la demanda de la referencia, y aplicable al presente asunto por remisión expresa legal del artículo 44 de la Ley 472 de 1998.

4º) Ejecutoriado y cumplido este auto, **regrese** el expediente al Despacho para continuar con el trámite procesal correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Magistrado
Firmado Electrónicamente

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente que conforman Subsección "B" de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de CPACA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00656-00
Demandante: ALFREDO ALMANZA LATORRE Y OTROS
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) Y OTROS
Medio de Control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS
Asunto: DECRETO DE PRUEBAS

Procede el despacho a resolver lo siguiente sobre las pruebas solicitadas por las partes dentro del proceso de la referencia:

A. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE ACTORA

Con el valor que en derecho corresponda **ténganse** como pruebas los documentos allegados con el escrito de la demanda (fls. 12 a 75 cdno. ppal.)

B. PRUEBAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Con el valor que en derecho corresponda **ténganse** como pruebas los documentos allegados con el escrito de contestación de la demanda (fls. 115 a 127 cdno. ppal.).

C. PRUEBAS SOLICITADAS POR EL MUNICIPIO DE SASAIMA (CUNDINAMARCA)

1º) Con el valor que en derecho corresponda **ténganse** como pruebas los documentos allegados con el escrito de contestación de la demanda (fls. 143 a 214 cdno. ppal.).

2º) **Deniégase** por innecesaria la solicitud de practicar una inspección judicial en el lugar motivo de la acción popular para probar la inexistencia actual de la situación, toda vez que las pruebas decretadas en el numeral anterior son

suficientes para verificar el objeto de la prueba aquí solicitada, coadyuvado por el hecho de que según lo dispuesto en el artículo 236 del Código General del Proceso la inspección judicial se realiza de manera excepcional y solo se ordenará cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba.

D. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (UARIV)

La referida entidad en el escrito de contestación de la demanda (fls. 269 a 276 cdno. ppal.) solicitó tener como pruebas las imágenes electrónicas sustraídas de los aplicativos “VIVANTO” Y “ORFEO” visibles en los folios 270 y 271 del cuaderno principal del expediente lo cual así se decreta.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Ponente
(firmado electrónicamente)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma electrónica SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JURISDICCIONAL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN A**

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE No 250002341000201900750-00
REMITENTE ALCALDÍA DE UBAQUE
ASUNTO CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

**MAGISTRADO PONENTE
FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA**

Procede la Sala a pronunciarse sobre el conflicto de competencias suscitado entre la Alcaldía de Ubaque y la Inspección de Policía del mismo municipio.

CUESTIÓN PREVIA:

¿Cuál es la autoridad con competencia para resolver el siguiente problema jurídico?

Proceso Policivo de Perturbación de la Posesión No. 0032017

Demandada: Adoraida Torres Onofre

Respuesta:

La autoridad con competencia para conocer procesos policivos de perturbación de la posesión se encuentra determinada por la ley:

El artículo 206 de la ley 1801 de 2016 dispone:

Artículo 206. Atribuciones de los inspectores de Policía rurales, urbanos y corregidores. Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas:

1. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente.

2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación.

3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales.
4. Las demás que le señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
 - a. Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles;
 - b. Expulsión de domicilio;
 - c. Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas;
 - d. Decomiso.
6. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
 - a. Suspensión de construcción o demolición;
 - b. Demolición de obra;
 - c. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble;
 - d. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles;
 - e. Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a los descritos en el numeral 17 del artículo 205;
 - f. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales;
 - g. Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas;
 - h. Multas;
 - i. Suspensión definitiva de actividad.

Parágrafo 1°. Los inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas especiales sobre la materia.

Parágrafo 2°. **Cada alcaldía tendrá el número de inspectores de Policía que el Alcalde considere necesario, para una rápida y cumplida prestación de la función de Policía en el municipio.**

Habrán inspecciones de Policía permanentes durante veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de departamento, en los distritos, y en los municipios que tengan una población superior a los cien mil habitantes.

Parágrafo 3°. Para los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Decreto 785 de 2005, la formación profesional para el desempeño de los cargos de Inspector de Policía Urbano Categoría Especial, 1a Categoría y 2a Categoría, será únicamente la de abogado, y la formación técnica para el desempeño de los cargos de Inspector de Policía 3a a 6a Categoría e

Inspector de Policía Rural requerirá la terminación y aprobación de los estudios de la carrera de derecho.

Tal como se puede observar, no existe duda alguna acerca de la competencia del Inspector de Policía, para el conocimiento de querellas policivas relacionadas con la perturbación de la posesión.

El artículo 203 consagra una competencia a prevención del Gobernador, cuando existan dificultades por razones de orden público:

Artículo 203. Competencia especial del gobernador. En caso de actos de ocupación o perturbación por vías de hecho a la posesión o tenencia de bienes inmuebles de particulares, fiscales, de uso público, áreas protegidas y de especial importancia ecológica, de empresas de servicios públicos, de utilidad pública o de interés social, o en actividades consideradas de actividad pública o de interés social, en que a las autoridades de Policía distrital o municipal se les dificulte por razones de orden público adelantar un procedimiento policivo o ejecutar las órdenes de restitución, por solicitud del Alcalde Distrital o Municipal, o de quien solicita la intervención de la autoridad de Policía, asumirá la competencia el gobernador o su delegado, para que se proteja o restituya la posesión o tenencia del bien inmueble, o la interrupción de la perturbación de la actividad de utilidad pública o de interés social. También, ejecutará la orden de restitución de tierras ordenada por un juez, cuando por razones de orden público a la autoridad de Policía distrital o municipal se le dificulte materializarla.

De igual manera, cuando el alcalde distrital o municipal, no se pronuncien dentro de los términos establecidos en las normas que para tal fin expida el Gobierno nacional, a solicitud del accionante, o de oficio, el Gobernador del Departamento o su delegado asumirá la competencia y procederá a hacer efectivo sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, conforme al Código Disciplinario Único o las normas que lo adicionen, modifiquen o substituyan.

Cuando el Gobernador del Departamento ante quien se eleva la solicitud, no asuma la competencia especial en el término establecido en las normas que para tal efecto establezca el Gobierno nacional, este asumirá la competencia a través de su delegado, y pedirá a la Procuraduría General de la Nación, las investigaciones disciplinarias pertinentes

El trámite previsto por la ley para el trámite de la querella policiva es el verbal sumario:

CAPÍTULO III.

PROCESO VERBAL ABREVIADO.
Ir al inicio

ARTÍCULO 223. TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO. Se tramitarán por el proceso verbal abreviado los comportamientos contrarios a la convivencia, **de competencia de los Inspectores de Policía**, los Alcaldes y las autoridades especiales de Policía, en las etapas siguientes:

1. Iniciación de la acción. La acción de Policía puede iniciarse de oficio o a petición de la persona que tenga interés en la aplicación del régimen de Policía, contra el presunto infractor. Cuando la autoridad conozca en flagrancia del comportamiento contrario a la convivencia, podrá iniciar de inmediato la audiencia pública.

2. Citación. Las mencionadas autoridades, a los cinco (5) días siguientes de conocida la querella o el comportamiento contrario a la convivencia, en caso de que no hubiera sido posible iniciar la audiencia de manera inmediata, citará a audiencia pública al quejoso y al presunto infractor, mediante comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, donde se señale dicho comportamiento.

3. Audiencia pública. La audiencia pública se realizará en el lugar de los hechos, en el despacho del inspector o de la autoridad especial de Policía. Esta se surtirá mediante los siguientes pasos:

a) Argumentos. En la audiencia la autoridad competente, otorgará tanto al presunto infractor como al quejoso un tiempo máximo de veinte (20) minutos para exponer sus argumentos y pruebas;

b) Invitación a conciliar. La autoridad de Policía invitará al quejoso y al presunto infractor a resolver sus diferencias, de conformidad con el presente capítulo;

c) Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicitan la práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y si la autoridad las considera viables o las requiere, las decretará y se practicarán en un término máximo de cinco (5) días. Igualmente la autoridad podrá decretar de oficio las pruebas que requiera y dispondrá que se practiquen dentro del mismo término. La audiencia se reanudará al día siguiente al del vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose de hechos notorios o de negaciones indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas y la autoridad de Policía decidirá de plano. Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector central y descentralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud de la autoridad de Policía;

d) Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de Policía valorará las pruebas y dictará la orden de Policía o medida correctiva, si hay lugar a ello, sustentando su decisión con los respectivos fundamentos normativos y hechos conducentes demostrados. La decisión quedará notificada en estrados.

4. **Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de Policía proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico**, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso de reposición se

resolverá inmediatamente, y de ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación se resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación.

Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo.

Los recursos solo procederán contra las decisiones definitivas de las autoridades de Policía.

5. Cumplimiento o ejecución de la orden de Policía o la medida correctiva. Una vez ejecutoriada la decisión que contenga una orden de Policía o una medida correctiva, esta se cumplirá en un término máximo de cinco (5) días.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, salvo que la autoridad de Policía considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional.

Jurisprudencia Vigencia

PARÁGRAFO 2o. Casos en que se requiere inspección al lugar. Cuando la autoridad de Policía inicia la actuación y decreta inspección al lugar, fijará fecha y hora para la práctica de la audiencia, y notificará al presunto infractor o perturbador de convivencia y al quejoso personalmente, y de no ser posible, mediante aviso que se fijará en la puerta de acceso del lugar de los hechos o parte visible de este, con antelación no menor a veinticuatro (24) horas, de la fecha y hora de la diligencia.

Para la práctica de la diligencia de inspección, la autoridad de Policía se trasladará al lugar de los hechos, con un servidor público técnico especializado cuando ello fuere necesario y los hechos no sean notorios y evidentes; durante la diligencia oír a las partes máximo por quince (15) minutos cada una y recibirá y practicará las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

El informe técnico especializado se rendirá dentro de la diligencia de inspección ocular. Excepcionalmente y a juicio del inspector de Policía, podrá suspenderse la diligencia hasta por un término no mayor de tres (3) días con el objeto de que el servidor público rinda el informe técnico.

La autoridad de Policía proferirá la decisión dentro de la misma diligencia de inspección, o si ella hubiere sido suspendida, a la terminación del plazo de suspensión.

PARÁGRAFO 3o. Si el infractor o perturbador no cumple la orden de Policía o la medida correctiva, la autoridad de Policía competente, por intermedio de la entidad correspondiente, podrá ejecutarla a costa del obligado, si ello fuere

posible. Los costos de la ejecución podrán cobrarse por la vía de la jurisdicción coactiva.

PARÁGRAFO 4o. El numeral 4 del presente artículo no procederá en los procedimientos de única instancia.

PARÁGRAFO 5o. El recurso de apelación se resolverá de plano, en los términos establecidos en el presente artículo.

De lo anterior se infiere que el proceso se tramita en doble instancia.

La primera instancia: Inspector de Policía

La segunda instancia: El superior jerárquico. Para el caso del Inspector, el Alcalde Municipal

Los impedimentos:

El trámite y resolución de impedimentos no genera conflicto de competencias administrativas, pues los impedimentos en sede administrativa, tienen como único propósito proveer sobre el impedido y de ser aceptado, designar a la autoridad con competencia para el conocimiento del proceso.

En nuestro caso, se ha remitido a esta Corporación un aparente conflicto de competencias administrativas, so pretexto del trámite de impedimentos y recusaciones. Sin embargo, es lo cierto que por economía procesal, ésta Corporación procederá a remitir el expediente a la autoridad competente para su conocimiento.

1. Antecedentes

1º. El 6 de marzo de 2017 se radicó ante la Inspectora de Policía de Choachí proceso policivo de perturbación a la posesión No. 003/2017 en contra de la señora Adoraida Torres Onofre.

2°. Luego de surtidas varias audiencias dentro del mencionado proceso, en Audiencia Pública llevada a cabo el 28 de agosto de 2017 el apoderado de la querellada interpuso incidente de recusación en contra de Natalia Rivera Pulido, Inspectora Municipal de Choachí.

3°. Mediante Auto de 19 de octubre de 2017, la Inspectora Municipal de Choachí admitió la solicitud de declaratoria de recusación e impedimento impetrada por el apoderado de la querellada en el proceso antes mencionado, así como se declaró impedida para conocer del asunto, ordenando la remisión del expediente al Alcalde del mismo municipio.

4°. En Auto de 9 de noviembre de 2017, el Alcalde de Choachí manifestó estar impedido para conocer del asunto, por lo que dispuso la remisión del asunto a la Procuraduría Provincial de Facatativá.

5°. En Auto 843 de 22 de diciembre de 2017, el Procurador Regional de Cundinamarca aceptó el impedimento planteado por el señor Álvaro Gutiérrez Pardo, Alcalde Municipal de Choachí, respecto a lo invocado en el proceso policivo amparo a la posesión radicado con el número 003-2017, así como ordenó remitir las diligencias a la Presidencia de la República – Ministerio del Interior para que designaran funcionario ad hoc.

6°. Mediante Decreto No. 739 de 30 de abril de 2018 el Ministro de Interior designó como Alcalde Ad – Hoc del Municipio de Choachí al señor Carlos Alfonso Cotrino Guevara, quien se desempeña en el cargo de Director Operativo Código y Grado 00903 de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca para decidir la recusación invocada por Alejandro Serrano Prieto contra la Inspectora de Policía Municipal de Choachí dentro del proceso policivo de amparo a la posesión 003/2017 contra Adoraida Torres Onofre.

7°. En Auto de 25 de junio de 2018, el Alcalde Ad Hoc del Municipio de Choachí, aceptó la recusación incoada por Alejandro Serrano Prieto contra la Inspectora Municipal de Policía de Choachí, Natalia Rivera Pulido, dentro del proceso policivo de amparo a la posesión radicación 003/2017 contra Adoraida Torres Onofre.

8°. En Auto de 2 de agosto de 2018, Álvaro Gutiérrez Pardo, se declaró impedido para conocer del proceso antes señalado por estar inmerso en la causal 1° del artículo 11 del CPACA, ordenando el envío del expediente a la Personería Municipal conforme a lo previsto en el párrafo 2° del artículo 229 del Código Nacional de Policía para que resolviera el impedimento.

9°. En Auto No. 1 de 13 de agosto de 2018, la Personera Municipal del Choachí aceptó el impedimento planteado por el señor Alvaro Gutiérrez Pardo, en calidad de Alcalde Municipal de Choachí respecto del proceso policivo 003/2018, ordenando la remisión del expediente al Alcalde Municipal de Ubaque para que conozca del asunto conforme a lo dispuesto en el párrafo 2° del artículo 229 del Código Nacional de Policía.

10°. En oficio AMUC – 062-2018 de 7 de noviembre de 2018, el Alcalde Municipal de Ubaque remite al Inspector de Policía y de Tránsito del mismo municipio el proceso policivo de amparo de posesión No. 003/2017.

11°. En oficio IPU 013/2018 de 31 de enero de 2019, el Inspector Municipal de Policía y Tránsito de Ubaque devuelve a Edgar Orlando Aguas Alba, Alcalde Municipal de Ubaque, con el fin que se “(...) resuelva que funcionario del municipio mas cercano debe emitir el fallo de primera y segunda instancia (...)”, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2° del artículo 229 de la Ley 1801 de 2016.

12°. En escrito SJ/DCEJ de 5 de abril de 2019, el Director de Conceptos y Estudios Jurídicos de la Gobernación de Cundinamarca en respuesta a la solicitud elevada por el Secretario de Gobierno de Ubaque, se pronuncia sobre la solicitud consistente en

establecer el funcionario competente para conocer del proceso policivo de amparo a la posesión 003/2017.

13°. En providencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ubaque el 16 de agosto de 2019, interpuesta por el Álvaro Gutiérrez Pardo, Alcalde Municipal de Choachí contra la Alcaldía Municipal de Ubaque, se dispuso por el primero no tutelar el derecho fundamental al debido proceso invocado, así como conminar a la Alcaldía Municipal de Ubaque para que disponga el trámite correspondiente para establecer quién es el competente para conocer y decidir el proceso policivo de amparo a la posesión.

13°. En oficio aparte, el señor Edar Orlando Aguas Alba remite el expediente del asunto para que se dirima la competencia.

2. De lo decidido por el Juez de Tutela

En providencia proferida el 19 de agosto de 2019 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ubaque – Cundinamarca, se resolvió lo siguiente:

“(…) PRIMERO: NO TUTELAR el derecho fundamental del accionante, por las razones dadas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONMINAR a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE UBAQUE – CUNDINAMARCA, ordenando que en el término de cinco (5) días a partir de la notificación de este fallo de tutela, se disponga el trámite correspondiente para establecer quién es el competente para conocer y decidir el proceso policivo de amparo a la posesión, bien sea través del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como lo sugirió la Dirección de Estudios Jurídicos de la Gobernación de Cundinamarca o según su respuesta ante el Ministerio del Interior. (....)”

3. Manifestaciones de falta de competencia

En cumplimiento del fallo de tutela, el señor Edar Orlando Aguas Alba, Alcalde Municipal de Ubaque, remite ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la querella policiva de perturbación a la posesión en la que se indica que “(...) no se ha podido dar trámite dadas las manifestaciones de la querellada de no tener la competencia el alcalde de Ubaque para conocer y tramitar dicha querella policiva (...)”¹, con el fin que esta Corporación dirima la competencia para conocer del asunto, de conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011.

Por los anteriores argumentos, envió el expediente al Tribunal con el fin de resolver el conflicto negativo suscitado, tomando en consideración lo señalado en el fallo de tutela antes mencionado.

4. Consideraciones de la Sala

4.1. Competencia

De conformidad con el numeral 3² del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011 esta Corporación es competente para resolver el conflicto de competencias mencionado en única instancia.

4.2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala a determinar si es del caso dirimir el conflicto de competencia negativo que existe entre la Alcaldía Municipal de Ubaque y la Inspección de Policía del mencionado municipio.

2.3. Solución al caso concreto

Sobre los conflictos de competencia, ha dicho el Consejo de Estado lo siguiente:

¹ Folio 1 cuaderno conflicto de competencias

² 3. De los de definición de competencias administrativas entre entidades públicas del orden departamental, distrital o municipal o entre cualesquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio de su jurisdicción.

“(…) Por competencia se ha entendido:

“la esfera de atribuciones de los entes y órganos determinada por el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente”³.

La competencia, además de ser fundamental en la materialización de los principios de seguridad jurídica y el debido proceso, constituye un presupuesto de validez de los actos proferidos por la autoridad⁴. En este contexto, las autoridades públicas solamente están facultadas para ejercer las atribuciones que le hayan sido asignadas por la ley o la Constitución⁵, y en consecuencia, un servidor público será responsable por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones⁶. Frente a una determinada situación, puede ocurrir que dos o más autoridades consideren que tienen competencia para conocer de ésta. Sin embargo, también es posible que, por el contrario, juzguen que son incompetentes para ello. Frente a esta posibilidad, y para el caso de una competencia de naturaleza administrativa, el ordenamiento jurídico colombiano establece un procedimiento para superar esta problemática.

En efecto, los artículos 39⁷ y 112 de la ley 1437 de 2011 otorgan a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la atribución de resolver los conflictos de competencia administrativa que se generen:

“entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo”⁸.

³ Roberto Dromi, Derecho Administrativo, Artes Gráficas Buschi S.A. Edición 2009, p. 345. Citado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 20 de enero de 2011, Rad. No.: 76001-23-31-000-2002-02168-01(2274-08). Véase también Memorias 2009. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, p. 51.

⁴ “La competencia, que ha sido definida como el grado o la medida de la jurisdicción, tiene por finalidad delimitar el campo de acción, función o actividad que corresponde ejercer a una determinada entidad o autoridad pública, haciendo efectivo de esta manera el principio de seguridad jurídica (...) La competencia es parte esencial del debido proceso y presupuesto de validez de los actos que se profieren, pues si una autoridad expide un acto sin tener facultades para hacerlo, éste es nulo”. Corte Constitucional, Sentencia del 21 de enero de 2005, C-1079/05.

⁵ Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. C.P., artículo 121.

⁶ C.P., artículo 6º

⁷ Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado....”.

⁸ Ley 1448 de 2011, artículo 112. Num. 10

Estas normas persiguen tres objetivos fundamentales que buscan asegurar que: i) un asunto de naturaleza administrativa sea resuelto por la autoridad, que de acuerdo a la ley, se encuentre facultada para ello, ii) la actividad administrativa no se detenga o paralice⁹, y iii) no se obstaculice la protección de los derechos de los administrados¹⁰. Debe destacarse que esta atribución de la Sala de Consulta y Servicio Civil, la cual ya estaba reconocida en la ley 954 de 2005, es diferente de la función consultiva que la Sala ejerce¹¹. El artículo 39 del CPACA establece tres aspectos puntuales: i) cuando se está en presencia de un conflicto de competencia administrativa, ii) cuál es la autoridad llamada a resolverlo y iii) cuál es el procedimiento que debe ser satisfecho¹².

De acuerdo con el artículo 39, toda entidad u órgano de carácter nacional o territorial que requiera la ejecución de una actividad de naturaleza administrativa, debe analizar su propia competencia a partir del estudio de las normas constitucionales, legales y reglamentarias que sean aplicables a la entidad y al caso concreto. Si luego de este estudio considera que no es competente para ejecutar esa actuación, debe remitir el trámite a la entidad que juzgue o entienda que sí lo es.

La entidad que aquella estima competente, una vez reciba la actuación, procederá a la realización de su propio estudio de competencia. Si concluye, al igual que la primera, que tampoco es competente, debe trabar el conflicto y enviar la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado o al Tribunal Administrativo, según corresponda de acuerdo a la naturaleza nacional o territorial de las entidades¹³. Lo mismo acontecerá en

⁹ “La regulación de los conflictos de competencia administrativas, se dirige entonces a solucionar aquellas discusiones que se pueden presentar entre dos o más entidades respecto del conocimiento de un asunto administrativo, con el fin de garantizar que el mismo sea resuelto, únicamente y sin dilaciones, por aquella autoridad que está legalmente facultada para hacerlo. Además, para que la actividad administrativa no se paralice y los servicios a cargo del Estado puedan cumplir su finalidad”. Memorias 2009. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, p. 45.

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 29 de abril de 2008, Ref: 11001-03-06-000-2008-00028-00

¹¹ “Así las cosas, para la Sala es claro que cuando el legislador atribuyó esta competencia no la enmarcó dentro de la función consultiva, puesto que dicha función tiene su regulación propia tanto en la Constitución como en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, y se ejerce de manera exclusiva y excluyente para responder las consultas que realice el Gobierno Nacional³; es decir, el Presidente de la República, los Ministros y los Jefes de Departamentos Administrativos. Esta función es diametralmente distinta a la de solucionar conflictos sobre competencias administrativas, procedimiento que puede ser iniciado por cualquier entidad administrativa y aún por particulares”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 26 de noviembre de 2008, Ref: 11001-03-06-000-2008-00064-00

¹² Enrique José Arboleda Perdomo. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Legis Editores S.A., 1ª. edición, 2011, p.69

¹³ Bajo la vigencia del antiguo C.C.A., esta Sala tuvo la oportunidad de señalar: “Y, para que la persona no quede sujeta a una discusión indefinida al interior del propio Estado sobre quién debe atender su petición, lo que también representaría una violación de este derecho fundamental, el artículo 33 del C.C.A. establece que la entidad que recibe de otra una petición por razón de competencia, está obligada o bien a responder oportunamente la petición, o bien a formular de manera inmediata el conflicto negativo de competencias administrativas, en orden a que se defina por los Tribunales Administrativos⁵ o por esta Sala⁶, la autoridad que debe atender la petición”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 7 de febrero de 2008, Ref: 11001-03-06-000-2008-00004-00.

el caso de que ambas entidades se consideren competentes¹⁴. A partir de la lectura de los artículos 39 y 112 del CPACA, y teniendo en cuenta lo sostenido por la jurisprudencia¹⁵, la resolución de un conflicto de competencia por parte de esta Sala requiere la satisfacción de los siguientes requisitos:

i) El conflicto debe existir entre autoridades (artículo 39). El concepto de autoridad debe entenderse a la luz del artículo 2º del CPACA, el cual, califica como tales a las entidades y organismos que hacen parte del poder público, a los órganos autónomos e independientes, y a los particulares cuando cumplen o ejercitan funciones administrativas.

Sin embargo, como se explicará a continuación, no todos los conflictos de competencia entre dos o más autoridades pueden ser dirimidos por la Sala.

- i) El conflicto debe involucrar al menos una autoridad de carácter nacional, o envolver dos entidades de carácter territorial que no correspondan a la jurisdicción territorial de un mismo tribunal administrativo. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 39 y el artículo 112 numeral 10 del CPACA¹⁶.

Cuando el conflicto existe entre autoridades departamentales, distritales o municipales, la autoridad competente para resolverlo es el Tribunal Administrativo correspondiente.

- ii) Deben existir al menos dos autoridades que acepten o rechacen expresamente su competencia para conocer y resolver un asunto particular o específico. De ahí entonces que se califiquen los conflictos de competencia administrativa en negativos y positivos¹⁷. Los primeros tienen ocurrencia

¹⁴ “La entidad debe hacer el análisis de su competencia y con fundamento en la normatividad aplicable (constitucional, legal y reglamentaria), evaluar si está llamada a iniciar el trámite, o en caso contrario, remitirlo a quien considere competente. En este último evento la entidad receptora deberá igualmente evaluar su competencia y en caso de rechazarla también procederá a trabar el conflicto que será resuelto por la Sala de Consulta y Servicio Civil. Así mismo, en caso de que ambas entidades declararan su competencia para conocer del asunto, podrán solicitar a la Sala que defina quién tiene la competencia para avocar el conocimiento”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 4 de junio de 2009, Ref: 11001-03-06-000-2009-00029-00.

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Sentencia del 16 de abril de 2012, Ref: 11001-03-06-000-2012-00015-00; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 4 de octubre de 2006, Ref: 11001-03-06-000-2006-00102-00.

¹⁶ “La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional...En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado”. CPACA, artículo 39; “La Sala de Consulta y Servicio Civil tendrá las siguientes atribuciones: ...10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo”. CPACA, artículo 112.

¹⁷ “De acuerdo con el primer inciso del artículo 39, los conflictos de competencia administrativa pueden ser negativos o positivos. Son negativos aquellos en los cuales al menos dos autoridades dicen no tener competencia para decidir una petición o asunto, y positivos aquellos en relación con los cuales las mismas manifiestan tener dicha atribución para tomar la decisión de fondo sobre el procedimiento”. Enrique José Arboleda Perdomo. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Legis Editores S.A., 1ª. edición, 2011, p. 71. Véase también Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 18 de noviembre de 2010, Ref: 11001-03-06-000-2010-00116-00; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias

cuando al menos dos autoridades estiman o juzgan que no son competentes para resolver una determinada cuestión¹⁸, tal como se desprende del inciso primero del artículo 39, el cual establece:

“La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado...”.

Por su parte, el conflicto será de naturaleza positiva, cuando dos o más autoridades entienden o consideran que son competentes para decidir sobre un asunto determinado¹⁹. Esto en consideración a lo señalado por el mismo artículo 39 cuando indica:

”De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado”.

iv) El conflicto debe recaer sobre una competencia o asunto de naturaleza administrativa que tenga a su cargo la entidad u organismo. En efecto, los artículos 39 y 112, numeral 10 del CPACA hablan expresamente de conflictos de competencia administrativas. Adicionalmente, el artículo 39 no solamente integra la primera parte del CPACA, la cual, por mandato del artículo 2º, aplica a los organismos y entidades del poder público, a los órganos autónomos o independientes del Estado y a los particulares cuando ejerzan funciones administrativas, sino que también hace parte del Título III, referido al procedimiento administrativo general. De esta suerte, se encuentran excluidos los conflictos de naturaleza jurisdiccional o legislativa²⁰. Frente a este último requisito, es importante destacar que la definición de un conflicto de competencias no depende de la naturaleza de las entidades, sino de la naturaleza del conflicto, es decir, que este envuelva el ejercicio o cumplimiento de funciones administrativas. Frente a esto, señaló anteriormente la Sala: “La Sala de Consulta y Servicio Civil del

del 4 de junio de 2006, Ref: 11001-03-06-000-2009-00029-00; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 16 de abril de 2012, Ref: 11001-03-06-000-2012-00015-00; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 23 de julio de 2009, Ref: 11001-03-06-000-2009-00037-00; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 4 de septiembre de 2007, Ref: 11001-03-06-000-2007-00067-00.

¹⁸ “Esto implica que las entidades se abstienen o se rehúsan a tramitar o asumir el conocimiento de un asunto específico, es decir, expresamente manifiestan su incompetencia para conocer de él y resolverlo”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 4 de octubre de 2006, Ref: 11001-03-06-000-2006-00102.

¹⁹ “El conflicto positivo se presenta entonces, cuando dentro del ejercicio de la función administrativa en un determinado asunto, distintas autoridades actúan bajo el entendido de que lo hacen dentro del campo de sus competencias constitucionales, legales o reglamentarias y que dicha actuación no invade competencias de otra autoridad; en este evento surge la confrontación cuando cada una manifiesta tener la competencia para el conocimiento del asunto”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 4 de octubre de 2006, Ref: 11001-03-06-000-2006-00102.

²⁰ “4. El conflicto debe referirse a competencias de naturaleza administrativa. El conflicto que se someta a conocimiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado debe versar exclusivamente sobre asuntos o competencias administrativas, lo cual excluye el conocimiento de conflictos jurisdiccionales y legislativos”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 16 de abril de 2012, Ref: 11001-03-06-000-2012-00015-00. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 4 de octubre de 2006, Ref: 11001-03-06-000-2006-00102.

Consejo de Estado es competente para conocer de los conflictos de competencias administrativas que se presenten entre autoridades administrativas entre sí; o entre una autoridad administrativa y otra de distinta naturaleza; o entre dos autoridades que no sean de naturaleza administrativa, siempre y cuando se trate de asuntos de carácter administrativo, es decir, en ejercicio de función administrativa”²¹

Del contenido del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, se desprende que para efectos de dirimir un conflicto negativo de competencias por la Sala deben concurrir los Consecuentemente, es posible, inclusive resolver un conflicto de competencias entre una entidad pública y un particular que tenga a su cargo el ejercicio de una función administrativa²².

Con todo, frente a la naturaleza administrativa de la función, es importante señalar que cuando existe un conflicto de competencias entre dos entidades de naturaleza administrativa, como consecuencia del ejercicio de una función administrativa, para el caso de una, y el cumplimiento de una función jurisdiccional, para la otra, es competente la Sala para resolverlo²³.

v) El conflicto debe recaer sobre situaciones concretas. En consecuencia, no es posible, que a través del artículo 39, se dé respuesta a controversias o asuntos de naturaleza abstracta, hipotética o general, los cuales se enmarcan o corresponden a la función consultiva de la Sala.²⁴ (...)”²⁵

²¹ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 22 de junio de 2006, Ref: 11001030600020060005900. Véase también Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 14 de noviembre de 2012, Ref: 11001-03-06-000-2012-00095-00.

²² “Por último, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha aclarado que el conflicto de competencias puede surgir incluso entre una entidad pública y una persona de derecho privado que tenga asignado el cumplimiento de una función administrativa, como sucede en materia pensional con los fondos privados de pensiones⁷, o en asuntos urbanísticos con los curadores urbanos”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 14 de noviembre de 2012, Ref: 11001-03-06-000-2012-00095-00.

²³ “La Sala comparte la interpretación de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, bajo el presupuesto de que cuando se trata de conflicto de competencias entre dos autoridades administrativas, la una en ejercicio de funciones administrativas; y la otra, en cumplimiento de atribuciones judiciales, corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dirimir el conflicto propuesto”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 22 de junio de 2006, Ref: 11001030600020060005900”

²⁴ “3. El conflicto debe versar sobre un asunto concreto y no sobre cuestiones abstractas y generales. Por tanto, la actuación respecto de la cual se origina la controversia debe estar individualizada. El procedimiento para definir los conflictos de competencias administrativas se instituyó para resolver problemas específicos y no para absolver consultas jurídicas de carácter general o casos abstractos o hipotéticos, situaciones que remiten a otra función de la Sala, como es la función consultiva, la cual sigue sus propias reglas”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 16 de abril de 2012, Ref: 11001-03-06-000-2012-00015-00. “El procedimiento para definir los conflictos de competencias administrativas contenido en el Código Contencioso Administrativo, se instituyó para resolver casos concretos y no para absolver consultas de carácter general o definirlos en abstracto. En conclusión debe estar individualizada la actuación respecto de la cual se produce la controversia”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 4 de octubre de 2006, Ref: 11001-03-06-000-2006-00102.

²⁵ CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-06-000-2013-00394-00

En consideración a lo previsto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 y lo señalado por la jurisprudencia, se tienen como requisitos los siguientes: i) la presencia de al menos dos autoridades que nieguen o reclamen competencia sobre un determinado asunto; ii) que los organismos o entidades del orden departamental, distrital o municipal; iii) que el conflicto tenga naturaleza administrativa; iv) que verse sobre un caso concreto; y v) que el procedimiento o la actuación administrativo que da origen al conflicto no haya terminado mediante la expedición de un acto administrativo en firme o de otra forma.

En el caso en particular, la Sala encuentra que en el asunto en particular no se presenta un verdadero conflicto de competencias por lo siguiente:

1º. De los oficios AMUC-062-2018 de 7 de noviembre de 2018²⁶ e IPU 013/2018 de 31 de enero de 2019²⁷, suscritos por el Alcalde Municipal de Ubaque y el Inspector de Policía del mismo municipio, no se advierte que en forma alguna estos hayan manifestado de manera expresa su falta de competencia para conocer del asunto.

En realidad, se observa que el expediente 003/2017 fue remitido por la Personera Municipal de Choachí al Alcalde Municipal de Ubaque, tal como se encuentra en oficio de 13 de agosto de 2018, ²⁸ en atención a lo dispuesto por la misma en el Auto No.1 de 13 de agosto de 2018 en el que aceptó el impedimento formulado por el señor Álvaro Gutiérrez Pardo, Alcalde Municipal de Choachí, ordenando la remisión del asunto al Alcalde Municipal de Ubaque Cundinamarca a efectos que conozca del asunto conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 229 del Código Nacional de Policía, norma que dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 229. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. Las autoridades de Policía podrán declararse impedidas o ser recusadas por las causales establecidas en las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
PARÁGRAFO 1o. Los impedimentos y recusaciones serán resueltos por el superior jerárquico en el término de dos (2) días.

²⁶ Folio 198 cuaderno anexos

²⁷ Folio 199 cuaderno anexos

²⁸ Folio 197 del expediente

PARÁGRAFO 2o. En el caso de los Alcaldes Distritales, Municipales o Locales, resolverá el impedimento o recusación, el personero municipal o distrital en el término de dos (2) días. Cuando se declare el impedimento o recusación, conocerá del asunto, el alcalde de la jurisdicción más cercana.”
(Subrayado fuera de texto)

2º. En el caso en particular se trata de dos autoridades que pertenecen al mismo municipio y que se encuentran sometidas a la Jurisdicción del mismo Tribunal Administrativo, no obstante, una de ellas resulta ser superior jerárquico de la otra dentro de la misma entidad territorial.

En efecto, tal como lo prevén los artículos 130²⁹ y 320³⁰ del Decreto 1333 de 1986, las inspecciones de policía dependen del respectivo Alcalde, existiendo así una relación de subordinación o dependencia entre el Alcalde de Ubaque y la Inspección de Policía del mismo municipio, lo que también puede observarse en el organigrama del mismo.³¹

Dichas funciones del Alcalde en ejercicio del poder de policía son igualmente reconocidas en el artículo 315 numeral 2º³² de la Constitución Política.

²⁹ “ARTICULO 130. El Alcalde es el jefe de la administración pública en el Municipio y ejecutor de los acuerdos del Concejo. Le corresponde dirigir la acción administrativa, nombrando y separando libremente sus agentes y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administración.
El Alcalde es jefe de policía en el Municipio. La Policía Nacional, en el Municipio, estará operativamente a disposición del Alcalde, que dará sus órdenes por intermedio del respectivo Comandante de Policía o de quien lo reemplace. Dichas órdenes son de carácter obligatorio y deberán ser atendidas con prontitud y diligencia.” (Subrayado fuera de texto)

³⁰ ARTICULO 320. La creación de Inspecciones Municipales de Policía corresponde a los Concejos que determinarán su número, sede y área de jurisdicción.

Las Inspecciones que se creen conforme al presente artículo dependen del respectivo Alcalde.

Corresponde a dichas Inspecciones:

- a) Conocer de los asuntos o negocios que les asignen la ley, las ordenanzas y los acuerdos de los Concejos.
- b) Conocer, en primera instancia, de las contravenciones especiales a que se refiere el Decreto-ley número 522 de 1971. La segunda instancia de estas contravenciones se surte ante el correspondiente Alcalde o funcionario que haga sus veces para estos efectos.
- c) Conocer, en única instancia, de las contravenciones comunes ordinarias de que trata el Decreto-ley 1355 de 1970, excepción hecha de las que competen a la Policía Nacional.
- d) Ejercer las demás funciones que les deleguen los Alcaldes.

³¹ <http://www.ubaque-cundinamarca.gov.co/alcaldia/organigrama>

³² ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:

(...)

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio <sic>. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. (...)”

En asunto similar, se ha pronunciado el Consejo de Estado³³ al decir que:

“(…) El presente asunto se plantea entre dos autoridades que pertenecen al mismo municipio y que se encuentran sometidas, por lo tanto, a la jurisdicción del mismo tribunal administrativo, quien sería el competente, en principio, para resolver el supuesto conflicto. Sin embargo, una de ellas – a Alcaldía – es superior jerárquico de la otra – la inspección de Policía – dentro de la misma entidad territorial (Municipio de San Vicente de Chucurí), por lo que no se cumple tampoco, por este aspecto uno de los presupuestos necesarios para que se configure un conflicto de competencias administrativas que pueda ser resuelto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En efecto, según lo dispuesto en el organigrama de la Alcaldía de San Vicente de Chucurí y en el artículo 329 de la Ordenanza No. 017 de 27 de agosto de 2002 “por la cual se expide el nuevo Código de Policía para el Departamento de Santander” a los alcaldes municipales del departamento les compete “(a)actuar como jefe de policía en el territorio de su jurisdicción”. Por lo tanto, la Inspección de Policía de San Vicente de Chucurí es una dependencia del municipio, situación que la sitúa en una posición de subordinación jerárquica dentro de la organización administrativa de dicha entidad. De todo lo anterior resulta que los empleados de la Inspección de Policía son servidores públicos del orden territorial, perteneciente a una sola estructura administrativa y dependientes del Alcalde.

Aclara la Sala que lo anterior no significa, sin embargo, que la Inspección de Policía carezca de autonomía funcional para el cumplimiento de las funciones que la ley y las normas locales le asignen ni que el Alcalde municipal pueda actuar por fuera de las disposiciones legales y municipales o de los procedimientos debidamente establecidos, pero no puede desconocerse que el presunto conflicto de competencias, en el evento de que realmente existiera, se daría entre las autoridades del mismo municipio (conflicto intra – orgánico), por lo cual tendría que resolverse internamente, de acuerdo con los procedimientos que establezca la ley, el Código de Policía Local, las demás disposiciones territoriales y el principio de jerarquía. (…)”

Si bien se observa en la sentencia de tutela de 16 de agosto de 2019, que el Juzgado Primero Promiscuo de Choachí tuvo en consideración para adoptar la decisión el escrito SJ/DCEJ de 5 de abril de 2019, emitido por la Oficina Jurídica de la Gobernación de Cundinamarca en la que se sugirió verificar la posibilidad que con fundamento en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 se promoviera proceso de determinación de competencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que conminó al

³³ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Exp. 11001030600020160008800. Sentencia de 18 de julio de 2016. Referencia: Presunto conflicto negativo de competencias suscitado entre la Inspección de Policía de San Vicente de Chucurí (Santander) y la Alcaldía Municipal de San Vicente de Chucurí. Consejero Ponente: Alvaro Namen Vargas.

Municipio de Ubaque para que dispusiera el trámite correspondiente para establecer quien es el competente para conocer y decidir del proceso policivo de amparo a la posesión, bien a través de esta Corporación como lo sugirió la Dirección de Estudios Jurídicos de la Gobernación de Cundinamarca, no era este el trámite correspondiente.

Si bien los numerales 3º y 4º del artículo 198 de la Ley 1801 de 2016, señalan como autoridades de policía para conocer y dar solución a los conflictos de convivencia ciudadana a los Alcaldes y los Inspectores de Policía, es lo cierto que, debía tener en consideración el Alcalde Municipal la regulación especial traída por los artículos 76 y ss de la Ley 1801 de 2016 para los casos de perturbación a la posesión como se trata el proceso 003/2017.

Por lo anterior, le correspondía al Alcalde Municipal de Ubaque, en caso de considerarlo pertinente, declarar la falta de competencia y ordenar la devolución de la querella a la Inspección de Policía del mismo Municipio para darle continuidad al proceso o adoptar la decisión correspondiente.

Sin embargo, en tanto que el Alcalde Municipal de Ubaque no ha proferido decisión sobre la falta de competencia, es lo cierto que ésta autoridad, en aras de satisfacer el acceso debido a la administración de justicia, asignará competencia al Inspector de Policía Municipal de Choachí para que asuma el conocimiento de la querella policiva.

Por lo expuesto, **EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: ASÍGNASE competencia para conocer de la Querella Policiva al Inspector de Policía Municipal de Choachí – Cundinamarca Ad – hoc, radicada el 6 de

marzo de 2017 ante la Inspectoría de Policía de Choachí, como Proceso policivo de perturbación a la posesión No. 003/2017 en contra de la señora Adoraida Torres Onofre.

SEGUNDO.- CONMÍNASE al Alcalde Municipal de Choachí Cundinamarca, Doctor Carlos Alberdi Velásquez Garzón, para que en el término de tres (3) días a la comunicación de la presente providencia, designe como Inspector de Policía Ad – Hoc a un abogado de la planta de personal de la Alcaldía Municipal, para el conocimiento del proceso en primera instancia, en consideración a la aceptación de la recusación, adoptada por Alcalde Ad Hoc, formulado contra la titular del despacho doctora Natalia Rivera Pulido, a quien se separa del conocimiento del caso.

SEGUNDO: Por Secretaría **DEVUÉLVASE** el expediente a la Alcaldía Municipal de Ubaque para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Discutido y aprobado en sesión realizada en la fecha, según Acta No.



FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA
Magistrado



CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO
Magistrada



ELIZABETH CRISTINA DAVILA PAZ
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-41-000-2019-00861-00
Demandante: CRISTIAN STERLING QUIJANO LASSO
Demandado: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y OTRO
Medio de control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS
Asunto: REQUERIMIENTO

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 174 cdno. ppal. no. 1) el despacho advierte lo siguiente:

1) A través de auto de 23 de febrero de 2021 se decretaron pruebas en el proceso de la referencia y en el numeral 3 del acápite denominado *“PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE ACTORA”* se ofició al Ministerio de Justicia y del Derecho para que *“remita con destino al proceso los estudios y proyectos para descongestionar la carga laboral que tienen los juzgados administrativos de la ciudad de Popayán (Cauca)”*.

2) Por medio de memorial allegado electrónicamente el 19 de mayo de 2021 el Director de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho manifestó que dicha cartera ministerial no ha adelantado estudios ni proyectos para descongestionar la carga laboral que tienen los juzgados administrativos de la ciudad de Popayán (Cauca) toda vez que, los estudios y proyectos referidos no son competencia del Ministerio de Justicia y del Derecho sino del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3) Conforme lo anterior y en orden a dar pleno cumplimiento al numeral 3 del acápite denominado *“PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE ACTORA”* del auto de 23 de febrero de 2021 el despacho dispone lo siguiente:

Por secretaría **requiérase** al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que dentro de término perentorio de cinco (5) días contados a partir del recibo de la correspondiente comunicación den cumplimiento a lo ordenado en el numeral 3 del acápite denominado “*PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE ACTORA*” del auto de 23 de febrero de 2021, en el sentido de remitir con destino al proceso de la referencia los estudios y proyectos adelantados para descongestionar la carga laboral que tienen los juzgados administrativos de la ciudad de Popayán (Cauca) dado que, si bien el Ministerio de Justicia y del Derecho allegó respuesta al requerimiento realizado esta no cumple con el fin específico de la prueba, para el efecto por secretaría **remítanse** copias de la providencia de 23 de febrero de 2021 (fls. 117 vlto. cdno. ppal. no. 1), de la respuesta allegada por el Ministerio de Justicia y del Derecho (fls. 172 y 173 *ibidem*), de la demanda y de sus anexos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Ponente
(firmado electrónicamente)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma electrónica SAMAI, en consecuencia se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

Bogotá DC, once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Magistrado Ponente:	FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente:	25000-23-41-000-2019-00937-00
Demandante:	IAC GPP GESTIÓN INTEGRAL EN LIQUIDACIÓN
Demandado:	MINISTERIO DEL TRABAJO
Referencia:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto:	TRASLADO PARA ALEGACIONES DE CONCLUSIÓN

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 117 cdno. ppal.) se observa lo siguiente:

1) En audiencia inicial de 16 de junio de 2021 se concedió el término de cinco (5) días hábiles para que el Ministerio de Trabajo de cumplimiento íntegro al auto admisorio de la demanda en el sentido de allegar al expediente copia de la totalidad de los antecedentes administrativos de los actos demandados.

Al respecto se tiene que en atención al anterior requerimiento la referida cartera ministerial allegó el 17 de junio de 2021 los antecedentes administrativos los cuales se encuentran contenidos en un disco compacto visible en el folio 116 del cuaderno principal del expediente, de esta manera se deja constancia que fueron incorporados al expediente esos precisos documentos los cuales una vez allegados quedaron a disposición de las partes y de igual forma fueron enviados a las direcciones de correo electrónico suministradas para tal fin (fls. 117 y 118 cdno. ppal. no. 1).

2) Por lo anterior teniendo en cuenta que no existen pruebas por practicar y al considerarse innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento consagrada en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, **correse** traslado a las partes para presentar escrito de alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil

Exp. 25000-23-41-000-2019-00937-00
Actor: IAC GPP Gestión Integral en liquidación
Nulidad y restablecimiento del derecho

siguiente a la notificación de esta providencia, término dentro del cual el señor agente del Ministerio Público también podrá presentar concepto en caso de que lo considere pertinente. Una vez vencido el término anterior, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes se proferirá la sentencia en la medida de las posibilidades reales con que cuenta actualmente este Tribunal dadas las condiciones existentes de personal y de logística que involucran la capacidad real de respuesta del despacho y de la Sala de Decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Ponente
(firmado electrónicamente)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma electrónica SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUB SECCIÓN B**

Bogotá DC, doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Magistrado Ponente:	FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente:	25000-23-41-000-2019-01062-00
Demandante:	AVENIDA CONSTRUCCIONES SAS
Demandado:	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
Medio de control:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto:	CONTROL DE LEGALIDAD – RECHAZO PARCIAL DE PRETENSIONES

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 94 cdno. ppal.) surtido el término de traslado de la demanda la Sala ejerce control de legalidad en esta etapa procesal y advierte lo siguiente:

1) Mediante auto de 23 de febrero de 2021 (fls. 71 a 75 cdno. ppal.) se admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la Avenida Construcciones SAS en contra de la Secretaría Distrital de Planeación con el fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución número 0948 de 12 de junio de 2019, por la cual se decidió un recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la licencia de construcción número LC 11001-4019-0320 de 1o de febrero de 2019 expedida por la Curadora Urbana 4 de Bogotá, y la Resolución número 1999 de 2 de octubre de 2019 que resolvió una solicitud de revocatoria directa de la Resolución número 948 de 12 de junio de 2019, ambas proferidas por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá DC.

2) El auto admisorio de la demanda fue notificado personalmente a la entidad demandada el 9 de marzo de 2021 (fls. 80 y 81 cdno. ppal.) y el 26 de mayo de 2021 la Secretaría Distrital de Planeación allegó el escrito de contestación de la demanda (fls. 92 y 93 cdno. ppal.).

CONSIDERACIONES:

1) En primer lugar, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 es deber del juez ejercer un control de legalidad una vez agotada cada etapa del proceso con el fin de sanear los vicios que acarrearán nulidades, al respecto dicha norma dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 207. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrearán nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes.” (negritas adicionales)

2) En esos términos revisado el expediente la Sala de oficio advierte que en el presente asunto se configura parcialmente la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda por lo siguiente:

a) El Consejo de Estado¹ ha precisado que el acto que resuelve desfavorablemente la solicitud de revocatoria directa no es susceptible de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo debido a que no genera una situación jurídica nueva o distinta a la del acto administrativo que se solicita revocar directamente, por lo que este no tiene recursos y si se niega no constituye un acto administrativo definitivo en la medida en que no hace parte de la vía gubernativa, punto sobre el cual en auto de 29 de octubre de 2018², expediente 2015-00115-00, CP Hernando Sánchez Sánchez se expuso lo siguiente:

“Sobre el tema, esta Corporación ya se ha pronunciado en diferentes decisiones judiciales, en las que ha sostenido, de manera reiterada, que los actos administrativos que niegan una solicitud de revocatoria directa no tienen control jurisdiccional alguno debido a que los mismos no reviven los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, criterio que coincide con el adoptado en el auto de 6 de agosto de 2018, impugnado.

En efecto, al no contener una manifestación de voluntad de la administración que incluya nuevas decisiones en relación con el acto definitivo, el que niega la solicitud de revocatoria directa del mismo no tiene control jurisdiccional. En este caso la Resolución 56409 de 2014

¹ Auto de 25 de abril de 2019, exp. 2018-00330-01, Sección Primera, CP Oswaldo Giraldo López.

² Auto de 29 de octubre de 2018, exp. 2015-00115-00, Sección Primera, CP Hernando Sánchez Sánchez.

en nada cambió la negativa de conceder la patente decidida en las Resoluciones 42278 y 66536 de 2013, expedidas por la SIC.”
(negrillas adicionales).

No obstante, esa situación no se predica si la revocatoria directa modifica total o parcialmente el acto dado que en este evento se estaría emitiendo un pronunciamiento no contemplado en el acto inicial que definió la actuación administrativa y que altera una situación jurídica ya existente, evento excepcional este otro que sí es susceptible de control jurisdiccional por tratarse de una nueva situación jurídica de modificación de una preexistente.

b) En el presente asunto la parte actora en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demanda la Resolución número 0948 de 12 de junio de 2019 por la cual se decidió un recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la licencia de construcción número LC 11001-4019-0320 de 1o de febrero de 2019 expedida por la Curadora Urbana 4 de Bogotá, y la Resolución número 1999 de 2 de octubre de 2019 por la cual se resolvió una solicitud de revocatoria directa de la Resolución no. 948 de 12 de junio de 2019, ambas proferidas por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá.

c) Al respecto se advierte que la Resolución número 1999 de 2 de octubre de 2019 no es un acto administrativo susceptible de control judicial debido a que con ella que se decidió no acceder a la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 948 de 12 de junio de 2019, por lo que no es legalmente procedente el control de esa decisión debido a que no crea ninguna situación jurídica nueva o distinta a la contenida en la Resolución 948 de 2019 (acto que sí es demandable), en esa medida se declarará parcialmente probada la excepción previa de inepta demanda y en consecuencia se rechazará la pretensión de nulidad de la Resolución número 1999 de 2019 contenida en el ordinal segundo del acápite de las pretensiones de la demanda.

3) Por otro lado, se advierte que la contestación de la demanda por la Secretaría Distrital de Planeación es extemporánea toda vez que el auto admisorio de la demanda fue notificado personalmente el día 9 de marzo de 2021 (fls. 80 y 81 cdno. ppal.), por lo que el término de traslado de la demanda de 30 días comenzó a transcurrir luego de los 2 días del envío del mensaje de datos al buzón de la entidad demandada (inciso 4 del artículo 199

de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021 en consonancia con el inciso 3 artículo 8 del Decreto 806 de 2020), es decir, a partir del 12 de marzo de 2021 y finalizaba el 30 de abril de 2021, tal como se corrobora igualmente en la contabilización de términos contenida en el informe secretarial visible en el folio 91 *ibidem*, no obstante el 26 de mayo de 2021 la Secretaría Distrital de Planeación allegó electrónicamente el escrito de contestación de la demanda 17 días hábiles después de fenecido el término de traslado, por lo tanto se tendrá por no contestada la demanda por parte de dicha entidad.

4) Finalmente, en relación con el escrito enviado por la parte actora el 18 de junio de 2021 (fls. 95 a 97 cdno. ppal.) a través del cual pone en conocimiento que la parte demandada no dio cumplimiento al deber procesal consagrado en el artículo 3 del Decreto 806 de 2020 en consonancia con el numeral 14 del artículo 78 de la Ley 1564 de 2012 por cuanto no le fue enviada la contestación de la demanda y, además solicita el enlace electrónico o “link” del expediente digital se pone de presente que, sin perjuicio de que la demanda se contestó de manera extemporánea, la Secretaría Distrital de Planeación no envió dicho escrito a la parte actora por lo que se le instará para que en lo sucesivo dé cumplimiento a ese preciso deber procesal que le asiste como parte del proceso.

En relación con la copia digitalizada del expediente se informa que el proceso de la referencia es de formato **físico documental** por lo que no se cuenta con copia digital del expediente, de modo que en el evento de querer acceder a piezas procesales se reitera especialmente lo preceptuado en el artículo 4 del Decreto 806 de 2020 conforme al cual las partes deberán colaborar proporcionando las piezas procesales que se encuentren en su poder, todo ello en concordancia con el deber procesal de las partes y sus apoderados consagrado en el artículo 3 de esa misma norma, lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de la consulta física del proceso por las partes en la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal en los días, horarios, términos, condiciones y protocolos de bioseguridad señalados en el Acuerdo No. CSJBTA20-96 de 2 de octubre de 2020 expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B,**

RESUELVE:

1º) De oficio **declárase parcialmente probada** la excepción previa de inepta demanda, en consecuencia **recházase** la pretensión de nulidad de la Resolución no. 1999 de 2019 contenida en el ordinal segundo del acápite de las pretensiones de la demanda.

2º) **Tiénese** por no contestada la demanda por parte de la Secretaría Distrital de Planeación por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3º) **Ínstase** a la Secretaría Distrital de Planeación para que en lo sucesivo dé cumplimiento al deber procesal consagrado en el artículo 3 del Decreto 806 de 2020 so pena de adoptar medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

4º) Cumplido lo anterior **devuélvase** el expediente al despacho para continuar con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Discutido y aprobado en sesión de Sala realizada en la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
(firmado electrónicamente)

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN
Magistrado
(firmado electrónicamente)

ÓSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Magistrado
(firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados integrantes de la Sala de Decisión de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma digital SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN “A”

Bogotá D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Magistrada Ponente: ELIZABETH CRISTINA DÁVILA PAZ

Referencia: Exp.Nº. 250002341000201901063-00

Demandante: CORPORACIÓN COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES-RED PAPAZ

Demandado: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y OTROS

MEDIO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

Asunto: Resuelve medida cautelar

CUADERNO DE MEDIDA CAUTELAR (3)

Antecedentes

Procede el Despacho a resolver la medida cautelar solicitada por la parte actora mediante escrito allegado el día 19 de mayo de 2021.

Las medidas que se solicitan son las siguientes:

- “1. Ordenar a MINSALUD ajustar el Proyecto de Resolución para que establezca un término no mayor a seis (6) meses para que el etiquetado frontal de advertencia empiece a regir a partir de su promulgación de la norma.
2. Ordenar a MINSALUD ajustar el Proyecto de Resolución, de forma que adopte el sistema de etiquetado que se apoye en la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés como lo establece el Relator Especial para el Derecho Humano a la Salud, y que presente un informe a este Despacho en el que soporte lo anterior.
3. Ordenar a MINSALUD que tenga en cuenta las peticiones comentarios y aportes de las organizaciones de la sociedad civil y en especial las presentadas por RED PAPAZ y se pronuncie sobre las razones, fundadas en la evidencia científica.”.

Mediante auto del 25 de mayo de 2021, se ordenó a la Secretaría de la Sección correr traslado de la medida cautelar, conforme a lo dispuesto por el artículo 110 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 233 del C.P.A.C.A.

Fundamentos de la medida cautelar

La parte actora señala lo siguiente

*“El 12 de enero de 2021, este Despacho negó las medidas cautelares solicitadas por **RED PAPAZ** y que contaron con la coadyuvancia del Procurador Judicial para la Infancia, Adolescencia y la Familia, Oswaldo Henry Zárate, por estimar que no había peligro en la mora, debido a que el*

MINSALUD había realizado una serie de manifestaciones en la audiencia de pacto de cumplimiento que en criterio de este Tribunal evidenciaban avances en el proceso de regulación, entre ellas la reducción del período de transición para la entrada en vigencia de la norma de dieciocho (18) a seis (6) meses. No obstante, el 16 de febrero de 2021, se publicó en la plataforma ePing de la Organización Mundial del Comercio (**OMC**) el Proyecto de Resolución que honra lo pactado entre el Gobierno Nacional y la industria de los productos comestibles ultraprocesados debido a que elimina por completo los avances reconocidos por este Despacho, consistentes en la reducción del tiempo de adopción e implementación de la normativa, y en la modificación de la figura del etiquetado, debido a que el círculo se asocia como un sello de calidad.

Teniendo en cuenta que la consulta internacional del proyecto de resolución inició el 16 de febrero de 2021 y terminó el 17 de abril de 2021, es altamente probable que **MINSALUD** pueda promulgar la norma en los próximos meses. Por lo tanto, es apremiante tomar medidas cautelares de urgencia para evitar que se expida un proyecto de resolución deficiente, que no proteja de forma adecuada los derechos de los consumidores, y de manera especial de **NNA**.

Las medidas cautelares que a continuación refiero resultan esenciales para asegurar la urgente y debida protección del derecho colectivo a la salubridad pública que se está violando actualmente debido a las actuaciones de mala fe del **MINSALUD** al enviar a consulta internacional un proyecto de etiquetado que retrocede en los avances reconocidos por el Tribunal y pretenden la adopción de una regulación inmoral, producto de un acuerdo inconstitucional entre el regulador y el regulado para burlar la protección de los derechos e intereses en juego.”.

Argumentos de Alpina Productos Alimenticios S.A.

Mediante correo electrónico la apoderada de Alpina Productos Alimenticios, se pronunció frente a la medida cautelar solicitada, en el sentido de solicitar que negar las peticiones cautelares con base en los siguientes argumentos.

1. Nuevamente las medidas cautelares solicitadas por la parte accionante tienen vocación de reformar las pretensiones de la demanda principal, lo cual es improcedente.
2. Las nuevas medidas cautelares solicitadas son las mismas que solicitó la accionante con la petición de 24 de septiembre, reiteradas mediante memorial de 1 de octubre y 14 de diciembre de 2020, resueltas por auto del 16 de diciembre de 2020, las cuales fueron negadas por el Tribunal.
3. La nueva solicitud de medida cautelar no cumple con el precedente jurisprudencial del H. Consejo de Estado para decretar cautelas previamente negadas.
4. La nueva solicitud cautelar no cumplió con la carga probatoria sobre la determinación del acaecimiento de un daño inminente, la puesta en peligro, la

amenaza o la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Argumentos del Ministerio de Salud y Protección Social

Mediante correo electrónico, la apoderada del Ministerio de Salud y Protección Social describió traslado de la medida cautelar solicitada por Red Papaz en el sentido de solicitar al Despacho que se nieguen las mismas, por cuanto no concurren los requisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley 472 de 1998. Además, por las siguientes razones.

En primer lugar, hace una precisión previa, en el sentido de indicar que la solicitud elevada por la parte actora no tiene carácter urgente y por lo tanto no tiene vocación de prosperidad, ya que una de las características para que el Despacho pueda decretar la medida cautelar es que, de no otorgarse la misma, se cause un perjuicio irremediable, situación que no se vislumbra en el presente caso.

Con respecto a las pretensiones de la medida cautelar señala lo siguiente.

“1. Ordenar a MINSALUD ajustar el proyecto de resolución para que establezca un término de seis (6) meses para que el etiquetado frontal de advertencia empiece a regir.”.

Con respecto a esta solicitud, el Ministerio de Salud y Protección Social señala que los tiempos de implementación de la entrada en vigencia del reglamento técnico se establecieron, de acuerdo con los resultados del Análisis de Impacto Normativo; de acuerdo con dichos tiempos, el sector productivo manifestó que se tomarían aproximadamente 18 meses para el desarrollo de una nueva etiqueta, término que comprende estudios de impresión, de consumidores, plataformas, nuevos envases, análisis bromatológicos, entre otros.

“2. Ordenar a MINSALUD ajustar el proyecto de resolución, de forma que adopte el sistema de etiquetado que se apoye en la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés como lo establece el Relator Especial para el Derecho Humano a la Salud, y que presente un informe a este Despacho en el que soporte lo anterior.”.

Al respecto, se señala por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, que la propuesta normativa fue el resultado de un proceso riguroso en cuanto a la mejor evidencia científica, para lo cual se soportó en la necesidad de contar con una etiqueta más clara y comprensible para el consumidor que pueda solucionar la problemática encontrada en el Análisis de Impacto Normativo, por lo que cada una de las normas propuesta fue revisada con el equipo técnico del Ministerio de Salud y Protección Social.

“4. Ordenar a MINSALUD que tengan en cuenta las peticiones y aportes de organizaciones de la Sociedad Civil y en especial, las presentadas por REDPAPAZ y se pronuncie sobre las razones fundadas en la evidencia científica.”

El Ministerio de Salud indicó que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 270 de 2017 que modificó el Decreto 1081 de 2015, procede a recoger las observaciones y comentarios de la ciudadanía y grupos de interés, realizando un análisis de las propuestas, en el instrumento definido para tal fin.

Es de resaltar que el proyecto tuvo en cuenta las recomendaciones de las organizaciones civiles, no obstante, toda vez que las solicitudes tuvieron que ver con la forma del sello y el modelo de perfil, el cual fue socializado a finales del año 2019 y sobre el cual se firmaron los acuerdos de decálogo con la sociedad civil, la industria, el Ministerio de Comercio y la Consejería de la Presidencia de la República, es importante aclarar que estos criterios no se podían cambiar, siendo un compromiso adquirido por las partes que firmaron tales acuerdos.

Consideraciones

El artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que *“(e)n todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda **o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada**, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo [...]*”, sin que ello signifique prejuzgamiento (Destacado por el Despacho).

Quiere decir lo anterior, que no basta con la simple solicitud de decreto de una medida cautelar, sino que esta **debe estar sustentada**, bien sea en la demanda o en escrito aparte, lo cual constituye una carga procesal mínima para quien solicita la aplicación de una medida cautelar y que, a juicio del Despacho, no constituye una carga excesiva porque los solicitantes deben explicar de forma suficiente los argumentos que la sustentan.

El Despacho considera que la exigencia de una argumentación al momento de solicitar la declaratoria de una medida cautelar en un caso concreto constituye una garantía del derecho de contradicción y de defensa de la parte contraria, pues esta, dentro del término de traslado de la medida cautelar, debe desplegar su capacidad procesal para defenderse de los argumentos específicos puestos de presente por

el solicitante de la cautela.

Obviar el requisito de una base argumentativa en la solicitud de la medida vulneraría los derechos de la contraparte porque esta última se vería precisada a desplegar razones de defensa contra los reclamos indeterminados de quien solicita una decisión previa.

En este contexto, cabe señalar que el parágrafo del artículo 229 de la misma ley se establece que la regulación en torno a las medidas cautelares, también se aplica a los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos.

Por su parte, el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, señala que el juez, de oficio o a petición de parte, podrá decretar las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado.

“ARTÍCULO 25. MEDIDAS CAUTELARES. Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar, **debidamente motivadas**, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. En particular, podrá decretar las siguientes:

- a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando;
- b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado;
- c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas;
- d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo.

PARÁGRAFO 1o. El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el curso del proceso.

PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará un término perentorio. Si el peligro es inminente podrá ordenar que el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a costa del demandado” (Destacado por el Despacho).

Conforme a lo anterior, el objetivo principal de la medida cautelar en el trámite del Medio de Control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos es el de evitar que se ocasionen mayores agravios o perjuicios a los derechos que protege

este tipo de acción.

Sobre los requisitos de la medida cautelar, el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé.

“ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:

1. **Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.**
2. **Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.**
3. **Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.**
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
 - a) **Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o**
 - b) **Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios [...]** (Destacado por el Despacho).

En relación con este aspecto, el H. Consejo de Estado ha considerado.

“El decreto de una de tales medidas, o de otras distintas a éstas, **pero que resulten procedentes para prevenir un daño inminente a los derechos e intereses colectivos o para hacer cesar el que se hubiere causado** a

Exp. No. 250002341000201901063-00
 Demandante: CORPORACIÓN COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES-RED PAPAZ
 Demandado: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y OTROS
 MEDIO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

aquellos, **debe soportarse lógicamente en elementos de prueba idóneos y válidos que sean demostrativos de tales circunstancias**; es precisamente la existencia de tales elementos de juicio lo que permitirá motivar debidamente la decisión del juez cuando disponga una medida cautelar para la protección de tales derechos”¹ (Destacado por el Despacho).

Conforme a lo anterior, se concluye que para el decreto de la medida cautelar es indispensable determinar, a través de los medios probatorios procedentes, la existencia de un daño o agravio o la amenaza al derecho colectivo invocado, pues de lo contrario la solicitud carecería de fundamento.

Finalmente, el Despacho recuerda que la Sala Plena del Consejo de Estado, en providencia de 17 de marzo de 2015², precisó cuáles son los criterios que con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 debe tener en cuenta el Juez para el decreto de medidas cautelares.

“La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en **el fumus boni iuris** y **periculum in mora**. **El primero**, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la **posible existencia de un derecho**. **El segundo**, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de **un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho**” (Destacado por el Despacho).

El criterio jurisprudencial anterior, fue complementado en providencia de 13 de mayo de 2015³, en la cual la misma Corporación sostuvo.

“Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que **en el escenario de las medidas cautelares**, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, **además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de**

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, providencia de 31 de marzo de 2011, rad. No. 19001 2331 000 2010 00464 01(AP).

² Expediente núm. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez.

³ Expediente núm. 2015-00022, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Exp. No. 250002341000201901063-00
Demandante: CORPORACIÓN COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES-RED PAPA
Demandado: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y OTROS
MEDIO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad” (Destacado por el Despacho).

Quiere decir lo anterior, que al momento de entrar a analizar si procede el decreto de una medida cautelar en el trámite del Medio de Control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos, en los términos de las normas y fallos judiciales precedentes, es necesario examinar los siguientes aspectos.

(i) Cuando se trate de la solicitud de decreto de medida cautelar a petición de parte, esta debe solicitarse en la demanda o en escrito aparte y debe estar debidamente sustentada.

(ii) La medida debe tener por finalidad prevenir un daño inminente a un derecho o hacer cesar el que se hubiere causado. Ello significa que en la solicitud debe encontrarse probada la existencia de una amenaza real o de materialización de la vulneración a un derecho (*fumus boni iuris*).

(iii) Se debe comprobar que el decreto de la medida cautelar es necesario para garantizar los derechos objeto del litigio y que no es posible esperar a que la sentencia resuelva de fondo el asunto porque el transcurso del tiempo generaría un daño a los bienes jurídicos presuntamente vulnerados o la imposibilidad de satisfacción de un derecho (*periculum in mora* y estudio de ponderación).

En conclusión, conforme a las normas y a la interpretación judicial transcritas, el Despacho deberá establecer si la solicitud de medida cautelar presentada por el actor popular cumple con los elementos antes mencionados.

Igualmente, el Despacho destaca que el análisis por realizar en esta etapa procesal está limitado a los argumentos expuestos por el actor popular y a las pruebas que ha aportado, porque cualquier análisis extensivo vulneraría los derechos de contradicción y de defensa de las entidades accionadas.

Análisis del Despacho.

El Despacho anticipa que no accederá a la solicitud de medida cautelar pedida por la parte actora, por las siguientes razones.

En primer orden y como se señaló en el auto del 25 de mayo de 2021, mediante el cual se corrió traslado de la solicitud de medida cautelar, las solicitudes incoadas en el escrito de 19 de mayo de 2021, son similares a las de los escritos de 24 de

septiembre y 14 diciembre de 2020 y que fueron resueltas de manera negativa por el Despacho.

En segundo lugar, cabe señalar que como fue planteado por los apoderados de Alpina Productos Alimenticios S.A. y del Ministerio de Salud y Protección Social, si bien se trata de medidas cautelares, las mismas difieren de las pretensiones planteadas en la demanda.

Esto, por cuanto en la demanda se solicitó que el Ministerio de Salud y Protección Social expidiera una reglamentación de etiquetado, que guardara relación con las recomendaciones de la OPS y que advirtiera, de manera clara, cuándo un producto ultra procesado es alto en azúcar, sodio o grasas saturadas.

A diferencia de lo anterior, en las pretensiones de la nueva medida, se advierte una adición a las pretensiones de la demanda, figura improcedente en este medio de control; y, además, se incumple con la previsión del artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, según el cual *“las medidas cautelares (..) deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.”*., advertencia que se hizo en el auto del 16 de diciembre de 2019.

Observa el Despacho que además de que con esta solicitud se reiteran las pretensiones de otras solicitudes de medida cautelar, los argumentos varían en el sentido de indicarse que es probable que se adopte una regulación inmoral, producto de un acuerdo inconstitucional entre el regulador y regulado; no obstante esto configura una apreciación subjetiva por parte de la demandante que no da lugar a decretar ninguna medida cautelar, sobre todo si se tiene en cuenta que las pretensiones de la demanda y lo pactado por las partes en la audiencia de pacto de cumplimiento, se ha venido desarrollado por las entidades demandadas, sobre todo por el Ministerio de Salud y Protección Social en lo que tiene que ver con la implementación de una regulación en el etiquetado de las comidas.

Además de lo anterior, debe advertirse que a la fecha en que se profiere este auto, el Congreso de la República expidió la denominada Ley de la comida chatarra, la cual, deberá ser analizada en el fondo del asunto cuando se profiera sentencia y determinar si con la misma, se satisfacen las pretensiones de la demanda.

De otro lado, al revisarse la solicitud de la medida cautelar, no se acredita por parte de la accionante, un perjuicio irremediable que deba ser cesado a través de la adopción de una medida cautelar.

Exp. No. 250002341000201901063-00
Demandante: CORPORACIÓN COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES-RED PAPA
Demandado: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y OTROS
MEDIO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

Finalmente, se precisa que de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 229 del C.P.A.C.A., esta decisión no implica prejuzgamiento.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “A”**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO.- NIÉGASE la solicitud de medida cautelar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- En firme esta decisión, por Secretaría, **INTÉGRESE** el cuaderno de medida cautelar con el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ELIZABETH CRISTINA DÁVILA PAZ
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Magistrado Ponente: OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Expediente: No. 25000-23-41-000-2020-00310-00
Demandante: GUILLERMO ORJUELA MARTÍNEZ
Demandados: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
Referencia: RECURSO DE INSISTENCIA
Tema: AUTO DE TRAMITE – REQUIERE

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 15 cdno. incidente), el Despacho observa lo siguiente:

1. Mediante memorial radicado el 15 de enero de 2021 (fls. 1 a 3 vltos. Cdno de incidente), el peticionario del asunto radicó solicitud de apertura de incidente de desacato.
2. Por auto del 29 de enero del año en curso (fl. 4 *Ibídem*), se requirió a la Junta Directiva de Corbastos para que informara sobre el cumplimiento de la orden de acceso parcial a la información solicitada por el peticionario del asunto, dada por sentencia del 14 de mayo de. 2020 (fls. 21 a 39 del cdno. ppal).
3. En ese orden, mediante memorial radicado el 17 de marzo de 2021 (fls. 6 a 14 cdno. incidente de desacato), el señor Hector López, en su calidad de presidente de la Junta Directiva de Corabastos S.A., informó haber cumplido con la orden impartida en el presente trámite de insistencia, en lo que a ellos les compete.
4. Se considera pertinente poner de presente que en fecha de 18 de abril de los corrientes el funcionario encargado del trámite de los recursos de insistencias en el Despacho a mi cargo fue internado a UCI por

padecimiento del virus SARS-COVID-02, quien lamentablemente falleció en fecha de 3 de mayo de 2021.

En ese orden, los procesos a cargo del colaborador del Despacho entraron en un periodo de cuarentena desde el mes de mayo, retomando su sutanciación e impulso procesal en el mes de junio.

En atención al anterior contexto y una vez revisado el expediente, se observa que desde el mes de enero no ha habido ningún pronunciamiento por parte del peticionario del asunto; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012), el juez goza de poderes ordenación e instrucción frente a los procesos a su cargo, el Despacho **dispone** lo siguiente:

Previo a resolver la solicitud de cumplimiento de la sentencia proferida el día 14 de mayo de 2020, por Secretaría **requierase con carácter urgente** al peticionario del asunto, para que en el término de cinco (5) días contados a partir del recibo de la correspondiente comunicación, informe al Despacho si la Junta Directiva de Corabastos o el Fondo de Desarrollo de Proyectos, le entregó la información ordenada en la providencia en comentario.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS

Magistrado

Firmado Electrónicamente

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado ponente quien integra la Sala de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1487 de 2011.



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B**

AUTO INTERLOCUTORIO N° 2021-08-422 AP

Bogotá D.C., Cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

EXP. RADICACIÓN:	25000234100020210054700
MEDIO DE CONTROL:	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS
ACCIONANTE:	XIMENA ELIZABETH MOJICA BALLÉNY OTRO
ACCIONADO:	MINISTERIO DE CULTURA
TEMAS:	APROBACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
ASUNTO:	RECHAZO DE DEMANDA POR NO SUBSANACIÓN

MAGISTRADO PONENTE: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN

Vista la constancia secretarial que antecede, en la que se evidencia que el extremo actor guardó silencio sobre la subsanación, procede la Sala a pronunciarse sobre el rechazo de demanda, previos los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Ximena Elizabeth Mojica Ballén y Edilberto Guerrero Ramos presentaron demanda para la protección del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público y del patrimonio cultural de la Nación, toda vez que a su juicio estos son vulnerados por los medios de comunicación al publicar una versión sesgada del actuar de los indígenas quienes en distintas ocasiones han derribado esculturas de distintos personajes históricos como Sebastián de Belalcázar y Gonzalo Jiménez de Quesada.

Adicional a lo anterior, pone en contexto que existen construcciones, edificios, avenidas y calles con nombres alusivos a reconocidos participantes del proceso de la conquista, sin que exista suficiente información sobre la historia precolombina.

Como pretensiones solicita:

“1. Se declare la afectación sobre el patrimonio cultural material e inmaterial precolombino, en lo que respecta a la difusión en condiciones de igualdad y con una debida proporcionalidad de todos los valores de interés cultural de la Nación durante las etapas del proceso de creación de identidad nacional.

2. Se declare la responsabilidad del Ministerio de Cultura y demás autoridades competentes en dicha afectación, por la omisión de sus responsabilidades de respeto y protección.

3. Se ordene al Ministerio de Cultura y demás autoridades que corresponda, asignar de manera igualitaria y diferenciada los espacios y escenarios en la mayoría de las Plazas de gran afluencia pública del país para homenajear y rescatar a través de estatuas, renombrar avenidas, calles y demás expresiones culturales alusivas a su cultura (creencias, organización política y social, arquitectura, medios de producción, iconografía) nuestro verdadero origen histórico e identidad como Nación. De manera tal que este patrimonio indígena sea conocido fácilmente por las generaciones presentes y futuras informadas”

Mediante Auto No. 2021-07-408 del 29 de julio de 2021, el Despacho Sustanciador inadmitió la demanda presentada concediendo el término de tres (3) días a los accionantes para que procedieran a subsanar las deficiencias relativas al incumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 472 de 1998, toda vez que no existía claridad sobre las circunstancias fácticas, la causa pretendí y las conductas (acción u omisión) que se les atribuye en relación a la vulneración de los derechos colectivos vulnerados; no se individualizaban correctamente las entidades demandadas y no se acreditó el agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en el numeral 4 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.

Y finalmente, no se cumplió con la carga impuesta en el artículo 6 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020.

El auto inadmisorio fue notificado en estado el día 30 de julio del año 2021¹, quedando debidamente ejecutoriado, como quiera que el demandante no interpuso recurso alguno.

En ese orden de ideas, el término de tres días otorgado de conformidad con el artículo 20 la Ley 472 de 1998, transcurrió desde el día 24 al 26 de mayo hogaño, sin que el extremo actor se pronunciara sobre el particular, tal y como se evidencia en la constancia secretarial del 3 de junio de 2021 obrante en el archivo onceavo del expediente electrónico, en la que se registra que aquel guardó silencio.

Así las cosas, considerando que la parte accionante, no corrigió los yerros advertidos,

¹ El estado del día 30 de julio de 2021, fue debidamente remitido a los correos electrónicos aportados por los demandantes.

toda vez que transcurrido el término otorgado para subsanarlos, guardó silencio, la demanda será rechazada de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión del artículo 44 de la Ley 472 de 1998, toda vez que la parte demandante no cumplió con la carga procesal que le correspondía y en ese sentido se configura la causal de no subsanación.

No obstante, al tratarse de una acción popular, que no está sujeta a términos de caducidad, adviértase al demandante que puede volver a impetrar el medio de control una vez reúna todos los presupuestos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO.- RECHAZAR la demanda interpuesta por XIMENA ELIZABETH MOJICA BALLÉN Y EDILBERTO GUERRERO RAMOS, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose.

TERCERO.- En firme esta providencia archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZON

Magistrado

Firmado electrónicamente

OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS

Magistrado

Firmado electrónicamente

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado

Firmado electrónicamente

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados que conforman la Sala de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 y conserva plena validez, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999.